

**UNIVERSIDAD DE HUANUCO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**  
**PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



**TESIS**

---

**“LIMITACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA  
INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN  
LA REGIÓN HUÁNUCO, 2018”**

---

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**AUTOR: Vega Ramos, Marvin Juan**

**ASESOR: Cisneros Alvarado, Victor Walter**

**HUÁNUCO – PERÚ**

**2021**

U

D

H



**UDH**  
UNIVERSIDAD DE HUANUCO  
<http://www.udh.edu.pe>

**TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:**

- Tesis ( X )
- Trabajo de Suficiencia Profesional ( )
- Trabajo de Investigación ( )
- Trabajo Académico ( )

**LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:** Desarrollo de estudios en derechos sustantivos y procesales en constitucional, civil, penal, laboral, tributario, administrativo y empresarial

**AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN** (2018-2019)

**CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:**

**Área:** Ciencias Sociales

**Sub área:** Derecho

**Disciplina:** Derecho

**DATOS DEL PROGRAMA:**

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Abogado

Código del Programa: P01

Tipo de Financiamiento:

- Propio ( X )
- UDH ( )
- Fondos Concursables ( )

**DATOS DEL AUTOR:**

Documento Nacional de Identidad (DNI): 48321368

**DATOS DEL ASESOR:**

Documento Nacional de Identidad (DNI): 80152644

Grado/Título: Maestro en derecho y ciencias políticas con mención en: derecho penal

Código ORCID: 0000-0001-8110-882X

**DATOS DE LOS JURADOS:**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Espinoza Cañoli, Ena Armida	Maestro en derecho, con mención en ciencias penales	22425372	0000-0002-5243-1182
2	Aviles Quispe, Abdel	Magister en educación mención en investigación y docencia superior	22519517	0000-0003-4383-5684
3	Dominique Palacios, Luis	Doctor en derecho	01306524	0000-0003-0789-4628

## ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 15:30 horas del día 28 del mes de ENERO del año 2021, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron el Sustentante y el Jurado calificador mediante plataforma virtual Google meet integrado por los docentes:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ➤ Mtra. Ena Armida ESPINOZA CAÑOLI      | : PRESIDENTA         |
| ➤ Mtro. Abdel AVILES QUISPE             | : SECRETARIO         |
| ➤ Mtro. Luis DOMINIQUE PALACIOS         | : VOCAL              |
| ➤ Mtro. Elí CARBAJAL ALVARADO           | : JURADO ACCESITARIO |
| ➤ Mtro. Víctor Walter CISNEROS ALVARADO | : ASESOR             |

Nombrados mediante la Resolución N° 058-2021-DFD-UDH de fecha 25 de enero de 2021, para evaluar la Tesis intitulada: " **LIMITACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA REGIÓN HUÁNUCO, 2018**", presentado por el Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, **Marvin Juan VEGA RAMOS** para optar el Título profesional de Abogado.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) APROBADO por UNANIMIDAD con el calificativo cuantitativo de 15 y cualitativo de BUENO

Siendo las 16:55 horas del día 28 del mes de ENERO del año 2021 los miembros del jurado calificador Ratificados firman la presente Acta en señal de conformidad.

  
Mtra. Ena Armida Espinoza Cañoli  
Presidenta

  
Mtro. Abdel Avilés Quispe  
Secretario

  
Mtro. Luis Dominique Palacios  
Vocal

# UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

## FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

### RESOLUCIÓN N° 058-2021-DFD-UDH

#### Huánuco, 25 de enero del 2021

Visto, la solicitud con ID: 000031, **presentado** por el Bachiller **Marvin Juan VEGA RAMOS** quien solicita se ratifique y se designe a los miembros del Jurado y se señale fecha y hora para sustentar el Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **"LIMITACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA REGIÓN HUÁNUCO, 2018"**;

#### **CONSIDERANDO:**

Que, según Resolución N° 1802-19-DFD-UDH de fecha 12/DIC/19 se nombran Jurados revisores del Informe Final del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) a los docentes Mtra. Ena Armida Espinoza Cañoli, Mtro. Abdel Avilés Quispe y Mtro. Luis Dominique Palacios;

Que, mediante Resolución N° 912-2020-DFD-UDH de fecha 15/DIC/20 se aprueba el Informe Final del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **"LIMITACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA REGIÓN HUÁNUCO, 2018"** del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco;

Que, con Resolución N° 003-21-DFD-UDH de fecha 04/ENE/21 se declara apto al Bachiller para sustentar la tesis.

Que, debido al estado de Emergencia Sanitaria Nacional a consecuencia del COVID-19 la Sustentación de la Tesis se hará de manera virtual cumpliendo con las exigencias del Reglamento de Grados y Títulos;

Estando a lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento General de Grados y Títulos a lo establecido en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 3220; inc. N) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco y la Facultad contemplada en la Resolución N° 795-18-R-CU-UDH de fecha 13/JUL/18 y Resolución N° 001-2021-R-AU-UDH del 05/ENE/21;

#### **SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- RATIFICAR Y DESIGNAR** a los miembros del Jurado calificador de Tesis para examinar al Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco **Marvin Juan VEGA RAMOS**, para optar el Título Profesional de Abogada por la modalidad de Sustentación del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) a los siguientes docentes:

- Mra. Ena Armida ESPINOZA CAÑOLI
- Mtro. Abdel AVILES QUISPE
- Mtro. Luis DOMINIQUE PALACIOS
- Mtro. Elí CARBAJAL ALVARADO
- Mtro. Víctor Walter CISNEROS ALVARADO

**PRESIDENTA**  
**SECRETARIO**  
**VOCAL**  
**JURADO ACESITARIO**  
**ASESOR**

El acto de Sustentación se realizará el día 28 de Enero del año 2021 a horas 3:30 pm, mediante la Plataforma Virtual Google meet.

Regístrese, comuníquese y archívese



## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de investigación va dedicado al artífice de todo esto, Dios por darme la vida, salud y sabiduría a lo largo de mi trayectoria en esta prestigiosa casa universitaria. A mis padres, que son el motor y motivo, sin ellos no hubiera logrado esta meta como estudiante de mi alma mater. A mis maestros, por su tiempo y esfuerzo que dedicaron a compartir sus conocimientos, sin su instrucción profesional no habría llegado a este nivel, quienes al impartir su catedra de tal forma que lo aprendido sea utilizado en la vida real. Y por último a mi familia que de alguna manera contribuyó en la elaboración de este informe final.

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradezco a la Universidad de Huánuco por ser mi alma mater, a la Facultad y al Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, por contar con excelentes docentes. A mi asesor de tesis MG. Victor Walter Cisneros Alvarado, por brindarme su tiempo, dedicación, orientación y asesoramiento durante todo el proceso de investigación, sencillo no ha sido el proceso, pero muchas gracias a las ganas de trasmitirme sus conocimientos y educación logré importantes objetivos como culminar el desarrollo de mi tesis.

## INDICE

DEDICATORIA.....	II
AGRADECIMIENTOS .....	III
INDICE .....	IV
ÍNDICE DE TABLAS .....	VII
ÍNDICE DE GRÁFICOS .....	X
RESUMEN .....	XII
SUMMARY .....	XIII
INTRODUCCIÓN .....	XIV
CAPÍTULO I .....	16
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .....	16
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .....	16
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	18
1.2.1. PROBLEMA GENERAL .....	18
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS .....	18
1.3. OBJETIVO GENERAL .....	18
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	18
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .....	19
1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA .....	19
1.5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA .....	19
1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.....	19
1.5.4. JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL .....	20
1.5.5. JUSTIFICACIÓN LEGAL.....	20
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .....	20
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .....	20
CAPÍTULO II .....	21

MARCO TEÓRICO .....	21
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	21
2.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL .....	21
2.2. BASES TEÓRICAS.....	26
2.2.1. LIMITACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO.....	26
2.2.2. El Ministerio Público .....	37
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES .....	97
2.4. HIPÓTESIS.....	99
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL .....	99
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.....	99
2.5. VARIABLES .....	100
2.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE .....	100
2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE.....	100
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (DIMENSIONES E INDICADORES).....	100
CAPÍTULO III .....	102
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	102
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	102
3.1.1. ENFOQUE.....	102
3.1.2. ALCANCE O NIVEL .....	102
3.1.3. DISEÑO .....	102
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA .....	103
3.2.1. POBLACIÓN .....	103
3.2.2. MUESTRA.....	103
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS..	104
3.3.1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.....	104
3.3.2. PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS.....	105



3.3.3. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.	105
CAPÍTULO IV.....	107
RESULTADOS.....	107
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS. ....	107
4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS.	132
CAPÍTULO V.....	136
DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	136
4.3. PRESENTAR LA CONTRATACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. ....	136
CONCLUSIONES .....	144
RECOMENDACIONES .....	146
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	148
ANEXOS .....	151

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1. Descripción de la limitación en recursos del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	107
Tabla N° 2. Los recursos del Ministerio Público como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	109
Tabla N° 3. Descripción de la limitación en los Peritos del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	110
Tabla N° 4. Los Peritos del Ministerio Público como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	112
Tabla N° 5. Descripción de la limitación en el personal del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	113
Tabla N° 6. El personal del Ministerio Público como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	114
Tabla N° 7. Limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	115
Tabla N° 8. Descripción del delito de Abuso de Autoridad contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	116
Tabla N° 9. Bien jurídico protegido en el delito de Abuso de autoridad contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	117

Tabla N° 10. Descripción del delito de Concusión contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	118
Tabla N° 11. Bien jurídico protegido en el delito de Concusión contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	119
Tabla N° 12. Descripción del delito de Peculado contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	120
Tabla N° 13. Bien jurídico protegido en el delito de Peculado contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	121
Tabla N° 14. Descripción del delito de Cohecho contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	122
Tabla N° 15. Bien jurídico protegido en el delito de Cohecho contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	124
Tabla N° 16. Descripción del delito de Negociación incompatible contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	125
Tabla N° 17. Bien jurídico protegido en el delito de Negociación incompatible contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	126
Tabla N° 18. Descripción del delito de Tráfico de influencias contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	127

Tabla N° 19. Bien jurídico protegido en el delito de Tráfico de influencias contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	128
Tabla N° 20. Descripción del delito de Enriquecimiento ilícito contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	129
Tabla N° 21. Bien jurídico protegido en el delito de Enriquecimiento ilícito contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	130
Tabla N° 22. Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	131
Tabla N° 23. Limitaciones del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018. ....	132
Tabla N° 24. Limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.....	133
Tabla N° 25. Limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.....	134
Tabla N° 26. Limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.....	135

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1. Representación gráfica de los recursos del Ministerio Público como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	109
Gráfico N° 2. Representación gráfica de los Peritos del Ministerio Público como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	112
Gráfico N° 3. Representación gráfica del personal del Ministerio Público como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	114
Gráfico N° 4. Representación gráfica de las limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	115
Gráfico N° 5. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Abuso de autoridad contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	117
Gráfico N° 6. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Concusión contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	119
Gráfico N° 7. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Peculado contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	121
Gráfico N° 8. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Cohecho contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	124

Gráfico N° 9. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Negociación incompatible contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	126
Gráfico N° 10. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Tráfico de influencias contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	128
Gráfico N° 11. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Enriquecimiento ilícito contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018. ....	130
Gráfico N° 12. Representación gráfica de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.....	131

## RESUMEN

La presente investigación tuvo como **objetivo**, determinar las limitaciones del Ministerio Público relacionados en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018. **Método.** Fue un estudio observacional, prospectivo, transversal y correlacional; la muestra lo conformaron 35 trabajadores del Ministerio público específicamente de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios del distrito fiscal de Huánuco, seleccionados probabilísticamente de forma aleatoria, a quienes se les aplicó dos cuestionarios validados y viabilizados. Se realizó el análisis descriptivo y en el análisis inferencial se utilizó la prueba Chi cuadrado para un valor  $p \leq 0,05$  y un nivel de confianza del 95%. **Resultados.** En el análisis en relación a las limitaciones del Ministerio Publico, un 82.9%(29) consideran que si existen limitaciones, así mismo estas limitaciones están relacionado a los recursos, peritos y personal del Ministerio Publico, siendo esos considerados por un [88.6%(31), 88.6%(31) y 82.9%(29)] respectivamente; en tanto, en relación a los delitos los expertos afirmaron en su mayoría [77.1%(27)] que si se presentan estos delitos, al realizar el análisis inferencial de las variables en estudio, se obtuvo un valor calculado de Chi cuadrado es de 91.729 para 48 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ), determinando la existencia de relación entre las mismas. **Conclusión.** Existen limitaciones del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018", siendo la correlación significativa, recomendándose su sostenibilidad.

**Palabras clave:** Limitaciones, Peritos, Investigación, Delitos contra la administración Pública, funcionarios y servidores.

## SUMMARY

The objective of this investigation was to determine the limitations of the Public Ministry related to the investigation of crimes against the public administration committed by officials and servants in the Huánuco Region in 2018. Method. It was an observational, prospective, cross-sectional and correlational study; The sample was made up of 35 workers from the Public Ministry, specifically from the prosecutor's office specializing in corruption crimes of officials of the Huánuco fiscal district, randomly selected probabilistically, to whom two validated and viable questionnaires were applied. Descriptive analysis was carried out and the Chi square test was used for the inferential analysis for a value of  $p \leq 0.05$  and a confidence level of 95%. Results. In the analysis regarding the limitations of the Public Ministry, 82.9% (29) consider that if there are limitations, likewise these limitations are related to the resources, experts and personnel of the Public Ministry, being those considered by [88.6% (31), 88.6% (31) and 82.9% (29)] respectively; meanwhile, in relation to crimes, the experts affirmed for the most part [77.1% (27)] that if these crimes occur, when performing the inferential analysis of the variables under study, a calculated Chi-square value was 91,729 for 48 degrees of freedom and significance of 0.000 ( $p < 0.05$ ), determining the existence of a relationship between them. Conclusion. There are limitations of the Public Ministry that are related to the investigation of crimes against the public administration committed by officials and servants in the Huánuco Region in 2018", the correlation being significant, recommending its sustainability.

**Keywords:** Limitations, Experts, Investigation, Crimes against the Public Administration, officials and servants.



## INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación concluido mediante el presente informe final, lleva por título “Limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los Delitos Contra la Administración Pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región Huánuco, 2018”, consta de una estructura conformada por cinco capítulos, los cuales son: Capítulo I, problema de investigación, en este capítulo se realiza el planteamiento del problema de investigación; Capítulo II, Marco Teórico, en el marco teórico recogemos los antecedentes, las bases teóricas y las definiciones conceptuales de la investigación; Capítulo III, Marco metodológico desarrolla el tipo, nivel, diseño, las técnicas y los instrumentos de investigación; Capítulo IV, resultados, en este capítulo se consigan los resultados de la aplicación de nuestros instrumentos; y por último, el Capítulo V que desarrolla la discusión de resultados a partir de los resultados obtenidos por investigadores consignados en nuestros antecedentes.

Esta investigación se encuentra delimitado bajo los siguientes aspectos, a saber: la descripción del problema, precisa que, dentro del ejercicio de la función constitucional de la persecución de la acción penal por parte de los fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huánuco, existen limitaciones procesales como consecuencia de la falta de elementos o instrumentos idóneos para la correcta investigación de estos delitos contra la administración pública, tales como los recursos, peritos y personal. Estos elementos idóneos afectan directamente la eficiencia y eficacia de la investigación fiscal, que acarrea consigo también la no valoración de elementos de convicción indispensables para determinar la responsabilidad penal del acusado, hecho que limita el avance de las diligencias preliminares de la Etapa de Investigación preparatorio del proceso penal. Considerando ello, hemos visto conveniente formular el siguiente problema general: ¿Cuáles son las limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018? Asimismo, la presente investigación tiene justificación teórica, metodológica, socioeconómica, institucional y legal, pues nos ha

permitido explicar jurídicamente las limitaciones y la repercusión de estas en la investigación fiscal de los delitos contra la administración pública en el Distrito Fiscal de Huánuco, a su vez que servirá como antecedente bibliográfico y una propuesta de reforma institucional y legal; el objetivo general estuvo dirigido a determinar las limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018. Las técnicas empleadas fueron la encuesta y el análisis documental de información sobre resoluciones; la fuente de información fue principalmente documental; durante el desarrollo de la presente no se encontraron limitaciones y arribamos a las siguientes conclusiones: Las limitaciones en estudio describieron tres aspectos: recursos, peritos y personal del Ministerio Público; donde se determinó que los mismos, fueron considerados según los expertos como limitantes en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco en el 2018, en un 82.9%(29). Por otro lado, contrastando las variables en estudio, “limitaciones del Ministerio Público y delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018”; donde el valor calculado de Chi cuadrado es de 91.729 para 48 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que se rechaza la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.

# **CAPÍTULO I**

## **PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

### **1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

Conducir desde su inicio la investigación del delito es una labor encomendada al Ministerio Público, cuyo arduo trabajo tiene por finalidad la persecución del delito, es el defensor de la legalidad que lucha por combatir la corrupción frente a un mal maligno que desestabiliza la sociedad y frena el desarrollo de un país

El Ministerio Público, es la entidad de la administración de justicia encargada de la legalidad de los actos de justicia, y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Código Procesal Penal, son quienes tienen la responsabilidad de la carga de la prueba y dirigir la investigación acusatoria, es decir se constituye en el primer eslabón de los procesos que llevan a cabo al iniciar una denuncia judicial, ya sea que ésta esté interpuesta por una persona natural, por el Sistema de Defensa Jurídica del Estado a través de los procuradores, o por persona jurídica a través de sus apoderados o representados.

El Ministerio Público como entidad pública, su labor está encaminada a buscar el máximo valor público en sus intervenciones, es decir el logro eficaz e eficiente de las acciones que emprende, en este caso la defensa de la legalidad como elemento del Estado de Derecho, pues en el marco del Nuevo Código Procesal Penal, tal como indica Lamas, L. (2015) se espera que los indicadores del plazo razonable de los procesos judiciales disminuyan de 268 días en promedio a menos de 100 para los casos que no implican complejidad en la investigación. (p.32)

En este camino dedicado a la investigación fiscal se presentan situaciones en las cuáles desaceleran y frenan que tiene como consecuencias de modo que no se logran los propósitos y fines que es la persecución del delito.

Este problema va en crecimiento y a la vez evolucionando en una sociedad sin ética y sin valores, dónde las autoridades ya sean funcionarios y servidores buscan provecho propio y así lucrar con el estado llegando a cometer estos delitos.

Este 2018 fue para el Perú un año marcado por diversos episodios de corrupción que lo han convertido quizás en el país más intenso a nivel político desde el inicio del siglo XXI, de la misma manera también no fue ajeno la corrupción en el interior del país a nivel distrital provincial y regional, donde funcionarios y servidores involucrados en actos de corrupción. Esto se volvió en algo cotidiano que lo practican aquellas personas, y debido al incremento y producción existe la necesidad de ir tras ello, con la finalidad de llevar una investigación sin dificultades y sin trabas en el camino.

La eficiencia se entiende como el desarrollo sistematizado y de manera ordenado de una serie de instrucción o procedimientos que garanticen la calidad de los procesos, documentarios, operativos y motoras que depende íntegramente del personal, además de ello se aplica a la capacidad que posee el talento humano para la maximización de los recursos económicos y materiales en una respectiva área, en ese sentido está delimitado de la siguiente manera: indicadores de duración del proceso, indicadores de productividad, indicadores de la carga procesal total, indicadores de la carga procesal resuelta. (Shack, N., 2014, p.24).

En el Distrito Fiscal de Huánuco, al igual que en otros Distritos Fiscales del Perú podemos evidenciar que se puede distinguir que los procesos de investigación fiscal no son eficientes y existe limitaciones que se presentan al momento de iniciar una investigación, puesto que este problema ocurre dentro del Ministerio Público, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huánuco, ya que los fiscales, que tienen la responsabilidad de ser los titulares de la acción penal, no cuentan con los elementos necesarios e idóneos para realizar una correcta y eficiente investigación al momento de perseguir a los responsables de los delitos de corrupción de funcionarios, perjudicando así a la correcta administración de justicia, afectando en gran medida el desempeño de los fiscales en su labor investigativa. Esto genera un retraso en la labor de investigación. Por otro lado, también la excesiva acumulación de carga procesal dilata el proceso de investigación y su respectiva sanción a los imputados.

Cabe señalar que existen alternativas para lograr identificar las limitaciones que se presentan al momento de iniciar una investigación para sí dar una posible solución al problema.

En consecuencia, es necesario indicar que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huánuco es la institución idónea para llevar a cabo la presente investigación.

## **1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

### **1.2.1. PROBLEMA GENERAL**

¿Cuáles son las limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018?

### **1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS**

- a) ¿Los recursos son limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018?
- b) ¿Los peritos son una limitante del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018?
- c) ¿El Personal es una limitación del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018?

## **1.3. OBJETIVO GENERAL**

Determinar las limitaciones del Ministerio Público relacionados en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.

## **1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- a) Establecer si los recursos son limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública

cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018

- b) Examinar si los peritos del Ministerio Público son una limitante en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018.
- c) Evaluar si la contratación de personal del Ministerio Público son una limitante en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco.

## **1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

### **1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA**

La presente investigación, pretendió cubrir un vacío del conocimiento científico respecto a la relación entre las Limitaciones que los fiscales del Ministerio Público tienen que enfrentar al momento de investigar los delitos contra la Administración Pública, los resultados nos permitieron formular estrategias para mejora el campo legal de estos tipos penales.

### **1.5.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA**

Los resultados de la presente investigación, se constituyen en material bibliográfico de consulta referencial para futuros trabajos de similar diseño y nivel, preferentemente en el campo del derecho sustantivo y adjetivo penal.

### **1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA**

Los resultados que se obtuvieron es esta investigación permitirán que los procesos penales seguidos por algún delito Contra la Administración Pública no se vean paralizados por largos períodos indefinidos, dejando impune a los investigados que sí tengan

responsabilidad penal y perjudicando económicamente el presupuesto público que se ve muchas veces mal gastado por procesos impunes.

#### **1.5.4. JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

La reforma a nivel institucional del Ministerio Público es preciso para poder investigar con eficiencia estos delitos Contra la Administración de Justicia; por tal motivo, la implementación de peritos especializados en delitos contra la administración Pública y el contrato de personal idóneo resultará eficaz en el Ministerio Público actuará con mayor efectividad.

#### **1.5.5. JUSTIFICACIÓN LEGAL**

Existe la necesidad de cubrir vacíos legales que nuestro sistema Penal y Procesal Penal aún tiene, esto con la finalidad de dar coherencia y eficiencia a la aplicación del derecho cuando se trata de investigar delitos contra la administración pública.

#### **1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN**

En este trabajo de investigación no se presentaron dificultades que impidan su ejecución, dado que se contó con el material necesario para su desarrollo.

#### **1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN**

Este estudio fue viable por las siguientes razones: Tuvimos acceso a los archivos de la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huánuco para poder recoger información de las carpetas fiscales relacionadas con el tema de investigación; por otro lado, contamos con el tiempo y los recursos adecuados para su realización y con la asesoría de un docente adecuado.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

Una vez que realizamos la búsqueda de antecedentes de la presente investigación, no se encontraron antecedentes a nivel local ni internacional, mas sí a nivel nacional, los cuales pasaremos a desarrollarlos a continuación,

##### **2.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL**

**Uchofen Urbina (2017), “Deficiencias funcionales del Ministerio Público que afectan el Derecho de acceso a la Justicia en el Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en Chiclayo, año 2016”.**

Resumen:

Como derecho el acceso a la Justicia ha existido desde hace muchos años, pero también ha sido vulnerado por las autoridades del sistema de administración de justicia, por ello esta investigación busca probar que existen deficiencias funcionales del Ministerio Público que limitan el derecho de acceder a una justicia idónea de los sectores más vulnerables, como es el caso del sector económicamente más pobre. Para ello se planteó como objetivo general determinar las deficiencias funcionales en las que incurre el Ministerio Público y que limitan el acceso a la justicia de los usuarios en el distrito judicial de Chiclayo en el año 2016; para ello, la población estuvo constituida por las víctimas del delito contra el Cuerpo, la vida y la Salud en el año 2016 que no fueron atendidas al acceso a la justicia para que por medio de este derecho puedan llegar a saber la realidad de los hechos y así sentirse dignos de que han sido atendidos por la Justicia Peruana; la principal técnica para la recolección de los datos fue la encuesta y, al ser analizados los datos concluyeron que no es suficiente que los medios, recursos e instituciones estén debidamente formalizados como es el caso del Ministerio Publico, sino que estos sean efectivos y en la práctica aseguren el acceso a la justicia, con oportunidad efectivizando



el derecho de las víctimas y sus familiares para que iniciar ex officio y sin dilaciones, una investigación eficaz, imparcial y efectiva utilizando los medios legales a su alcance para determinar la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables.

**Hernández Celis, (2019), “La Gestión de recursos humanos como plataforma para la misión institucional del Ministerio Público”.**

Resumen:

El presente trabajo de investigación ha permitido determinar el problema en el cumplimiento de la misión del Ministerio Público. Esta problemática se expresa en la siguiente pregunta: ¿Cómo incide la gestión de recursos humanos en la misión institucional del Ministerio Público? Luego de identificar la problemática la propuesta de solución es a través de la formulación de la hipótesis: La gestión de recursos humanos incide en grado significativo en la misión institucional del Ministerio Público. Por su parte esta investigación se ha orientado al siguiente objetivo: Determinar la incidencia de la gestión de recursos humanos en la misión institucional del Ministerio Público. Para ello, el tipo de investigación fue aplicada, con un diseño no experimental y, la población estuvo conformada por 135 personas, consideradas solamente a aquellas relacionadas directamente con la gestión de recursos públicos y la misión institucional del Ministerio Público y la muestra estuvo conformada por 100 personas relacionadas con la gestión de recursos públicos y la misión institucional del Ministerio Público, las que han compuesto la muestra del trabajo de investigación. Los instrumentos que utilizaron fueron el cuestionario, fichas bibliográficas y las guías de análisis documental. Finalmente arribaron a la conclusión de que se ha determinado la incidencia de la gestión de recursos humanos en la misión institucional del Ministerio Público; mediante las políticas de recursos humanos, estrategias de recursos humanos, remuneraciones de recursos humanos, productividad de los recursos humanos y la auditoría del desempeño de los recursos humanos.

**Alarcón Untón (2018), “El peritaje contable laboral y su contribución en la Administración de Justicia de la Corte Superior de Lima Metropolitana 2016”.**

Resumen:

El presente trabajo de investigación procura evaluar la contribución del Peritaje Contable Laboral en la Administración de justicia de la Corte Superior de Lima con la utilización adecuada de los beneficios sociales enmarcada en la actividad privada común en la ciudad de Lima del año 2016; para ello, se planteó como objetivo general el conocer el desarrollo del Peritaje Contable Laboral en la Administración de Justicia de la Corte Superior de Lima, Metropolitana 2016. Para cuyo efecto, la población de estudio estuvo conformada por los Peritos Contables que ejercen su labor en la Corte Superior de Lima Metropolitana, los cuales son aproximadamente 140 y para determinar el procedimiento del tamaño óptimo de la muestra se utilizó la formula estadística para poblaciones finitas o conocidas, la misma que se considera una muestra representativa de la población anteriormente señalada. De igual forma, para la recolección de los datos se utilizó las siguientes técnicas: encuestas, toma de información y análisis documental. Finalmente, la conclusión a la que llegaron fue que las técnicas y procedimientos periciales aplicadas adecuadamente por el perito contable laboral garantiza el desarrollo de la pericia con eficiencia y efectividad; el desarrollo eficiente de las fases del peritaje contable laboral garantiza que la investigación de la pruebas materiales y otros objetivos demuestren objetivamente la realidad de los hechos, materia de controversia contribuyendo de esta manera a la obtención de un dictamen de calidad y que la profesionalización permanente y continua de los peritos contables laborales incrementan sus conocimientos en el aspecto legal y experiencia pericial, para la demostración técnica y científica de las pericias.

**Monar Luna (2018) “Factores que limitan la productividad laboral de los trabajadores del Área de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público, sede Lima – 2018”**

Resumen:

El presente estudio de investigación nace con una preocupación que atraviesa el Ministerio Público en el Área de Corrupción de Funcionarios, unidad está inmersa en una serie de investigaciones a funcionarios que no han sabido aplicar ni hacer uso correcto de sus funciones. Por ello se han ido presentando una serie de deficiencias que debilitan la productividad laboral que desempeñan los trabajadores.

Teniendo como objetivo determinar el factor predominante que limita la productividad laboral de los trabajadores y una realidad que reflejan la actual situación del Ministerio Público presentando factores como: la mala distribución de personal, la falta de capacitación, falta de conocimiento informático, conocimiento de tecnología moderna, compensaciones, falta de certificados, falta de incentivos, etc. Dichos datos se obtuvieron de un focus Group, instrumento clave para poder determinar y tener una idea de lo que se pretende estudiar y evaluar. Por consiguiente, el objeto de estudio fueron 40 trabajadores del área de corrupción de funcionarios.

El método de investigación fue paradigma positivista, de enfoque cuantitativo para la recolección de datos, de tipo sustantivo, de diseño no experimental de corte transversal tipo descriptivo-explicativo. Se utilizaron diferentes técnicas para recabar la información como la entrevista y la encuesta. Y de los instrumentos se empleó el Focus Group que se utilizó en una primera etapa y para recabar la información final se utilizó el cuestionario.

De acuerdo a las respuestas obtenidas se analizaron todos los datos en el cual se emplearon análisis descriptivos correspondientes, donde se concluyó que el factor predominante que limita la productividad laboral fue el factor de ética pública, el indicador predominante de factor de gestión del talento humano fue falta de capacitación, en el factor informático fue falta de tecnología moderna, en el factor de compensación laboral fue falta de incentivos, en el factor de sobrecarga procesal fue exceso de trámites internos, en el factor de ética pública fue la doble moral y finalmente en el factor de liderazgo fue la falta de trabajo en equipo.

**Silva Cayao (2016), “El peritaje contable como aporte científico en la solución de hechos controversiales en la Fiscalía Anticorrupción de la Región San Martín, período 2012”**

Resumen:

La presente investigación está referida al Peritaje Contable como un aporte científico en la solución de hechos controversiales en los casos presentados en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Región San Martín durante el periodo 2012, en donde se analiza cómo influye la actuación del Perito Contable a través de su informe pericial siendo un elemento de prueba necesario para determinar el perjuicio económico en agravio del Estado Peruano, y los criterios con las cuales se elabora para tener un carácter de prueba real y fidedigno.

Se empleó el método inductivo, habiéndose llegado a establecer que la labor del Perito Contable es muy importante y fundamental en la etapa de la formalización de la investigación preparatoria que contribuye en esclarecer los puntos o hechos controversiales sobre todo en materia económica de las cuales el Fiscal no tiene conocimiento por ser ajeno a su especialidad y función, como Administrador de Justicia, permitiendo que el Fiscal obtenga un elemento de prueba objetivo que le permitirá formular su teoría con justicia e igualdad.

Es por ello que se llegó a la conclusión que el Perito Contable debe poseer una formación sólida en el aspecto académico, científico y experiencia profesional, que le permita ilustrar a la administración de justicia sobre hechos controversiales a través de su informe elaborado bajo estrictas normas éticas, que le darán un carácter de prueba científico, con resultados reales y exactos probados documentariamente, sin arribar a conclusiones subjetivas que carecen de fundamento, y agilizando la labor judicial. Espero que la presente investigación y los resultados a los que se haya llegado sirvan de aporte para futuras investigaciones.

## **2.2. BASES TEÓRICAS**

### **2.2.1. LIMITACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO**

#### **2.2.1.1. Generalidades**

Independiente del sistema procesal penal en el cual se encuentre enmarcado, y de los órganos con los cuales comparta su labor, el Ministerio Público participa en una de las funciones estatales de mayor sensibilidad: la aplicación del ius puniendi. Por así decirlo, el ministerio público representa la cara más dura del estado. En su labor puede fácilmente pasar a llevar los derechos fundamentales de las personas, por lo tanto, en un régimen republicano y democrático, el establecer tal o cual sistema de controles y responsabilidades del Ministerio Público resulta trascendental (Tavolari, pg. 585).

#### **2.2.1.2. El Estado**

Guido I. Risso [Curso de derecho constitucional. Tucumán: La Ley, 2001] sostiene que “el término Estado es uno de esos conceptos que posibilitan tantas acepciones como personas dispuestas a darlas haya”. Más aún, con sorna Frederic Bastiart en un opúsculo publicado en 1848 y denominado El Estado, decía que debía premiarse con un millón de francos, coronas, cruces y hasta cintas a quién llegase a formular una buena, simple e inteligible definición de Estado.

En puridad, su conceptualización se ha visto afectada por las distintas connotaciones existentes, en el ámbito político, sociológico, histórico y jurídico. Dentro de ese complejo contexto, debe señalarse que la existencia del Estado está condicionada a la interconexión de un grupo humano asentado sobre un territorio determinado en donde opera con suficiencia un poder político. Ahora bien, ello no implica que tenga una existencia material, ya que en verdad es una abstracción que se sustenta en la necesidad de cohesionar las relaciones de convivencia e interacción.

Al respecto, Fernando Silva Santisteban [ob. cit.] percibe que “el Estado a través de una organización política asume el mantenimiento del orden social dentro del marco territorial que tiene soberanía por el ejercicio de la autoridad coercitiva [...] mediante el uso o la posibilidad del uso de la fuerza

física [...] y un sistema compartido de los valores expresados en un conjunto de normas [...] definidas, que regulan el comportamiento y garantizan a los individuos aquellos beneficios y privilegios que se estima deben recibir de la sociedad [...]”.

Ante la existencia de una multiplicidad de definiciones, Luis Sánchez Agesta [ob. cit.] señala que el concepto Estado puede ser observado desde tres perspectivas –las mismas que han sido utilizadas de manera excluyente y omisivas entre sí en lo referente a sus respectivos aportes doctrinarios–: deontológica, sociológica y jurídica.

- a) La perspectiva deontológica (fines): Radica en explicar la noción Estado en atención a los fines o metas que este persigue alcanzar, entre las cuales se puede mencionar la libertad, el bienestar común, la seguridad, etc. Se considera, en gran medida, la connotación de los fines y metas estatales como factores de cohesión y criterios legitimadores para la existencia y pervivencia de una sociedad política.
- b) La perspectiva sociológica (naturaleza): Radica en explicar la noción Estado en atención a las propiedades y cualidades propias del tipo de poder de que goza y ejerce el Estado.
- c) La perspectiva jurídica (orden coactivo): Radica en explicar la noción Estado en atención a la función normativo- compulsiva que necesaria e irremediabilmente emana y proyecta de su seno el Estado.

- **El Estado y el Poder**

Teniendo presente que sobre “el poder y el derecho” se conforma la existencia misma del Estado y que la distribución del primero es parte de su organización institucional, la cual debe de estudiarse y analizarse exhaustivamente.

El poder como elemento del Estado, es básicamente la potestad de establecer reglas – leyes – que una comunidad o sociedad acepta como válidas y a las cuales se somete por imposición o voluntariamente. Si el poder emana de la decisión o voluntad de quienes serán destinatarios de éstas reglas y producto de una representación que surge del sufragio, tiene origen democrático, es la voluntad -demos- de la mayoría (Alain Touraine).

El poder impone un derecho que la mayoría acepta, pero se legitima por la sumisión del mismo poder al derecho o a las reglas que han permitido que exista. La sumisión del pueblo a un poder es a la vez sumisión al derecho, y la sumisión al derecho es también sumisión al poder. Bobbio expresa que “derecho y poder son dos caras de una misma moneda” (Norberto Bobbio).

Un poder no legitimado, o que se deslegitima por la no sumisión al derecho, atenta contra la Constitución y resiente al Estado, por lo que sólo se puede hablar de “Estado de Derecho”, cuando nos encontramos ante un poder legítimo, ejercido dentro del marco del derecho. La lucha por el derecho, en este nivel, se convierte así en la lucha por un poder legítimo.

- **Fragmentación del Poder y Estado de Derecho**

Las teorías sobre la soberanía del poder constituyente, la estructuración y organización los sistemas de gobierno, son abundantes y han conducido a orientar y edificar el Estado moderno, pero no bastan para identificar los elementos característicos del Estado de derecho, que permiten afirmar su existencia y vigencia.

En tal propósito, no es ocioso reiterar que la división de poderes, es un presupuesto básico, en un sistema democrático nadie lo discute, es más, la distribución y atribución de poder se extiende y amplía por la creación de nuevas instituciones a las cuales se otorgan o delegan poderes, por lo que a los tradicionales se suman nuevas formas de ejercicio del poder público, que actúan concomitantemente con manifestaciones del sector privado que influyen indirectamente en la forma y en el modo de gobierno.

Esta tendencia de distribución o “fragmentación”, puede favorecer el funcionamiento de los poderes tradicionales y facilitar el gobierno, pero llevado a extremos, puede diluirlo y producir una segmentación del poder, haciendo difícil identificar la unidad de gobierno en el Estado.

En efecto, cuando ya no se distingue nítidamente los perímetros del poder y cuando la interdependencia de poderes se convierte en un entramado indescifrable, el equilibrio e independencia se resiente, dificultando la gobernabilidad y el control de las instituciones públicas. El debilitamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, o de cualquiera de ellos, afecta de inmediato al Estado de derecho (Díaz Labrano).

- **El Estado de Derecho y el Poder Judicial**

El funcionamiento del Poder Judicial, es parámetro tradicional de verificación de la existencia y vigencia del Estado de Derecho, evidencia la eficacia del sistema estatal de derechos y garantías ciudadanas y el respeto a las instituciones.

Se ha dicho que “El Estado de derecho moderno no es esencialmente un “Estado legislador”, sino un Estado que privilegia la vía judicial, lo que significa que se ha convertido en un Estado que procura proteger el derecho material contra posibles actos de arbitrariedad tanto del poder legislativo, como del poder ejecutivo. En consecuencia, el principio de la división de poderes se ha materializado con mayor rigor, aun cuando no en forma radical en relación al Tercer Poder” (Werner Birkenmaier).

Se conforma por una serie de órganos de carácter público que poseen jurisdicción y competencia para conocer, entender y resolver las cuestiones litigiosas y capacidad de interpretar y aplicar el derecho por medio de resoluciones que tengan autoridad de cosa juzgada.

La competencia y organización del Poder Judicial es atribuido por la Constitución Nacional, ella organiza el poder estatal como reparto del poder público y de acuerdo a la voluntad soberana (Charles-Louis de Secondat “Montesquieu”). Normalmente sobre base constitucional se disponen las condiciones exigidas – idoneidad y capacidad – de las personas que habrán de desempeñar la función jurisdiccional.

Para que el poder público jurisdiccional sea parte de la división o distribución de poderes y cumpla su rol específico como institución de equilibrio de los demás poderes, es necesario asegurar en el texto y más allá del texto, en la vida pública de un Estado Democrático, que esté plasmada y garantizada la independencia del Poder Judicial (Díaz Labrano. Pg. 14)

Esta independencia, tiene diversas manifestaciones, la más importante, que otro poder del Estado – el ejecutivo o el legislativo - no ejerza directa o indirectamente la misma competencia jurisdiccional y pueda revisar las resoluciones judiciales. La función jurisdiccional debe ser indelegable, todo



poder que interfiera en su competencia está al margen de la constitución y las leyes.

La independencia debe ser garantizada en propio mecanismo de elección de los magistrados, a fin de que quienes pretendan ejercer la función jurisdiccional, no estén supeditados a procedimientos degradantes, de subordinación anticipada a la política y expuestos a influencias que posteriormente distorsionan la administración de justicia.

La estabilidad de los miembros es tan esencial como de que sean personas de reconocida honorabilidad e idoneidad para el cargo, por lo mismo, la remoción o sustitución sólo debe obedecer a la violación manifiesta de su competencia o la comisión de actos delictivos, y en todos los casos por los procedimientos previamente previstos. El Poder Judicial no puede ser visto como un poder complaciente o “solidario”, situación que corrompe la base institucional y resiente la credibilidad y confianza pública.

Como parte de las garantías de independencia, a los magistrados judiciales le son otorgadas inmunidades, para no ser objeto de presiones que interfieran en la objetividad del pronunciamiento o juzgamiento. No deben ser molestados, perturbados o sometidos a juicio por las opiniones que vertieren en sus pronunciamientos, salvo desvío manifiesto de poder o violación deliberada y ostensible de la legalidad.

La estabilidad es una de las bases más importantes para la independencia del Poder Judicial. En ningún caso la inmunidad debe convertirse en impunidad frente a la comisión de delitos, es tan importante velar por la independencia intelectual del magistrado, como que éste en caso de delitos sea sometido a juicio y removido del cargo.

#### **2.2.1.3. Seguridad Ciudadana**

La sensación de inseguridad que experimentamos por el aumento del crimen y la delincuencia y por las dificultades de las autoridades para prevenir y reprimir el delito, amenazan la calidad de nuestra vida personal y familiar, así como a nuestras democracias. La búsqueda de mayores niveles de seguridad ciudadana es una tarea que debe involucrar no sólo a la Policía, sino a los políticos, autoridades, medios de comunicación, a la ciudadanía en general.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades efectivamente disfrutadas por las personas. Ese desarrollo no es automático. Por el contrario, está plagado de amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene como propósito proteger al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo.

La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana, aquel componente responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y sus bienes. La seguridad ciudadana tiene dos acepciones.

La primera la define como la condición —objetiva y subjetiva— de encontrarse el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción de despojo remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una persona física o jurídica.

Aunque esta definición parecería restrictiva, en realidad, incluye a todos los delitos contra las personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro y la trata de personas, así como los delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo, hurto y estafa) como público (soborno y cohecho). Incluye, además, modalidades delictivas propias del crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos o el comercio de bienes ilegales, que «están muy estrechamente relacionados con la violencia y el despojo, aunque no dañen directamente a las personas o a su patrimonio».

La segunda acepción de seguridad ciudadana la refiere como la acción destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, lo que se persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una obligación positiva del Estado derivada de sus compromisos internacionales para garantizar los derechos fundamentales.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el tratamiento de los problemas de criminalidad y violencia, en lugar de los conceptos de seguridad pública, seguridad interior u orden público, por cuanto tiene un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana y los grupos sociales como objetivo central de las políticas, a diferencia de la seguridad del Estado o de determinado orden político. El analista Fernando Carrión señala que la seguridad ciudadana se diferencia de la seguridad pública en que esta última se constituye desde una perspectiva Estado-céntrica y la primera desde una concepción ciudadana en la que el Estado resulta ser uno de varios elementos.

En los últimos años, el concepto de convivencia social se ha ligado al de seguridad ciudadana. En efecto, ambos conceptos se basan en la promoción de la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento.

En este contexto, la Ley 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), considera que la seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como para contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Con mayor detalle, el reglamento del SINASEC, aprobado mediante Decreto Supremo 012- 2003-IN, precisa que su orientación final es la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, además de garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional.

Con posterioridad, la Defensoría del Pueblo ha señalado que la seguridad ciudadana no constituye en sí misma un derecho de naturaleza constitucional o legal, pero sí un bien jurídico protegido, en tanto conjunto de acciones destinadas a preservar otros valores jurídicamente tutelados por nuestro ordenamiento, además de los derechos constitucionales a la vida, a la integridad y a la propiedad, entre otros, como la tranquilidad pública o la paz social, el uso pacífico de los espacios y vías públicos, etcétera.<sup>9</sup> En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al considerar

que la seguridad ciudadana está referida a un conjunto de acciones orientadas a salvaguardar el desarrollo de la vida comunitaria dentro de un contexto de paz, tranquilidad y orden, consolidando una situación de convivencia con normalidad, es decir, preservando cualquier peligro o amenaza para los derechos y bienes esenciales para la vida comunitaria.

- **Enfoque integral de la política de seguridad ciudadana**

La perspectiva aquí asumida concibe a la seguridad ciudadana como un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, en el que intervienen un conjunto de actores públicos y privados, la sociedad civil organizada y ciudadanos. De ahí que, para resolver este problema, se requiere el diseño de una política pública de carácter integral y sistémico con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo.

Uno de los instrumentos más utilizados para el estudio y visualización de la conformación global de la política pública es el esquema conceptual de las fases: identificación de problemas, formulación de la política, decisión, implementación y evaluación.

Sobre la base de esta secuencia de etapas, se debe abordar el diseño de la política pública de seguridad ciudadana desde una perspectiva multisectorial e intergubernamental, con una efectiva participación ciudadana, del sector privado y de los medios de comunicación. Esta política debe ser respaldada con normas jurídicas provistas de los recursos humanos y financieros necesarios; también debe ser materia de comunicación persuasiva acerca de los beneficios que la política pública brinda a los ciudadanos. En esa línea, desde la perspectiva de diversos organismos internacionales, la política pública de seguridad ciudadana debe tener las siguientes características: (i) integral, a efectos de abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto; (ii) intersectorial e intergubernamental, para comprometer la participación de los diferentes actores estatales en los distintos niveles de gobierno; (iii) participativa, por la intervención permanente de la población involucrada y por favorecer la democratización de la sociedad; y (iv) universal, debido a su cobertura general, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo.

- **Factores de Riesgo para la Seguridad Ciudadana**

- ✓ Desigualdad
- ✓ Quiebre de vínculos sociales
- ✓ Urbanización acelerada
- ✓ Uso extendido de armas, consumo indiscriminado de alcohol y drogas

Esto es un tema que merece mucho estudio, y que el Estado por medio de sus Instituciones y mediante políticas públicas deben de trabajar para tratar de frenar la ola de inseguridad que azota al país; necesita de medidas y leyes idóneas que ayuden a prevenir este clima en los habitantes. La inseguridad ciudadana nos afecta a todos, específicamente a quienes viven en las ciudades.

Entonces, para nosotros ¿qué es seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana no solo es luchar contra la violencia, delincuencia, en las calles; sino, es generar las condiciones de vida digna, que se va a lograr con la ausencia de riesgos físicos, la existencia de condiciones mínimas para poder vivir, es decir, vivienda, salud, educación, etc.

La protección que todo ciudadano merece no debe obtenerse violando los derechos fundamentales ni el ordenamiento constitucional. Debemos aprender a vivir en democracia respetando la integridad del ciudadano. En ningún caso se puede justificar la lesión de derechos individuales a favor del “orden interno”.

La seguridad ciudadana pone énfasis en las labores de “prevención” y “control” –antes que represión- de los factores que generan violencia e inseguridad. Trabajando y demandando una mayor eficiencia en el aparato judicial, una mejor presentación de servicios públicos, entre otras funciones del estado; estaremos atendiendo el problema de la inseguridad de las personas.

#### **2.2.1.4. Instituciones Públicas encargadas de la Seguridad Ciudadana**

La seguridad ciudadana no es tarea exclusiva de los policías, serenos o ronderos, sino que incluye a todos los ciudadanos y a las instituciones del estado. La seguridad ciudadana da un nuevo perfil a la policía, entendiéndola como un servicio de naturaleza civil orientado hacia la prevención y organización de la comunidad. La baja calidad y cobertura del

servicio policial se debería a varios factores: al escaso desarrollo organizacional de la Policía Nacional; a la insuficiente infraestructura y equipamiento; a la debilidad del régimen disciplinario y de lucha contra la corrupción de sus integrantes; a la baja profesionalización de sus efectivos y su régimen laboral, que permite que los efectivos uniformados presten servicios para privados; al limitado sistema de información y comunicaciones; y a la escasa vigilancia y patrullaje de las calles.

Por último, la debilidad institucional del SINASEC no ha permitido desarrollar un trabajo coordinado y articulado entre todos los responsables de luchar contra la inseguridad en el país. Esa debilidad se traduce, por ejemplo, en planes anuales sin una visión estratégica de mediano o largo plazo, en una escasa coordinación interinstitucional en los diferentes niveles de gobierno respecto a la evaluación de políticas, planes y programas.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o CONASEC está integrado por las siguientes autoridades:

- El Presidente del Consejo de Ministros. El Ministro del Interior. El Ministro de Justicia. El Ministro de Educación. El Ministro de Salud. El Ministro de Economía y Finanzas. El Ministro de Transportes y Comunicaciones. El Ministro de Comercio Exterior y Turismo. La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. El Presidente del Poder Judicial. El Fiscal de la Nación. El Defensor del Pueblo. El Presidente de la Asociación de Presidentes Regionales. El Alcalde Metropolitano de Lima. El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). El Director General de la Policía Nacional del Perú. El Jefe del Sistema Penitenciario Nacional. El Presidente del Consejo Nacional de la Prensa. El Presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad.

También se traduce en la deficiente gestión de la información delictiva, la baja calidad del gasto público en seguridad, así como en el débil compromiso de los gobiernos regionales y locales en la formulación de sus planes, que son las herramientas de gestión para concretar acciones de prevención, toda vez que la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado es responsabilidad de la Policía Nacional.

El Instituto de Defensa Legal y el Centro de Promoción para la Seguridad Ciudadana, asumen el reto de contribuir a disminuir los índices de inseguridad ciudadana, a través del fortalecimiento de los comités distritales de seguridad ciudadana. Contar con un distrito seguro sólo será posible si cada uno de los agentes de la comunidad asume su rol de manera seria y responsable. La participación y la toma de decisiones concertadas será un indicador del grado de participación de las instituciones de la comunidad.

### **Instituciones encargadas de la seguridad ciudadana**

([https://pdba.georgetown.edu/Security/citizenssecurity/peru/peru\\_3.html](https://pdba.georgetown.edu/Security/citizenssecurity/peru/peru_3.html))

#### **✓ Nivel Nacional**

- Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC
- Ministerio del Interior
- Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas,
- Munición y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Defensa
- Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
- Ministerio Público / Fiscalía de la Nación
- Defensoría del Pueblo
- Instituto de Medicina Legal

#### **✓ Nivel Local**

- Gerencia de Seguridad Ciudadana Municipal (Municipalidad de Lince)
- Instituciones Operativas de Seguridad Nacional
- Policía Nacional del Perú –PNP
- Policía Nacional del Perú - Dirección de Participación y Seguridad Ciudadana – DIRPASEC
- Policía Nacional del Perú - Dirección Antidrogas – DIRANDRO
- Policía Nacional del Perú - Dirección de Criminalística – DIRCRI
- Policía Nacional del Perú - Dirección de Seguridad del Estado – DIRSEG

- Policía Nacional del Perú - Dirección de Defensa y Control de Fronteras –DINDENCOF
- Policía Nacional del Perú - Dirección de Policía Fiscal – DIRPOFIS
- Instancias de Coordinación para la Seguridad Ciudadana
- ✓ **Nivel Nacional**
  - Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC
  - Comisión Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
- Nivel Regional
  - Comité Regional de Seguridad Ciudadana
- ✓ **Nivel Local**
  - Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
  - Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
  - Comisionado para la Paz y el Desarrollo de Selva Central – CPDSC
  - Comisionado para la Paz y el Desarrollo de Ayacucho

## **2.2.2. El Ministerio Público**

### **2.2.2.1. Definición**

El Ministerio Público es considerado por el art. 158 de la Constitución como un órgano autónomo de derecho constitucional -lo que significa un complejo orgánico propio y distinto, de naturaleza pública, que no depende de poder alguno o de otra institución estatal- y que, por imperio del art. 759 de la citada Ley Fundamental, es el encargado de promover la acción de la justicia en defensa de legalidad y de los intereses tutelados por el derecho - provoca el ejercicio de la potestad jurisdiccional; es un órgano requirente por antonomasia-. Se puede decir, entonces, que el Fiscal es un funcionario guardián de la legalidad, que únicamente ha de servir al derecho; como tal, debe intervenir siempre que estén en juego normas de carácter imperativo o los derechos fundamentales de los ciudadanos (Pérez Cruz Martín). El juez penal no juzga por sí mismo, sino solo a iniciativa del Ministerio Público, cuya intervención es el presupuesto necesario de la actividad jurisdiccional. En tanto ha operado "una expropiación del conflicto", el Estado no solo asume el deber juzgar, sino que tampoco abandona la persecución de los delitos en manos de los particulares.

En sede penal, compatible con lo primero y especificando su misión constitucional, le corresponde el ejercicio de la acción penal y la conducción



desde su inicio de la investigación del delito (art. 159.4y 5 de la Constitución). La persecución de los delitos, considerada ajena al ejercicio de la potestad jurisdiccional, requiere de un órgano público, no subordinado a las víctimas y distinto de los jueces, cuya existencia y actividad es una pieza fundamental del proceso penal basado en el principio acusatorio, y garantía imparcialidad y presupuesto necesario para que pueda afirmarse la tutela del derecho penal, (ubi non est actio, non est iurisdictio). Ministerio Público le corresponde contribuir, en la persecución penal, a la afirmación de la voluntad estatal, que orienta todos los poderes del Estado hacia la idea de la justicia material; participa en la defensa de la voluntad estatal para el “ejercicio del poder penal. En palabras de Peña Cabrera, el Ministerio Público se encuentra vinculado en su situación funcional al orden jurídico constitucional y al principio de legalidad.

La promoción del ejercicio de la acción penal está sometida al principio externo de legalidad u obligatoriedad: el fiscal, cumpliendo las disposiciones del ordenamiento jurídico, debe promover la acción penal en cuanto exista sospecha inicial simple, salvo los criterios de oportunidad legalmente configurados, referidos a la falta tanto de necesidad de pena cuanto de merecimiento de pena, definidos con arreglo al principio de proporcionalidad (art.2 NCPP). Pero no solo eso, conforme a las disposiciones del NCPP, los fiscales son los únicos conductores de la investigación del delito, considerada como una de las fases esenciales del proceso penal. Los fiscales han de llevar sobre sus espaldas la carga de probar la culpabilidad del acusado a la par de desarrollar, también, la actividad tendiente a la incorporación de la prueba que concierna a la dilucidación del litigio, quedando en manos del juez la latitud de la reacción penal que nuestra ley sustantiva ha discernido monopolícamente a la jurisdicción.

#### **2.2.2.2. Normatividad**

El Ministerio Público, al ser el órgano constitucional encargado de la persecución del delito, como titular del ejercicio público de la acción penal, está legitimado para hacer prevalecer el ius puniendi del Estado, instando a los órganos jurisdiccionales a dar satisfacción de la misma. Las bases de esta legitimación se hallan en las Cartas Políticas de 1979 y 1993, en las

que se configuraron las atribuciones funcionales de este ente para el ámbito penal. En armonía con estas normas supremas, la legitimación del Ministerio Público es proclamada en la Ley Orgánica del Ministerio Público (arts. 1, 11 y 92), como el Código Procesal Penal de 2004 (art. 60.1).

Desde el punto de vista estrictamente procesal, el Ministerio Público tiene un significativo poder sobre el proceso, pues su legitimación es plena respecto de los delitos contra los que procede la persecución penal pública (art. 11 LOMP). Asimismo, interviene también en los procesos de persecución semipública, en los que su participación está supeditada a la existencia de requisitos formales (por ejemplo, en caso de delitos tributarios: D. Leg. N° 813, art. 7), o requisitos por razón de la función (art. 99 de la Const.). Sin embargo, no tiene legitimación para intervenir en los delitos perseguibles a instancia de parte, tampoco la tiene para actuar respecto a las faltas.

#### **2.2.2.3. Funciones y Organización**

El NCPP confiere dos roles concurrentes pero sucesivos al Ministerio Público en cuanto titular del ejercicio de la acción penal: (i) conductor de la investigación preparatoria -la facultad de decisión relativa a la acusación o al sobreseimiento conferida al fiscal confluente una prerrogativa lógico-jurídica que obliga al Ministerio Público a la investigación del hecho-; (ii) acusador en el juicio oral, "con obligación de intervenir permanentemente en todo el desarrollo del proceso" (art.61-3 NCPP). Otro rol, vinculado al recurso, es el de ser (iii) parte recursal en sede de impugnación.

El Ministerio Público se pronuncia a través de disposiciones, providencias, requerimientos y conclusiones (arts. 122y 64 NCPP). Las disposiciones y los requerimientos deben ser motivados. Las conclusiones traducen la justificación del fiscal en sus intervenciones orales realizadas en las audiencias. Las providencias, que se centran en aquellos ámbitos de exclusivo dominio del fiscal, al igual que los decretos judiciales, ordenan materialmente el avance de la causa.

##### **1. Conductor de la investigación preparatoria**

El rol del Ministerio Público como conductor de la investigación preparatoria, de un lado permite acentuar la forma acusatoria del

procedimiento penal y, de otro, simplificar y dinamizar la tarea de investigación (Exposición de Motivos del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica).

El NCPP considera al Ministerio Público una institución clave para desformalizar la etapa de investigación. El sistema que instaura requiere que el Ministerio público se capaz de dinamizar el proceso de investigación criminal, haciéndolo más flexible, desarrollando trabajo en equipos, coordinando el trabajo policial. Además, el Ministerio Público debe desarrollar una política de control de la carga procesal para que el sistema procesal funcione con eficiencia y calidad, y debe jugar un rol decisivo en la promoción y protección de los derechos de las víctimas [Cubas].

En tal virtud, no solo (i) recibe las denuncias por la comisión de delitos públicos (art. 60.1 NCPP) y (ii) dispone la actuación actos urgentes e inaplazables la promoción de la acción penal -se sujeta al principio de legalidad-, a cuyo efecto puede ejecutarlos\_ directamente u ordenar lo haga la Policía, cursándole las indicaciones correspondientes o directivas específicas (arts. 65.2 y 3, y 69 NCPP), de tal forma, que se encargará directa, o vía delegación a la autoridad policial, de interrogar personalmente a los imputados y a los testigos, así como de informar sobre la situación legal de los primeros. Además, (iii) controla jurídicamente su desarrollo y define su estrategia. En su condición de titular de la etapa de investigación preparatoria, cuyo señorío ostenta, no solo (iv) decide qué hacer y el método que permita conseguir el objetivo de esclarecimiento, sino también (v) garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos, así como la regularidad de las diligencias con respeto a los derechos fundamentales (art. 65.4 NCPP). Asimismo, (vi) solicita al juez, mediante el requerimiento respectivo, todas las medidas limitativas de derechos necesarias Para el debido esclarecimiento de los hechos y aseguramiento de las fuentes de prueba (art.67.2 última frase NCPP), en tanto que solo puede realizar actos de investigación y aseguramiento no limitativos de derechos fundamentales, como también las medidas de coerción cuya finalidad es asegurar la eficacia del proceso y de la sentencia final, mediante la cual el órgano jurisdiccional -vía cognición sumaria- deberá evaluar para

decidir su fundabilidad y, de esa forma, asegurar la efectividad de la sentencia a expedirse.

El rol de conductor de la investigación lo hace, sin duda, responsable de ella. Tres consecuencias acarrearán esta posición institucional. 1. Tomar las decisiones acerca del futuro de la investigación: necesidad de realizar ciertas diligencias de investigación, provocar audiencias ante el juez de la investigación preparatoria, impulsar la continuación de los actos de investigación, declarar su cierre. 2. Conseguir autorizaciones judiciales - medidas limitativas de derechos en general-. 3. Responder frente a los perjuicios generados por la actividad de investigación y responder por el éxito o fracaso de las investigaciones frente a la opinión pública (Duce/Riego).

Las actuaciones que lleva a cabo el fiscal en la investigación preparatoria son las que permiten la celebración del juicio oral en condiciones. Habida cuenta de que sería muy complicado, en muchos casos -aunque no en todos-, celebrar el juicio oral inmediatamente después de sucedidos los hechos, con frecuencia es necesario abrir una averiguación previa, muy precisa o acotada para recoger los vestigios materiales del delito y asegurar a la persona y bienes del sospechoso, así como realizar las diligencias de investigación en orden a la identificación de los responsables y la acreditación del hecho punible.

En su actuación como tal, autoridad imparcial y titular de la investigación preparatoria, el Ministerio Público está sometido a dos principios de actuación; esto es, principios que guían su actividad externa:

- **Legalidad.** El fiscal se regirá únicamente por la constitución, la Ley y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Tal sumisión impone al fiscal prescindir de cualquier influencia o interés, ya sea personal o externo, ajeno a los principios prefijados por el ordenamiento jurídico. En esta perspectiva, el fiscal actuará con independencia de criterio, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general -nunca determinados o específicos, residenciados en un caso concreto-. que emita la Fiscalía de la Nación, básicamente en asuntos de política criminal de la institución o de unificación de criterios en cuestiones de orden penal o procesal (Doig).

- **objetividad.** El fiscal debe indagar con Plena objetividad e independencia los hechos constitutivos del delito y realizar actividad de investigación sobre los hechos que determinen y acrediten la responsabilidad o la inocencia del imputado; las circunstancias que permitan comprobar la imputación y las que autoricen eximir o atenuar la responsabilidad (arts. IV.2 TP y 61.2 NCPP). Esto último es posible porque el Ministerio Público, materialmente, representa el interés público de realización de la justicia, el cual tanto puede contraponerse como coincidir con el de la defensa. Como el fiscal debe vigilar la observancia de las leyes, no puede lógicamente tener un interés subjetivo en el caso concreto distinto de la correcta aplicación de la ley (Serra Domínguez).

## **2. Acusador Público**

El Ministerio Público como parte acusadora está encargado de solicitar la actuación del ius puniendi, siempre que legalmente correspondiera. Mediante la acusación, cuando proceda, aun cuando no actúa derecho fundamental alguno, cumple con su obligación jurídico-pública de ejercitar la acción penal introduciendo la pretensión punitiva; y, por ello, mantiene la vigencia del principio de contradicción. La acusación -que delimita, objetiva y subjetivamente el ámbito del proceso- está condicionada a la existencia de base suficiente o de bastantes o idóneos elementos de convicción contra el imputado (art. 344.1 y 2.d NCPP). En esta condición de parte acusadora no solo debe sostener los cargos en todo el curso del proceso -, claro está, los requisitos y condiciones legales pertinentes-, sino que está autorizada a interponer los recursos y medios de impugnación legalmente previstos (art. 61.3 NCPP).

Si bien la Constitución admite una diferenciación entre fiscal acusador y fiscal dictaminador (art. 159-3 y 5, de un lado; y de un lado, 1 y 6 del mismo art. 159 de la Constitución, de otro) -también prevé al fiscal investigador (art. 159.4)-, esta función de fiscal dictaminador ha sido desterrada del proceso penal. Ya no se requiere dictamen previo para la decisión de las causas, como lo exigía la LOMP en sus arts. 83 y 91. El fiscal, según los arts. 64y

122 NCPP en el ámbito del proceso penal, dicta disposiciones y providencias (en la investigación del delito), y formula requerimiento, con sus respectivas conclusiones (petición de actos procesales a la autoridad judicial), siempre motivados y autosuficientes, sin remisión a otros actos o decisiones de la propia Fiscalía o del órgano jurisdiccional –con mayor razón cuando se trata de los que podemos denominar requerimientos estructurales: de sobreseimiento y acusatorio, en los que, con mayor exigencia, han de bastarse a sí mismos y en que el control judicial debe incidir en la correcta descripción del hecho imputado, en el mínimo sustento probatorio y en la logicidad de la argumentación en orden a su conclusión (D' Alhora). La acusación es un requerimiento sujeto a una regulación específica (art. 349 NCPP), controlable judicialmente (arts. 350-351 NCPP), e indispensable para el enjuiciamiento de un imputado (art. 353 NCPP) que, con anterioridad, fue inculcado formalmente mediante una Disposición de Investigación (arts. 336y 349.2 NCPP).

En caso que el fiscal no acuse y si esta posición es avalada por el fiscal superior en grado, la regla general, en virtud del principio acusatorio, es que no cabe otra alternativa al órgano jurisdiccional que aceptar esa postura [Ejecutoria Suprema RN n° 2330-2012, de 30-01-13], salvo que el principio acusatorio entre en conflicto con otros bienes constitucionales, entre ellos, el derecho a la prueba y la debida motivación, en cuya virtud del principio de interdicción de la arbitrariedad cabe anular esa decisión (STC n° 4620-2009.PHC/TC, de 10-11-11).

### **3. Parte en el recurso**

El Ministerio Público es la única autoridad que puede determinar la persecución del delito, persecución que incluso se proyecta en sede de impugnación -presentación de recursos acusatorios-. Por lo tanto, no es posible rebasar, como órgano público que es, lo que disponga sus autoridades en ese ámbito específico. Esto en atención a dos de los principios que orientan la función fiscal: el de jerarquía y la de unidad de la función. Así, entendido, el Ministerio público es un cuerpo jerarquizado, en el que la posición del Superior prima frente a la del inferior (RN n° 1347-2013-Lima de 01-04-14 y Queja n° 270-2013-Lima de 17-01-t4).

En el caso de los recursos -que obedecen al principio dispositivo-, interpuesta la impugnación por un determinado fiscal -y solo respecto de él- su viabilidad dependerá si el fiscal superior en grado comparte el criterio del inferior. Si no acepta su pretensión impugnativa, el recurso del inferior decae automáticamente, sin afectar por cierto a las otras partes procesales. En dicho caso el juez debe decidir -se comparta o no su criterio- por la posición del fiscal superior en grado (RN n° 1614-2013-Pasco de O5-03-14).

#### **4. Capacidad y Legitimación del Ministerio Público**

La fiscalía ostenta el monopolio de la acción penal tratándose de delitos públicos. Solo en los delitos privados, muy escasos -delitos contra el honor, contra la intimidad y lesiones culposas leves-, y en las faltas, se excluye la intervención del Ministerio público y se la concede al ofendido por el delito, constituido al efecto en querellante particular.

Para el válido ejercicio de la acción penal, quien lo haga debe tener capacidad para ser parte y capacidad procesal. Tales exigencias se cumplen en los fiscales en tanto integran un cuerpo del Estado erigido en carrera fiscal, cuyo acceso, estatuto y funciones están definidos legalmente (tanto en la LOMP como en el NCPP).

La legitimación activa que tiene el fiscal para intervenir en el proceso penal es originaria -parte de la Constitución y se desarrolla en la Ley-. Lo es en su consideración de defensor de la sociedad, aunque respecto del objeto civil solo es una legitimación derivada, pues actúa como sustituto procesal de la víctima: insta la reparación civil solo si la víctima no se constituye en actor civil, no renuncia a ella o no decide acudir a la jurisdicción civil (arts. 11.1, 12.1 y 13.1 NCPP) (Gimeno)

#### **5. Ministerio Público Y Policía**

La Constitución asigna al Ministerio Público la titularidad o conducción de la investigación del delito desde su inicio. Conducción -que es el vocablo utilizado por la Ley Fundamental- significa guiar o dirigir las tareas de investigación, y lo hace ya sea directamente -la Oficina Fiscal- o a través de la Policía. Asimismo, y paralelamente, la Constitución atribuye a la Policía Nacional la investigación del delito (art. 166), pero precisa en el art. 159.3 que, en la tarea de investigación conducida por la Fiscalía, la Policía

Nacional está obligada a cumplir sus mandatos -esta, según Roxín, constituye una de sus más antiguas misiones-. El auxilio de la Policía en desarrollo de los actos de investigación es pues imperativo; empero, la Policía Nacional también tiene un poder de investigación autónomo, de un lado, limitado a determinados actos de urgencia e imprescindibles en los primeros momentos de la investigación, sin perjuicio de la pronta comunicación a la Fiscalía, siempre sujetos a las directivas o indicaciones del fiscal -a fin de garantizar la validez y utilización de los mismos en sede jurisdiccional-, y, de otro lado, traducido en un conjunto de actos de averiguación que puede llevar a cabo por iniciativa propia - poder de investigación no delegado- a la espera de la intervención efectiva del fiscal (arts. 67.1 y 68.1 NCPP).

La dependencia funcional -que no orgánica- de la Policía es pues obvia y está normativamente impuesta, la cual permite al Ministerio Público influir en las investigaciones realizados por aquella. Sin embargo, ello no significa minimizar el rol de la Policía ni que el fiscal reemplazara al Policía en la actividad criminalística y en el combate contra la delincuencia que le es propia -reemplazo, por lo demás, de imposible ejecución-. La coordinación, impuesta por el art. 6 NCPP, que incluso manda la elaboración conjunta de protocolos de actuación, es inevitable precisamente para garantizar la eficacia de la persecución penal; Ministerio Público y Policía Nacional son dos instituciones que están llamadas a cooperar, sobre todo en los momentos iniciales de la investigación. Al fiscal le corresponde una función de dirección jurídica de las diligencias preliminares policiales; de aporte, de función fiscal y conformidad jurídica de la estrategia de investigación; de supervisión de la legalidad de la actividad policial en la investigación del delito -para evitar exclusiones de fuentes de prueba por ilegitimidad de su obtención-; y, de definición de aquellas diligencias legalmente admisibles y jurídicamente imprescindibles -cuya enmienda, subsanación, renovación y ampliación puede instar- para garantizar el éxito de su función acusadora. Ello no quita, desde luego, que la Policía Nacional, en virtud de su propia experiencia y riqueza profesional, brinde al fiscal recomendaciones en las estrategias de investigación del delito, como estipula el art. 65.4 NCPP.



En esta perspectiva se explica el art. 69 NCPP corresponde al fiscal de la Nación regular mediante Instrucciones Generales -que es el vehículo institucional en el que se expresa la misión de conducción de la investigación desde su inicio del Ministerio Público, tendente básicamente a estandarizar prácticas por categorías de delitos- los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de la investigación encomendada a la Policía Judicial -su función es de reglamentación específica, de fijar los detalles y reglas prácticas que han de conllevar las diligencias de investigación, obviamente con pleno respeto de la Ley, sin rebasarla ni desnaturalizarla-. Además, compete al fiscal de la Nación -primera autoridad del Ministerio Público- fijar las reglas internas que deben guiar las relaciones de los fiscales con la Policía Judicial, "para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este Código", lo que importa profundizar el nivel de confianza y comunicación entre Ministerio Público y Policía.

La conducción funcional del Ministerio Público, desde luego no importa que los fiscales intervengan en la jerarquía interna de la Policía ni en su distribución de trabajo; sus facultades solo se extienden a la realización de las diligencias de investigación, sin intervenir en la organización interna de la policía, que mantiene su propia dependencia jerárquica e institucional; además, el Ministerio Público no está facultado para aplicar sanciones en caso de incumplimiento de sus directivas, ya que la Policía depende de su propia organización interna (Duce/Riego).

## **6. Ministerio Público y excusa**

El fiscal no es recusable. Empero, como está vinculado a la justicia y debe defender el derecho objetivo, en caso se presenten las causales de inhibición judicial establecidas en el art. 53 NCPP, está obligado a apartarse o excusarse de la causa (arts. 19 LOMP y 61.4 NCPP), siempre -claro está- que incidan en la función del Ministerio Público y estén vinculadas a la actividad que en el momento está ejercitando el fiscal o habrá de hacerlo. La Ley, con esta previsión, busca preservar el criterio de objetividad de la función fiscal. Su intensidad, sin embargo, es menos exigente que la del juez, pues el fiscal no puede prejuzgar porque no juzga, requiere; los únicos que juzgan, y por ese motivo pueden prejuzgar, son los jueces (Bruzzone).

No es claro si puede instarse la separación del fiscal en sede judicial o que tal situación genere una nulidad de las actuaciones en las que intervino. Instar su separación por vía de un recurso jurisdiccional importaría homologar la necesidad de actuación objetiva con la recusación, lo que claramente no es de recibo, amén de equiparar el acto fiscal con el acto jurisdiccional. Lo que sí cabe, por imperio expreso del art. 62 NCPP, es un Petitorio al fiscal superior jerárquico para instar su separación, sin que esa medida en caso negativo pueda posibilitar un recurso jurisdiccional -solo él valora, incensurablemente y sin ninguna formalidad, la viabilidad de la abstención. No es posible estimar que la no abstención es causa de nulidad de actuaciones -el principio de taxatividad no se cumple en este caso-; la incompatibilidad, por consiguiente, no tiene efecto procesal alguno.

## **7. Ministerio Público y facultades coercitivas**

### **• Medidas de coerción e instrumentales restrictivas de derechos**

Las medidas de coerción e instrumentales restrictivas de derechos, en principio, están reservadas a la autoridad jurisdiccional (arts. VI del TP, 231 y 254 NCPP). Como excepción, en los casos de urgencia y de peligro por la demora, es posible que la Fiscalía pueda limitar derechos, pero solo en determinados supuestos taxativamente contemplados y con cargo a una inmediata resolución confirmatoria judicial.

Se trata, según el NCPP de las siguientes medidas:

- A. Incautación cautelar: art. 216.1.
- B. Video vigilancia art. 207.1.
- C. Pesquisas, retenciones con esa finalidad y registro de personas: arts. 208.1 (inspección) ,209.1(retención) y 210.1 (registro de personas).
- D. Examen corporal urgente bajo confirmación judicial ulterior y examen corporal nimio: art. 211.3 y 5.
- E. Incautación instrumental de bienes por peligro por la demora: art.218. 2.
- F. Exhibición y entrega de documentos no privados: art. 224.1.
- G. Aseguramiento de documentos privados art. 232.
- H. Clausura, vigilancia de locales e inmovilización de bienes por urgencia o peligro por la demora: art.241.

Las medidas coercitivas personales, que afecten el derecho fundamental a la libertad, llámese prisión preventiva (arts. 268-285 del NCPP) y la detención preliminar judicial (arts. 261-267 del NCPP), deben ser dispuestas necesariamente por un órgano jurisdiccional, salvo la detención Policial en supuestos de flagrancia (art. 259 del NCPP) y el arresto ciudadano (art. 260 del NCPP).

- **Citación compulsiva**

El art. 66 NCPP reconoce, asimismo, el poder de citación compulsiva del Ministerio Público, imprescindible para garantizar la obtención de información en el curso de la investigación preparatoria. En tal virtud, la Fiscalía puede citar a cualquier persona -imputado, agraviado, testigo, perito- para que declare y en caso de incumplimiento está facultada para disponer su conducción compulsiva. Esta medida restrictiva menor se levanta una vez realizada la diligencia que motivó la convocatoria del omiso y, en todo caso, antes de que transcurran 24 horas de su ejecución.

## **8. Organización**

El Artículo 36 de la Ley Orgánica del Ministerio Público nos indica los Órganos del Ministerio Público.

Son órganos del Ministerio Público:

1. El Fiscal de la Nación.
2. Los Fiscales Supremos.
3. Los Fiscales Superiores.
4. Los Fiscales Provinciales.

También lo son: Los Fiscales Adjuntos. Las Juntas de Fiscales.

### **2.2.2.4. Visión y Misión Institucional**

#### **Misión**

Defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.

#### **Visión**

Ser reconocido nacional e internacionalmente como una institución moderna y confiable, consolidada por la excelencia de sus servicios y el adecuado soporte médico, legal y forense; que contribuye a una recta y real administración de justicia y de esta manera a la convivencia pacífica y al desarrollo de la sociedad.

#### **2.2.2.5. Principios del Ministerio Público**

El Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal de la Nación -que no es, propiamente, un funcionario político, sino una alta autoridad del Estado-, es un órgano independiente de la administración de justicia y autónomo de los demás poderes del Estado. No puede identificarse con el Poder Judicial porque: i) Desde la Constitución de 1979, constituye un poder independiente' con un diseño institucional propio y órganos de línea jerárquicamente estructurados; ii) no dicta resoluciones con calidad de cosa juzgada-tampoco puede realizar actos de prueba en sentido propio (art. IV.3 TP CNPP)-; iii) no limita el libre ejercicio de los derechos fundamentales (art. VTP NCPP), salvo los casos legalmente reglados, no incidir definitivamente en el derecho a la tutela jurisdiccional; iv) sus principios organizacionales no son necesariamente los mismos, básicamente en lo referente a la independencia judicial, que se proyectan en los principios de unidad en la función y dependencia jerárquica -en esencia, expresados en la obediencia a directivas de actuación procedente del superior jerárquico, dentro del marco de la legalidad-; y v) no puede identificarse con la Administración porque su labor está orientada a los criterios de verdad y justicia, básicamente por el principio de legalidad y actuación objetiva; el fiscal no debe llevar a cabo los puntos de vista políticos y los objetivos del gobierno, sino aplicar el derecho.

Los principios institucionales que definen su organización, de carácter interno, son los de jerarquía y unidad en la función, a través de los cuales se pretende conseguir la uniformidad de la interpretación de la ley y la continuidad en la actividad por parte del Ministerio Público, independientemente de los cambios de los concretos fiscales que se vayan produciendo. De igual manera, otros dos principios centrales son los de imprescindibilidad y buena fe. (Barragán Salvatierra)

**A. Por el principio de jerarquía** los fiscales aun cuando actúen independientemente en el desempeño de sus funciones, como integran un cuerpo jerarquizado, subyace la noción de subordinación ante los miembros del Ministerio Público de mayor grado, por consiguiente:

1. Están sometidos al poder disciplinario de sus superiores [RN n. 1795-2013 y 3099-2013], que incluso tienen la facultad de sustitución o reemplazo cuando "no cumplen adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades" (art. 62 NCPP y 14 NCPP).
2. Deben sujetarse a las directivas o instrucciones, siempre legales, que le impartan sus superiores (art. 5 LOMP) –la Fiscalía requiere de patrones de uniformidad-. Estas instrucciones están sujetas a dos características básicas: (i) su juridicidad, en consecuencia, no son de obligatorio cumplimiento las instrucciones antijurídicas; en cuyo caso debe informar en esos términos al superior que la dictó -están vinculadas a la Ley y al derecho-; y (ii) las directivas o instrucciones deben tener un contenido general en orden a la unificación de criterios de interpretación de la ley de racionalizar los recursos para la persecución de los delitos, radicada en dos ámbitos precisos: el principio de oportunidad y en los interrogantes técnico-tácticos de la persecución penal. Las directivas, además, deben delinear pautas generales en pos de la represión del delito respetando acabadamente todos y cada uno de los derechos que se le conceden a los imputados durante el derrotero del proceso penal, así como también lograr una efectiva coordinación con las demás autoridades de la República. Este principio, en todo caso, tiene como límite insoslayable el principio de legalidad.
3. La posición procesal de la institución en el caso concreto es la del superior jerárquico, que guía especialmente el sistema de recursos (Ejecutoria Suprema 3131-2014/Huánuco, de 27-04-15). En efecto, la independencia de los magistrados del Ministerio Público no puede ser expresada de la misma forma que los magistrados judiciales debido al principio de subordinación jerárquica de sus miembros. Ello significa que están sometidos a sus superiores jerárquicos,

La STC n° 07717-2013-PHC|TC, de 09-06-15, reconoció la proyección procesal del aludido principio de jerarquía, que se define con la posición procesal del fiscal superior en grado que interviene en la impugnación. Sin embargo, limitó sus efectos a la exigencia de una motivación específica del órgano jurisdiccional para apartarse de la posición procesal del último fiscal bajo el entendido de que la opinión de los fiscales no vincula al juez y que la ausencia de una tal vinculación y el consiguiente aumento de la pena vulnera la interdicción de la reforma en peor.

Ahora bien, es correcto afirmar que el principio de jerarquía tiene evidentes efectos procesales. El más relevante se concreta en el sistema de recursos, en cuya virtud la posición procesal del fiscal superior en grado que interviene en el procedimiento impugnativo es la que corresponde al Ministerio Público como órgano público que actúa en el proceso penal. Siendo así, como el principio fundamental en materia de impugnación es el dispositivo -que da pie a los demás principios: *tantum devolutum quantum appellatum*, congruencia y *reformatio in peius*- no es posible, bajo ninguna circunstancia que el órgano jurisdiccional de revisión se desvincule del límite de la pretensión impugnativa cuando es del caso estimar el recurso acusatorio. No es un problema general del ámbito de las potestades jurisdiccionales, sino de límites referidos a la propia pretensión impugnativa, que es la que define la competencia del *Iudex Ad Quem*: el juez no puede exceder los ámbitos que fijan las partes cuando ejercen su derecho al recurso legalmente previsto.

- B. Por el principio de unidad en la función**, el Ministerio Público se concreta en cada oficina fiscal, no a título individual; es decir, todos los fiscales de la misma Fiscalía tienen igual competencia funcional para tratar el asunto penal encomendado, pero ellos representan a la institución, no a sí mismos. El indicado principio busca la unificación de criterios, y modos de actuación y proceder en la función fiscal (Rosas Yataco). Esta impersonalidad en la acción de la Fiscalía permite, por ejemplo, que un fiscal puede proponer impugnación y otro, del mismo oficio u oficina fiscal, formalizarla, o que durante el desarrollo del debate -

incluso de la causa en general- pueden turnarse los fiscales del mismo oficio; cada fiscal actúa por propia competencia, y, en su caso, el fiscal jefe del oficio -sin perjuicio de la potestad del fiscal de más alta jerarquía- puede renunciar a las impugnaciones propuestas por los fiscales adjuntos e invalidar cualquiera de sus iniciativas. Obviamente este principio no alcanza a la decisión de Fiscalías de rango superior en el asunto concreto cuando intervengan en atención a los diversos recursos y lógicas funcionales del respectivo proceso penal, en cuya virtud prima el criterio del fiscal superior en grado y, de ser el caso, el inferior debe amoldarse a lo decidido por el superior. El fiscal superior en grado tiene competencia superior, potestad de alta dirección y vigilancia sobre los fiscales inferiores del distrito judicial donde actúan.

- C. Principio de imprescindibilidad.** Se sustenta en los principios de legalidad y acusatorio. La presencia del fiscal, una vez que se inicia la relación jurídica procesal, es imprescindible (art.159.4 de la Constitución). No puede continuar el proceso penal sin que el órgano persecutor del deliro conduzca los actos procesales que le son propios en razón de su función. Su ausencia, cuando la ley establezca su obligatoria presencia, acarrea la nulidad del acto procesal o del procedimiento en su conjunto. Su par dialéctico, en términos de importancia y presencia en el proceso, es el abogado defensor.
- D. Buena fe.** La misión del Ministerio Público es la justicia, propiamente dicha, la tutela de intereses públicos (art. 159.1 de la Constitución). Su función no es formalizar la investigación preparatoria en todos los casos que conoce. Por tanto, no tiene como objetivo ser un inquisidor, persecutor o contendiente forzoso de los procesados, sino más bien, corresponde a la autoridad fiscal acusar cuando es debido y sobreseer cuando no hay indicios o sospechas suficientes de la ocurrencia de un delito o de la intervención delictiva del procesado. Debe evitar, en todo caso, que las reglas de un juego justo sean vulneradas [Rosas Yataco].

### **Principios del Ministerio Público en Materia Penal**

Los principios más distintivos que deben gobernar su actuación, principalmente en materia penal, son:

- **Principio de legalidad procesal**

Este principio siempre ha sido identificado con la obligatoriedad del ejercicio de la acción penal, es decir, el órgano estatal de persecución penal que representa el Ministerio Público debe efectuar la investigación de todos los hechos que revistan caracteres de delito "sin poder suspender, revocar o terminar anticipadamente la persecución penal"(Duce/Riego). Lo cual no significa otra cosa que afirmar que la solución de los conflictos sociales reside en la realización pública y obligatoria de la ley penal; esto es, conforme a este principio "toda conducta delictiva debe ser objeto de investigación, persecución penal y sanción" (Sánchez Velarde).

Desde otra perspectiva, SAN MARTÍN CASTRO sostiene que el principio de legalidad presupone que el fiscal debe actuar con respeto a las disposiciones del ordenamiento jurídico y en el solo interés de la ley. Con igual predicamento, DUCE y RIEGO apuntan que el principio de legalidad en el ejercicio de las funciones públicas es un principio general que rige la actuación de todos los funcionarios públicos, según el cual estos siempre deben actuar de conformidad a los preceptos de la Constitución y de las leyes. Y que este principio importa que las actuaciones que se realicen fuera del ámbito constitucional o legal deban ser consideradas nulas y pueden dar lugar a la aplicación de sanciones administrativas e, incluso, penales en contra de los respectivos funcionarios".

En efecto, consideramos que, en un sistema penal respetuoso del principio de última ratio, el principio de legalidad procesal no debe entenderse como aquella obligación que pesa sobre los funcionarios públicos de ejercer la acción penal en todos los casos previstos en la ley como delitos, sino como aquella garantía que consiste en el estricto respeto de los procedimientos previamente establecidos por la ley.

Visto el principio desde esta óptica, la obligatoriedad de la persecución penal por parte del Ministerio Público, que conlleva también a que el ejercicio de la acción penal sea irrevocable, constituye una actividad que, sin ningún problema, puede alternarse con la aplicación de mecanismos compositivos que se concretan en el principio de oportunidad reglada, pero siempre y



cuando se satisfaga los requisitos exigidos por la norma procesal penal para la operatividad de dichos principios.

- **Principio de objetividad**

Por el principio de objetividad los fiscales tienen la obligación de investigar y agotar el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución como para la defensa. Es decir, sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los que intervienen en el proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o desapasionada, debiendo atenerse únicamente a la realidad objetiva, que le permita, en ciertos casos, incluso no acusar.

En tal sentido, "el acusador público tiene el deber de ser objetivo, (lo que significa) que sus requerimientos y conclusiones deben ajustarse a las pruebas y al derecho vigente, resulte ello contrario o favorable al orientados por lo que en derecho corresponda, pues solo así cumplirá con el imperativo de ejercer sus funciones en defensa de la legalidad (Baclini).

El principio de objetividad significa también que los representantes del Ministerio Público han de actuar con lealtad respecto a la defensa del imputado, asegurándole la transparencia y el no ocultamiento de la evidencia disponible.

En nuestro ordenamiento procesal, el modelo de proceso penal obliga a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado, así lo impone el artículo IV.2 del Título Preliminar del Código Procesal. Penal de 2004. Asimismo, el artículo 61 de este mismo corpus adjetivo reafirma este principio al establecer que el fiscal "(...) adecúa sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley ( ...)".

En suma, la objetividad que ha de regir la actuación del Ministerio Público debe lograr que sus requerimientos sean formulados sin pensar en la protección de intereses particulares o subjetivos, sino que, a la luz de la Constitución y la ley, pueda incluso formular requerimientos no inculpativos y recurrir a favor del imputado.

- **Principio de autonomía**

Por principio de autonomía se entiende a la capacidad de autogobierno que tiene el Ministerio Público para definir su actuación, como institución,

dentro de sus funciones, que, dicho de otro modo, se puede entender como la prerrogativa de no ser influenciado por otros poderes formales o materiales (grupos de poder político, económico, sociales) al momento de planificar y ejecutar su programa político criminal.

Tal autonomía no implica que el Ministerio Público constituya un poder autárquico y que, por tanto, sea totalmente ajeno a los demás, pues en todo momento este tendrá que respetar los límites que fija el Congreso de la República a través de la promulgación de leyes penales y procesal penales; o establecer relaciones de coordinación con el Poder Ejecutivo "(...) a efectos de determinar e implementar sus políticas de persecución y coordinadas adecuadamente con la ejecución de la política criminal estatal (Oré Guardia)

La fuerza o debilidad que ha de caracterizar la autonomía del Ministerio Público debe apreciarse desde la determinación de su ubicación institucional, aspecto en el que la doctrina ha esbozado tres tendencias, yendo desde quienes niegan la autonomía al Ministerio Público hasta los que consideran que esta institución debe gozar de autonomía plena.

Así, la primera tendencia postula que el Ministerio Público debe formar parte del Poder Judicial debido a que la función que aquél cumple influye enormemente en la administración de justicia ... Sobre el particular, consideramos que esta tendencia no guarda relación con nuestra realidad, debido a que: "ya desde décadas anteriores a la promulgación de la Constitución de 1979, la subordinación del Ministerio Público al Poder Judicial significó un factor de demora y entorpecimiento de la administración de justicia, al haberse convertido en dictaminador previo de las causas antes de emitir resolución final la Corte Suprema, produciendo la ingente acumulación de expedientes en espera de ser dictaminados, y cuando ello se cumplía por las fiscalías, la mayoría de dictámenes emitidos resultaban intrascendentes (Bernaes Ballesteros).

La segunda tendencia, conocida como la postura "administrativista", al reconocer en el Ministerio Público un poder para canalizar la política criminal de un Estado, considera que esta institución debe permanecer en la órbita del Poder Ejecutivo.

Al respecto, consideramos que este modelo de organización, asumido principalmente por los Estados Unidos, resultaría incompatible y desventajoso en nuestro medio por cuanto podría menoscabar la independencia o autonomía del Ministerio Público tratándose de investigaciones en la que estén comprometidos altos funcionarios o ciertos grupos de poder; pero también cuando se trate de investigaciones por delitos cometidos por el propio Estado; o cuando se busque ahuyentar a la oposición mediante persecuciones políticas.

Por último, la tercera tendencia postula que el Ministerio Público debe ser una institución autónoma e independiente, lo que no significa que quede totalmente desvinculado de los poderes oficiales; antes bien, resulta clave generar, fortalecer y mantener relaciones de coordinación entre todos los órganos que participan en la realización de la política criminal del Estado. Esta última postura es la que se encuentra recogida por nuestro ordenamiento, tanto a nivel constitucional (art. 158 Const.) como legal (art. 1 LOMP).

- **Principio de jerarquía**

Por el principio de jerarquía se admite la creación o mantenimiento de relaciones de subordinación al interior del Ministerio Público, a fin de asegurar la actuación uniforme de la mencionada institución; esto es, resguardar la unidad funcional respecto de los órganos que la conforman (fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales).

Esta dependencia jerárquica es un principio ad intra, lo que significa que opera solamente en el ámbito interno del Ministerio Público, por lo que no es correcto entender que la dependencia jerárquica trasciende más allá de la propia institución. Como institución el Ministerio Público no depende ni puede depender de ningún otro poder.

El concepto de jerarquía expuesto, reconoce que en el Ministerio Público los superiores tienen la facultad de producir instrucciones que vinculan a sus inferiores, estando estos en el deber de cumplirlas cabalmente (art. 5 in fine LOMP), sujeción que no supone la afectación del principio de autonomía interna que se mantiene incólume, en la medida de que las directivas se ajusten a derecho y no respondan a casos concretos.

Así, tenemos que las directivas se ajustarán a derecho y, en consecuencia, serán legítimas cuando, como señala BRUZZONE, el que las dicte sea: a) el autorizado legalmente para ello (competencia formal); b) debe hacerlo justificando la necesidad del dictado de la instrucción (competencia material); e) nunca deben contravenir disposiciones legales; y, d) como actos administrativos, las instrucciones deben ser escritas, públicas y sería incluso conveniente que se oficialicen en los medios de publicación o particulares, de acción u de omisión, o combinadas entre sí; lo relevante es que se encuentren legalmente dictadas de acuerdo a los parámetros señalados.

Asimismo, mientras la disposición solo vincule al inferior jerárquico con efectos de alcance general o especial, pero referido a la correcta aplicación de las leyes y a la forma y límites de la intervención de los fiscales; con el propósito de lograr preservar una homogeneidad en la interpretación de las normas y en la actuación funcional, sin obligarles, en ningún caso concreto o particular, a que actúen de determinado modo, teniendo que regirse principalmente por la Constitución y la ley (art. 61.1 CPP 2004).

- **Principio de unidad**

El principio de unidad puede ser entendido desde dos puntos de vista: orgánico y funcional.

Desde el primero, la institución es considerada como un organismo único e indivisible a lo largo del territorio nacional. En este sentido, toda persona que haya sido nombrada como fiscal de forma regular puede actuar como su representante ante cualquier tribunal; actuación que implica el cumplimiento de sus obligaciones de forma coordinada, para que en cualquier caso cualquiera de sus iguales pueda continuar con su labor, es decir, es la institución como un todo la que interviene en un caso específico.

Desde el segundo, supone uniformidad u homogeneidad en la actuación y coordinación de todos los miembros de la institución. De este modo, con la vigencia del principio de unidad se pretende que la decisión de los integrantes del Ministerio Público se base en idénticas instrucciones (circulares, directivas) las que resultan clave para garantizar una actuación única y coherente. En los hechos, esto ha tenido como efecto que las

instrucciones se hayan convertido en una importante herramienta para el establecimiento de líneas de trabajo uniformes para el Ministerio Público.

- **Principio de interdicción de la arbitrariedad**

El principio de interdicción de la arbitrariedad es un principio general que supone un límite a la potestad de actuación de los órganos del Estado - alcanzando, por tanto, al Ministerio Público- exigiendo de ellos que no se cometan actos arbitrarios, es decir, caprichosos o que solo responden a intereses subjetivos y privados.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha manifestado que todos los organismos del Estado y los particulares, que dentro de sus funciones desarrollen todo tipo de procesos o procedimientos, cualquiera fuese su naturaleza, deben estar sometidos al debido proceso, proscribiendo, en consecuencia, todo ejercicio irrazonable y con desconocimiento de los principios y valores constitucionales de todo acto.

El referido tribunal ha precisado, además, cuándo el fiscal vulnera el presente principio, comprendiendo dentro de estos supuestos a los siguientes: a) las actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) las decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y e) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.

## **1. Delitos Contra la Administración Pública**

### **1.1. Abuso de Autoridad**

El primer injusto cometido por funcionarios o servidores públicos catalogado por el legislador es el delito de Abuso de Autoridad, al cual también la doctrina lo conoce como delito de “Abuso de Derecho”, tipificado en el artículo 376° del Código Penal, el cual establece que:

Art. 346°. – Abuso de Autoridad

El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años.

Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

La doctrina señala que la necesidad de la creación de este injusto se debe a la primordialidad de proteger las garantías del Estado Constitucional de Derecho y la defensa del Principio de Legalidad que rigen el Derecho Administrativo del Estado, pues, como es sabido, las condiciones jurídicas de Funcionario y Servidor Público, ameritan que estos adecúen su conducta únicamente a los parámetros establecidos en las leyes que rigen su función para una determinada prestación del servicio público. Ora sea un Alcalde, ora un secretario municipal, ora un regidor, o hasta el propio presidente de la república, tienen la obligación de actuar únicamente en los límites de la ley que rige su institución y principalmente su función.

El artículo en comentario, se dirige a la punición de aquellos funcionarios públicos que exceden su límite de acción, y ejercen de manera arbitraria la función pública, vulnerando el principio de legalidad principalmente.

Como señala Chanamé Orbe, (2009), en su Diccionario Jurídico, Abuso de Autoridad es aquella “arbitrariedad en uso indebido de las potestades en el ejercicio de atribuciones funcionales, administrativas o jerárquicas, tomando decisiones que afectan derechos o violan normas legales establecidas, o en perjuicio de una persona” (p. 18). El autor citado señala pues que el delito de Abuso de Autoridad, supone la manifestación de arbitrariedad del funcionario público y que, con esa acción, obliga a otra persona a realizar un acto que responde únicamente a voluntad del primero, pues resulta que la orden, en parte nisiquiera se encuentra establecida en la Ley.

Sobre este último punto, también se refiere el jurista Peña Cabrera Freyre, (2009), al sostener que:

Las garantías de un Estado Constitucional de Derecho, no tolera, ni admite ni justifica, cualquier forma del uso arbitrario del poder; ahí donde el funcionario público pretende sustituir la voluntad de la Ley por su propia voluntad, cuando sustituye, reemplaza los fundamentos y motivos de la legalidad por sus propias razones, haciendo de la aplicación de la Ley una fuente irremediable de arbitrariedades,

mediando la imposición de criterios subjetivos, antojadizos, a todas luces irrazonables (p. 208 - 209)

Se desprende, pues, que el jurista citado relaciona al arbitrariedad del funcionario con el delito de abuso de autoridad, materializándose cuando el agente activo ordena realizar una conducta determinada por su voluntad sobrepasando los límites de lo establecido en la Ley. En definitiva, la punición del delito en comentario proviene del hecho de actuar del funcionario cuando la ley no le permite hacerlo, de no actura cuando le obliga a hacerlo o de actuar de un mmodo prohibido por la ley o no previsto en ella.

#### **1.1.1. Sujeto Activo**

El delito en comentario es de comisión especial propia, esto significa que el sujeto activo debe tener características especiales que lo diferencia de las persona comunes, esta característica especial es que sea consideraao como Funcionaio o Servidor Público.

En lo que respecta al delito de abuso de Autoridad, el texto del artículo 376° del Código Penal establece de manera expresa que solo puede ser cometido por un Funcionario Público, dejando de lado al Servidor Público. Sin embargo, es oportuno mencionar que el texto del artículo sostiene que “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario (...)”, de este texto también se puede colegir que el delito puede ser cometido por un Servidor Público, en cuyo caso podrá ser procesado como cómplice.

#### **1.1.2. Sujeto Pasivo**

El sujeto pasivo en los Delitos Contra la Administración Pública, solo puede ser el ente abstacto del mismo, es decir, solo en su concepción subjetiva. Solo puede ser la Administración y la Correcta Prestación de los servicios públicos. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que es imposible que el sujeto pasivo sea el administrado afectado con el acto arbitrario, pues, a pesar que este pueda iniciar las acciones correspondientes, lo que se afecta los principios y los deberes de la prestación de los servicios públicos.

### **1.1.3. Modalidad típica**

El delito de Abuso de Autoridad tiene como presupuesto para su comisión la existencia de un “Acto Arbitrario” que puede ser realizado por el mismo Funcionario u ordenado por el mismo. La doctrina ha establecido en mejor medida este concepto que la jurisprudencia. Así, por “Acto” se entiende cualquier declaración administrativa o judicial que este dirigida a crear, modificar o extinguir una relación jurídica del agraviado, este puede ser un Acto Administrativo regulado en el artículo 1° de la Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”, o puede ser un Acto Jurisdiccional, como una sentencia o un auto. Esto supone también que la autoridad que comete el delito en comentario, tiene previamente la facultad o atribución para emitir ese acto administrativo, ello conyella a que este delito pueda ser cometido por un Alcalde, por un Gerente Municipal, Gerente Regional o por los magistrados; la configuración del mismo supone que ese acto sobrepase los límites establecidos por Ley, es decir, que el agente abuse de función para sustituir la ley por su voluntad. De esta línea también es el jurista Peña Cabrera Freyre, (2009) quien sostiene que:

No habrá arbitrariedad si es que le funcionario dispone un acto que no se encuentra comprendido en su esfera competencial legal, a su vez, debe ser un acto que se encuentra contenido en el marco de competencia funcional, es decir, el funcionario sí es legalmente competente paara dictarlo, pero lo hace en contravención a la Ley (p. 215).

Por otro lado, Pariona Arana, (2016), señala que si bien es cierto que el “acto arbitrario” como presupuesto necesario para la comisión de las dos modalidades “el “acto” arbitrario al que hace mención la norma no se refiere únicamente al acto administrativo –en sentido administrativo de resolución, de disposición–, sino más bien al concepto más general de “acción”, a cualquier acción arbitraria, independientemente de cómo se exprese o materialice” (pág. 95). Claro ejemplo de lo que menciona el autor citado, son las Detenciones Policiales en delitos Flagrantes, en el presente caso, las autoridades, en este caso los policías, necesariamente deben ajustar su conducta a lo establecido en el literal f. inc. 24) del artículo 2° de la



Constitución Política del Estado y conforme al artículo 259° del Código Procesal Penal. Pues muchas veces los policías no adecúan su conducta a lo establecido en las normas de procedimiento, razón por la cual también puede ser considerado como acto arbitrario, lo que conllevaría la comisión del delito en comentario.

Resulta, entonces, que la comisión de este delito supone que acto arbitrario que puede ser un acto administrativo o la mera acción de la autoridad, esté dentro de sus funciones, pero que rebase los límites que la ley establece. Este criterio también ha sido desarrollado por la jurisprudencia nacional, pues se sostiene que:

En el delito de abuso de autoridad, el acto dispuesto por el agente activo debe ser contrario a las normas legales que rigen el cargo que ostenta y que con dicho acto se obligue a otros a realizar una determinada acción (R.N.N.º 1174-2007-Cusco, 2009).

De igual forma, la jurisprudencia nacional también ha establecido la naturaleza de las modalidades del delito en comentario, al señalar que:

El delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 376 del Código Penal, es un delito de naturaleza comisiva y no omisiva; el mismo que tiene dos modalidades de ejecución: a) cometer un acto arbitrario cualquiera con perjuicio de terceros y b) ordenar un acto arbitrario cualquiera con perjuicio de terceros. En el primer de ellos, la consumación del delito se da cuanto el funcionario público dirige y ejecuta acciones destinadas a producir el acto arbitrario y el perjuicio de tercero; mientras que en el segundo supuesto, al ser un tipo penal de mera actividad, el delito se consuma al producirse la orden o mandato por parte del funcionario público (R.N.N.º 779-2004-Piura, 2004)

De lo citado en el párrafo anterior, se puede colegir que la jurisprudencia nacional ha establecido que el delito de abuso de autoridad es de naturaleza comisiva y no omisiva, esto quiere decir, que solo es punible a título de dolo, el funcionario público no puede alegar que no conocía la delictuosidad de su acto, pues es su deber y obligación tener conocimiento pleno de sus funciones en la Administración Pública y de los límites del mismo. Por otro lado, también señala la jurisprudencia que este delito es “mera actividad”,

esto es, que no es necesario comprobar los efectos de la delictividad de la acción o de la orden del funcionario público, pues basta comprobar que el acto administrativo o el acto como mera acción sean contrarias a la Ley y al ordenamiento jurídico y por consiguiente, que se compruebe la sola puesta en peligro del Bien Jurídico Protegido.

#### **1.1.4. Tipicidad Objetiva**

La tipicidad objetiva de este delito nos ayuda a entender la configuración del mismo, para ello, es necesario tener en cuenta lo señalado por la doctrina jurisprudencial nacional, el cual estableció que “el delito de abuso de autoridad se configura cuando un funcionario público realiza u ordena una conducta arbitraria, que rebasa sus atribuciones y competencia dadas por la Ley” (R.N.N.° 1666-2010 - Cusco, 2011).

Como señalamos líneas arriba, este delito es de mera actividad, lo que significa que no es necesario comprobar una lesión al bien jurídico “Administración Pública” para que se configure, basta comprobar que el agente haya realizado u ordenado una conducta adecuada a sus funciones pero que rebasa el límite de legalidad.

#### **1.1.5. Tipicidad Subjetiva**

El delito de abuso de Autoridad, solo es reprimible a título de dolo, no se admite la culpabilidad, es decir, la imprudencia en el actuar del Funcionario Público. Sin embargo, Peña Cabrera Freyre, (2009), sostiene que “la ilegalidad de la actuación funcional se encuentra comprendida en la estructura semántica de la tipicidad penal, por lo que la conciencia de la antijuricidad (Error de Prohibición) viene a entrecruzarse con la conciencia de la ilegalidad (Error de Tipo)” (pág. 224). Señala el autor que es permitido sustentar estas dos figuras, pero ante ellas, prevalece el Error de Tipo.

#### **1.2. Concusión**

El delito de concusión se encuentra tipificado en el artículo 382° del Código Penal, suponiendo, la tipificación de este delito se inclina no a la protección de la legalidad como sí lo hace el delito de Abuso de Autoridad, sino que responde a la protección de la “objetividad y correcto ejercicio de la función pública” del funcionario o servidor público, el delito expresa lo siguiente:

Art. 382. – Concusión

El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Este delito puede ser cometido tanto por un Funcionario como por un Servidor Público, la característica principal de este delito es el aprovechamiento del cargo público que tienen estos agentes para obtener de los administrados un beneficio patrimonial ilícito, con el uso de la coacción principalmente. El jurista Peña Cabrera Freyre, (2009), sostiene que en este delito se presenta la “figura del funcionario aprovechador, quien en franco abuso de su poder funcional, se las ingenia para obtener un provecho indebido, para ello infunde temor y/o coacción sobre la voluntad de los particulares” (pág. 275). Este punto también ha sido desarrollado por la doctrina jurisprudencial nacional, al sostener que “de la estructura típica del artículo 382 del Código Penal, se advierte que se trata de un delito especial, que exige determinada cualidad del agente, lo que conlleva a establecer que la esfera de los autores está limitada, en este caso solo funcionarios públicos” (R.N.N° 956-2011-Ucayali, 2012).

El presupuesto indispensable para la configuración del delito es el abuso del poder funcional, es decir, el funcionario o servidor pública coacciona para realizar o no un determinado acto administrativo principalmente, la doctrina jurisprudencial nacional ha desarrollado el punto del abuso del cargo de la siguiente forma:

Para configurar del delito de concusión se requiere: i) que el sujeto activo tenga la calidad de funcionario público; ii) que el funcionario haga abuso de su cargo y, iii) que este abuso del cargo incida sobre la voluntad del sujeto de tal modo que acceda a sus ilegítimas pretensiones, según el tipo penal sub júdice (R.N.N.° 1601-2006-Huarua, 2009).

De la jurisprudencia citada se puede colegir que, primero, el sujeto activo debe funcinario o servidor pública, a esto debemos agregar que esta

condición no debe ser en sentido formal, sino funcional, es decir, el agente debe estar ejerciendo su función durante la comisión del delito; así mismo, este ejercicio debe presentarse con abuso del cargo, es decir, el funcionario debe obligar al agraviado a entregar un beneficio patrimonial indebido, pues la ley no establece que los funcionarios o servidores públicos deban obtener algún beneficio de parte de los administrados para realizar o no un acto y, por último, que este ejercicio abusivo del cargo del funcionario, actúe y cause influencia en la conducta del administrado, de tal forma que este cumpla la voluntad del primero a fin de entregar, dar o hacer algo a favor del funcionario o servidor público o de un tercero. En esta línea también Torres Pachas , Rodríguez Vásquez , & Guimaray Mori, (s.f.), sostiene que “podemos afirmar que el núcleo de la prohibición penal radica en el ejercicio ilegítimo de las funciones y facultades que el servidor público detenta” (pág. 13). Cumpliendo, para ello, con los tres elementos que la jurisprudencia citada ha señalado.

#### **1.2.1. Tipicidad Objetiva**

La configuración del delito de concusión requiere que un funcionario o servidor público, haciendo uso abusivo de su cargo exija o haga pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos; es decir, constituye una exigencia indebida y arbitraria que puede ser explícita o encubierta; resultando que el agente no oculta a la víctima que él está exigiendo arbitrariamente algo indebido, siendo sus componentes materiales de tipicidad del comportamiento: a) abuso del cargo, b) obligar o inducir a una persona a dar o prometer, c) el elemento normativo: indebidamente, d) el objeto de la concusión: un bien o un beneficio, y e) el destinatario: para sí o para otro.

##### **a. Sujeto Activo**

Por disposición expresa de la Ley, el sujeto activo de este delito puede ser un funcionario o servidor público, definitivamente también es un delito especial propio por la naturaleza de la misma. El jurista Peña Cabrera Freyre, (2009), señala que “se admite la coautoría, en cuyo caso dos funcionarios o servidores públicos deben actuar a la misma vez” (p. 278). De igual forma, en caso de que el funcionario o servidor público utilice la ayuda

de una persona que no ostente estas características, el segundo podrá ser sancionado por complicidad primaria y complicidad secundaria.

### **b. Sujeto Pasivo**

El sujeto pasivo en el delito en comentario únicamente El Estado, y se afecta el bien jurídico “objetividad y correcto ejercicio de la función pública”. Sin embargo, la doctrina ha señalado que este delito es de naturaleza pluriofensivo, es decir, a parte de considerar al sujeto pasivo al Estado, también lo es el administrado que se ve obligado a reducir su patrimonio con la entrada del mismo al funcionario o servidor público para que este haga o no haga un determinado acto.

#### **1.2.2. Tipicidad Subjetiva**

El delito en comentario, únicamente es reprimible a título de dolo, no se admite la culpabilidad como base de punibilidad de este delito. Sin embargo, el jurista Peña Cabrera Freyre, (2009), señala que:

Lo singular de la presente tipificación sería el entrecruzamiento del Error de Tipo con el Error de Prohibición, donde el error sobre el carácter ilegal del acto es a su vez un desconocimiento de la antijuricidad. A tal efecto, la forma aplicable sería la de Error de Tipo (p. 290)

Resulta, entonces, que de cierta forma se puede sustentar el desconocimiento de alguno de los elementos del delito por parte del autor, esto, al amparo del Error de Tipo.

### **1.3. Peculado**

El delito de peculado se encuentra tipificado en el artículo 387° del Código Penal, el mismo que establece lo siguiente:

Artículo 387°. – Peculado doloso y culposo

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36°; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 3 del artículo 36°; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36°; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa

El delito de Peculado, ha sido ampliamente estudiado por la doctrina académica y doctrina jurisprudencial del Estado, en relación al primero de ellos podemos citar al jurista Peña Cabrera Freyre, (2009), quien sostiene que:

La tipificación del delito de Peculado, responde a la necesidad del Estado de proteger el patrimonio del mismo, el cual es asignado mediante diferentes formas, tales como bienes muebles e inmuebles o hasta en dinero propio. Antiguamente se relacionaba a este delito con el de hurto, la clasificación actual se dio como consecuencia de que el delito de hurto sea cometido por funcionarios del Estado, en cuyo caso debería ser llamado de diferente manera, a esto le correspondió Peculado. Sin embargo, es preciso tener en cuenta de que la razón para especificar la figura no residirá entonces en la naturaleza de la cosa, sino en el vínculo de confianza. (p. 342).

El vínculo de confianza a que hace referencia el autor citado es aquella relación que nace entre la Administración Pública y los sujetos de materialización de su voluntad, que son los Funcionarios o Servidores Públicos. Resulta que el Estado es propietario de bienes, los cuales pueden estar regulados en diferentes cuerpos normativos, como la Ley N° 29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”, o los que son regulados por la Ley N° 30225, “Ley de Contrataciones del Estado”, o aquellas que están reguladas en la Ley N° 27867, “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” o en la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” y, todos los bienes muebles e inmuebles y dinerarios son administrados por el titular de cada entidad y por los funcionarios que la Ley designe. El delito de peculado, supone la apropiación o utilización de cualquiera de los esos bienes que le estén confiados por razón de su cargo, en este caso, el delito será doloso; por otro lado, también se puede admitir la base culposa, la cual se da cuando el agente deja que un tercer se apropie o utilice los bienes de su cargo.

La doctrina jurisprudencial también ha desarrollado este delito, principalmente el Acuerdo Plenario N°4-2005/CJ-116 del 30 de setiembre del 2005. Este acuerdo plenario en su fundamento seis ha establecido que:

Para la existencia del delito de peculado no es necesario que el agente ejerza una tenencia material directa sobre los bienes que se le haya confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas. Pues es suficiente que el agente tenga la **disponibilidad jurídica**, es decir, la libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público, debiendo tener competencia funcional específica (Acuerdo Plenario N° 4-2005/CJ-116, 2005, p. 32).

La **disponibilidad jurídica**, a que hace referencia el Acuerdo Plenario N° 04-2005/CJ-116, supone la existencia de una relación jurídica entre el funcionario o servidor y entre la Administración Pública que lo haga directamente responsable y capaz de tomar decisiones sobre esos caudales asignados a su despacho. Por ello se establece que no es necesario que el agente tenga relación directa con los bienes, pues, puede que el objeto material pueda estar bajo administración de una Gerencia Municipal, pero,

la Alcaldía puede disponer libremente sobre él, lo cual hará que el Alcalde o los Regidores puedan cometer este delito.

De igual forma, es preciso señalar que el Acuerdo Plenario en comentario ha establecido que el bien jurídico se desdobra en dos objetos específicos, por un lado, la garantía de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública y, por otro lado, evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público, esto, a raíz de la consideración de este delito es pluriofensivo.

De igual forma, al desarrollar el Delito de Peculado Culposos, el Acuerdo Plenario ha establecido que:

Se hace referencia directamente a la sustracción producida por tercera persona, aprovechándose del estado de descuido imputable al funcionario o servidor público (Acuerdo Plenario N° 04-2005/CJ-116., 2005).

Resulta, que en la comisión del delito de Peculado Culposos, el funcionario o servidor público no es quien se apropia o utiliza los bienes de cargo, sino que este, por imprudencia, permite que un tercero, que puede ser otro funcionario, servidor o un particular, se haga con estos bienes de su cargo, en tal sentido se castigará la imprudencia del actuar del funcionario.

Entonces, para la comisión del delito de peculado no solo es necesario comprobar la cualidad del autor, sino las otras exigencias típicas, como la “vinculación funcional”, por consiguiente, el funcionario o servidor público, en cuanto su responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor del delito contra la Administración Pública, sin perjuicio - claro está- de los diferentes presupuestos que también se requieran para determinar la autoría de cada injusto, como por ejemplo en el delito de peculado, que exige además el vínculo funcional con el objeto.

### **1.3.1. Tipicidad Objetiva**

El delito de Peculado Doloso se configura cuando el agente, funcionario o servidor público, se apropia o utiliza, para sí o para otro, de aquellos bienes que estén confiados por razón de su cargo. La norma, expresamente



establece que cuando el valor de lo apropiado sobrepase diez UITs la pena será agravada.

Por otro lado, la configuración en su naturaleza culposa se da cuando el agente da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos del mismo.

#### **a. Sujeto Activo**

Sobre este particular, el jurista Peña Cabrera Freyre, (2009), refiere que:

Conforme a la estructura normativa del delito en comentario, la calidad de autor solo puede tenerla el funcionario o servidor público, a su vez que constituye un delito especial propio, características de los injustos contra la administración pública. (pág. 342)

Es necesario señalar que, si bien en el caso de su configuración culposa no es el funcionario o servidor público el que se apropia o utiliza los caudales, este será reprimido por dejar o permitir que un tercero, que puede ser otro funcionario, servidor o un particular, se apropie o utilice estos bienes.

#### **b. Sujeto Pasivo**

Definitivamente es el Estado, el cual se ve mermado en la riqueza de su patrimonio, el cual fue asignado en administración a los agentes que cometen o dejaron cometer este delito, perjudicando también a la comunidad y a la correcta prestación del servicio público.

#### **1.3.2. Tipicidad Subjetiva**

Como puede observarse, este delito puede ser reprimible tanto a título de dolo y de culpa, trayendo como agravantes en cada una de ellas según sea su comisión. A parte de ello, también se puede fundamentar el Error de Tipo, aunque este instituto solo sea válido para el Peculado Culposos.

#### **1.4. Cohecho**

Los delitos de Cohecho, son también conocidos como delitos de corrupción de funcionarios, es importante señalar que, a diferencia de los demás delitos contra la administración pública, estos delitos de cohecho pueden ser cometidos tanto por Funcionarios, servidores o los propios administrados. Centrándonos en una definición más acertada tenemos que:

Los delitos de cohecho, también denominados delitos de corrupción de funcionarios, representan un conjunto de delitos consistentes en la

compra-venta de la función pública. La característica común de estos es su “bilateralidad” o la naturaleza de “delitos de participación necesaria” ya que, siempre, son dos partes que intervienen (Montoya Vivanco, 2015, p. 95).

Resulta, que los delitos de corrupción de funcionarios trae un amplio catálogo de tipos penales que el legislador ha creado para cubrir cada uno de los vacíos por donde se podría ver menguada el correcto ejercicio de la administración pública, es así que estos delitos se clasifican en dos grandes grupos: el delito de Cohecho Pasivo y Cohecho Activo. La estructura del delito de cada uno varía, es importante desarrollar cada uno de ellos.

#### **1.4.1. Cohecho Pasivo**

En el delito de cohecho pasivo se encarga de sancionar a los funcionarios o servidores públicos que utilizan su astucia para intentar obtener un provecho indebido en razón del cargo que la Administración Pública les ha conferido, el delito a su vez se divide en Cohecho pasivo propio e impropio.

El delito de cohecho pasivo propio se encuentra regulado en el artículo 393° del Código Penal, el cual expresamente establece lo siguiente:

##### **a. Cohecho Pasivo Propio**

Artículo 393°. – Cohecho Pasivo Propio

“El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”

Sobre este delito es preciso señalar que “aludimos al cohecho pasivo cuando el acto ilícito es realizado por el funcionario o servidor público” (Martínez Huamán, 2015, p. 02). Del texto legal del artículo 393° del Código Penal podemos observar que se penaliza tanto la acción del funcionario en dos extremos: el primero, cuando este acepta, recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja con la finalidad de realizar un acto en violación de sus obligaciones; y, por otro, la sanción de la acción de que el funcionario público condicione su conducta a cualquier beneficio en su favor.

En esta misma línea, el jurista Peña Cabrera Freyre, (2009), señala que:

El delito de Cohecho Pasivo Propio tiene como protagonista principal al funcionario o servidor público, quien merced al donativo, promesa o cualquier tipo de ventaja o beneficio, hipoteca su actuación pública, la subasta al mejor postor, contraviniendo los criterios rectores de la Administración Pública, según los postulados del Estado Constitucional de Derecho pág. 465).

Resulta, entonces, que el sujeto activo en este delito únicamente es el funcionario o servidor público que, a merced de cualquier beneficio, condiciona su conducta con la finalidad de realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Sobre este particular, la Defensoría del Pueblo, (2013), ha sostenido que:

El delito de cohecho es muy frecuente en nuestra sociedad y es conocido en términos coloquiales como “coima”. Se dice que es “pasivo” cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario o servidor público que acepta o recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de donativo o ventaja de parte de un ciudadano (p. 18).

Por otro lado, en relación a bien jurídico en este delito, existe acuerdo entre la doctrina académica y la doctrina jurisprudencial nacional en señalar que

lo que se tutela con esta tipificación es la “imparcialidad” en el ejercicio de la función pública. De esta posición es Montoya Vivanco, (2015), quien sostiene que la imparcialidad como bien jurídico “implica el deber de los poderes públicos de obrar con neutralidad y objetividad para satisfacer el interés general y no los privados” (pág. 97).

Por otro lado, la doctrina jurisprudencial ha sostenido también que el bien jurídico tutelado es la imparcialidad en la administración, al señalar que:

El bien jurídico protegido en esta clase de delitos [cohechos], es preservar la regularidad e imparcialidad en la correcta administración de justicia en los ámbitos jurisdiccionales o administrativos (...) (Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de nulidad N° 1406-2007-Callao del 7 de marzo de 2008, Fundamento 5)

La protección de este delito se dirige a sancionar a los funcionarios que por un lado, reciben o aceptan recibir algún donativo para realizar u omitir algún acto en violación de sus obligaciones o, a recibir ese donativo luego de haber violado sus obligaciones.

#### **a. Cohecho Pasivo Impropio**

El delito de Cohecho pasivo impropio se encuentra regulado en el artículo 394° del Código Penal, el cual establece lo siguiente:

##### **Artículo 394° Cohecho Pasivo Impropio**

El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Sobre este particular, el jurista Peña Cabrera Freyre, (2009), señala que el delito de Cohecho Pasivo Impropio “adquiere dicha caracterización porque el funcionario o servidor público no lesiona sus deberes funcionales, es impropio, al adquirir el acto de soborno una naturaleza que no es propia, que contradice su propia esencia” (p. 490). Resulta que en este delito, no hay ninguna violación de las obligaciones del agente, sino que este lo hace, pero con cierta predisposición a emitir una decisión que favorezca al administrado o al particular, es decir, no se contraviene el deber de funcionalidad del agente, pero sí existe una predisposición al favoritismo en la emisión del acto administrativo o judicial.

Ahora bien, respecto al bien jurídico protegido en este delito, en un inicio existió una discrepancia entre la doctrina y jurisprudencia, de esto nos habla Montoya Vivanco, (2015), al señalar que:

En la doctrina penal ha existido discrepancias en cuanto al objeto de protección de este delito, pues se diferenciaban dos grandes posiciones: la primera de ellas considera a la honradez o integridad de la condición de funcionario público, como objeto de tutela; por otro lado, otra parte de la doctrina considera que es la gratuidad o no venalidad de la función pública. (p. 99)

En definitiva, la doctrina jurisprudencial ha sangrado este tema al señalar que lo que se protege es la venalidad del servidor público porque su sola existencia constituye la amenaza para el funcionamiento normal de la Administración, este es el criterio adoptado en la Sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema recaída en el Exp. N° 05-2002 del 3 de junio de 2008.

#### **1.4.2. Cohecho Activo**

Finalmente, la legislación también ha optado otra forma de penalización del delito de corrupción de funcionarios, esto, con la intención de proteger la Administración Pública por todas las formas de comisión, cuando la conducta provenga por parte de los mismos funcionarios, como por los

particulares. Le delito de Cohecho Activo Genérico se encuentra regulado en el artículo 397° del Código Penal, el cual establece lo siguiente:

Artículo 397°. – Cohecho Activo Genérico

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Teniendo en cuenta que los delitos de Cohecho, o delito de Corrupción de Funcionarios sancionan la compra venta de la función pública, este delito se dirige a sancionar a la otra parte del agente que no es el funcionario público, es decir, este delito sanciona a los particulares que, con la intención de que el funcionario público realice u omita actos en violación de sus obligaciones o realice u omita actos propios del cargo o empleo. De esta posición también es Gaspar Chirino, (2016), quien sostiene que:

Este delito se presenta cuando el particular (extraneus) ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público, donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones o, realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a sus obligaciones (pág. 56)

De este tipo de delitos se desprenden otras dos modalidades típicas, las cuales son el Cohecho Activo Transnacional, regulado en el artículo 397-A° y el Cohecho Activo Específico, artículo 398° del Código Penal, la característica de estos tipos es que todos son cometidos únicamente por particulares, con la intención de obtener algún beneficio por parte de la administración pública o de las autoridades en un determinado procedimiento administrativo o judicial

Por otro lado, el bien jurídico protegido en los delitos de cohecho activo varían de acuerdo a la circunstancia, de esta posición es Montoya Vivanco, (2015), quien señala que:

La determinación del bien jurídico puede resultar de los dos supuestos siguientes: primero, si el autor entrega la ventaja a un funcionario para que realice u omita un acto en violación de sus obligaciones, el bien jurídico protegido será la “imparcialidad” en la función pública. Segundo, si el autor entrega la ventaja a un funcionario para que realice un acto propio de su cargo, el bien jurídico protegido será la gratuidad o no venalidad de la función pública (pág. 100).

Resulta claro, entonces, saber diferenciar cuándo nos encontramos en cada uno de estos supuestos, pues depende de ello también ha de variar las medidas represivas del Derecho Penal.

#### **1.5. Negociación incompatible**

El delito de Negociación Incompatible se encuentra regulado en el artículo 399° del Código Penal, el cual establece lo siguiente:

##### **Artículo 399° Negociación Incompatible**

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Del texto legal citado podemos colegir que sanciona la conducta por la cual un funcionario o servidor público se aprovecha indebidamente de su cargo al mostrar un interés particular que entra en colisión con los intereses públicos o estatales. El tipo penal exige que dicho interés particular o privado se enfoque en alguna operación económica en la que intervienen el Estado y el funcionario público con motivo del cargo público que ocupa. En atención a lo anterior, tenemos que Chanjan Document, Solis Curi, & Puchuri Torres, (2018), sostienen que en el presente delito, el funcionario “se aprovecha de su cargo para sí o para otro, al mostrar un interés indebido que entra en colisión con los intereses públicos o estatales” (p. 13).

Existe negociación incompatible cuando el funcionario o servidor público demuestra interés en la contratación de un bien o servicio por parte de la Entidad que lo solicita, esto puede ser producto de un proceso de licitación o de alguna otra modalidad de contratación sujeta a la Ley N° 30225, “Ley de Contrataciones del Estado”, de igual forma, también existe el delito cuando se interesa en una operación económica, como por ejemplo, la disposición de viáticos para un viaje con fines de la Entidad. Ha de notarse que el límite de este delito culmina con el simple interés, hecho que lo diferencia del delito de Peculato, pues en este último, el agente sí interviene con total favoritismo en el proceso de contratación pública. De ello resulta que el delito de Negociación Incompatible se consuma cuando se acredita el interés del funcionario o servidor público por el contrato u operación económica.

Por otro lado, en cuanto al bien jurídico tenemos que el profesor Etcheberry (citado por Gaspar Chirino, 2016), sostiene que:

En este delito, el legislador desea proteger la apariencia de imparcialidad y honestidad que debe tener la Administración pública. Esta apariencia se ve lesionada si el funcionario se “desdobla”, según la expresión de Soler, y representa su propio interés a la vez que el interés público (p. 58).

De igual forma Montoya Vivanco, (2015), sostiene que “el bien jurídico específicamente protegido en el delito de negociación incompatible es la objetividad o imparcialidad de la actuación del funcionario en el marco de contratos u operaciones económicas en las que participe el Estado” (pág. 131). Esto, independientemente del bien jurídico general que es la Correcta Administración Pública.

#### **1.5.1. Tipicidad Objetiva**

Del texto expreso, y de lo sostenido por la jurisprudencia nacional se configura el delito de negociación incompatible cuando se acredita que el funcionario o servidor público tiene interés en un determinado contrato de su dependencia, esto, lo hay señalado en la sentencia emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, recaída en el expediente N° 30-2010, del 7 de noviembre de 2011, donde señaló que



“por interés debe entenderse cualquier acto material, que en el contexto de un contrato u otra operación realizada por el Estado, exprese un interés privado supuesto sobre el interés público que le demanda el ejercicio del cargo”.

### **c. Sujeto Activo**

Del texto expreso se colige que únicamente puede ser sujeto activo un funcionario o servidor público, cuando la norma señala “en beneficio propio o de tercero”, hace referencia a la participación de un tercero, en cuyo caso, creemos podría responder como complice primario o secundario según sea el caso. La coautoría solo será procedente si durante toda la comisión del delito también participa otro servidor o funcionario público.

### **d. Sujeto Pasivo**

A diferencia de los delitos de Abuso de Autoridad o concusión, sostenemos que este delito no es pluriofensivo, pues solo se dañaría al Estado como sujeto pasivo.

#### **1.5.2. Tipicidad Subjetiva**

El delito en comentario, únicamente es reprimible a título de dolo, no se admite como base de la punibilidad la culpabilidad. Sin embargo, también creemos que se puede sustentar el Error de Tipo como atenuante en el presente delito.

#### **1.6. Tráfico de influencias**

El delito de tráfico de Influencias se encuentra tipificado en el artículo 400° del Código Penal, redactado de la siguiente manera:

Artículo 400°. – Tráfico de Influencias

El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa. De la lectura del artículo 400° del Código Penal, se puede colegir que demuestra la presencia de una persona diferente al funcionario público que primeramente incia las acciones de la comisión del tráfico de influencias, de ello resulta que este delito sanciona a aquella persona que, a cambio de un beneficio, ofrece interceder o influenciar, directa o indirectamente, ante un magistrado, fiscal u otro funcionario con potestades jurisdiccionales, invocando tener influencias sobre sus decisiones.

Sobre este particular, es importante la clasificación o denominación que la doctrina ha asignado a cada una de las personas que actúan en este ilícito. Así, el jurista Peña Cabrera Freyre, (2009), sostiene que:

En el delito de tráfico de influencias tenemos la presencia de tres protagonistas, el “traficante de influencias”, el “comprador de infuelcias” y el “funcionario público” quien está conociendo o conocerá un caso administrativo o judicial en la cual tomará una decisión definitiva de interés del comprador. (p. 578)

La norma señala también, que el traficante de influencias podrá ser también un funcionario o servidor público, en cuyo caso tenemos que la pena se agravaba. Este delito, se presenta en mayoría de las instituciones públicas que tengan como fin emitir actos administrativos o sentencias judiciales, razón por la cual el derecho penal ha decidido penalizar para proteger la Administración Pública.

Respecto al bien jurídico protegido en este delito la doctrina ha desarrollado un amplio catálogo de teorías que buscan justificar la tutela del delito, así, Montoya Vivanco, (2015), señala que:

Respecto a la determinación del bien jurídico en este delito se ha identificado cuatro postruras sobre el mismo, a saber: La Teoría del “prestigio o buena imagen de la administración pública”, la Teoría de “la imparcialidad de la función pública” o el “patrimonio personal”; Teoría de la imparcialidad y la Teoría de la Institucionalidad de la administración pública. (ps. 143-144)

De todas estas teorías, la más aceptada es la última, pues se establece que el delito de tráfico de influencias no sanciona el mero hecho de poseer

influencias, sino que establece como riesgo prohibido la acción de invocar influencias existentes o no, con el fin de comunicar de manera verosímil la posibilidad de interferir en el correcto funcionamiento de la administración pública. La “institucionalidad” debe ser entendida como “el mandato constitucional de preservar una institución vital de la sociedad, ampliamente influenciable, de ataques periféricos (porque no atacan al núcleo de su decisión o gestión, como sí sucede en la colusión o el cohecho, por ejemplo) que coadyuvan a una cultura de corrupción, y que político-criminalmente es necesario frenar.

#### **1.6.1. Tipicidad Objetiva**

La configuración de este delito se da cuando aquél que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo.

##### **e. Sujeto Activo**

Del primer párrafo del texto legal se colige que el sujeto activo puede ser cualquier persona ajena a la administración pública, es decir, un no funcionario o servidor público, a este agente se le conoce como el “traficante de influencias”; por otro lado, del segundo párrafo del mismo artículo tenemos que también el agente puede ser un funcionario o servidor público, en cuyo caso la pena se agravará.

He de notar que en este delito aparecen tres protagonistas, el “traficante de influencias” “el comprado de influencias” y el “funcionario o servidor público”; pero, el comprador de influencias no puede ser considerado como el agente activo, pues del mismo texto legal se depende la naturaleza del mismo delito.

##### **f. Sujeto Pasivo**

El delito de Tráfico de influencias resulta ser pluriofensivo, pues estamos ante una figura que no solo daña a la Administración Pública y la correcta prestación de los servicios públicos, sino que también corre el riesgo de ser vulnerado el patrimonio del comprador de influencias cuando, el “traficante

de influencias” utiliza astucia, engaño o ardid para hacerse con el patrimonio del primero con la excusa de interceder por él ante un funcionario o servidor público. En este caso, el delito correspondiente ha de ser el de estafa.

#### **1.6.2. Tipicidad Subjetiva**

La represión de este delito es únicamente reprimible a título de dolo, no se admite la culpa como base de la punibilidad. Resulta importante señalar que, desde nuestro punto de vista, tampoco podría ser admitida el Error de Tipo o de Prohibición, por ser instituciones muy difíciles de probar en este tipo de delitos.

#### **1.7. Enriquecimiento Ilícito**

El delito de enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado en el artículo 401 del Código Penal, el cual, expresamente establece lo siguiente:

##### **Artículo 401° Enriquecimiento ilícito**

El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.

De la lectura del texto legal se desprende que el ilícito en comentario sanciona aquella conducta mediante la cual el funcionario o servidor público incrementa ilícitamente su patrimonio en relación a sus ingresos legítimos,

esto lo hace abusando de su cargo. La norma señala que cuando el agente sea un funcionario o servidor público la pena ha de agravarse.

El tercer párrafo del artículo en comentario presenta una herramienta importante para que el sistema penal actúe de manera más eficaz posible, esto es el valor de indicio de enriquecimiento ilícito al aumento del patrimonio y a la declaración de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de su sueldo o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos. Resulta, entonces que si un funcionario percibe S/ 2,000.00 como remuneración mensual, ¿sería posible que al final del año este cuente con S/ 900,000.000? definitivamente sería cuestión de una evaluación teniendo en cuenta la fórmula citada por la ley y en apoyo de los informes periciales correspondientes.

Por otro lado, es necesario señalar que el bien jurídico del enriquecimiento ilícito tiene naturaleza autónoma dado que no depende del bien protegido en un delito precedente (el que motiva el enriquecimiento). Esto es así porque las conductas precedentes no tienen que ser, necesariamente, otros delitos de corrupción o cualquier otro delito. Por el contrario, es suficiente que la fuente ilícita se constituya por actos no ajustados a derecho, dentro de los cuales están los delitos de corrupción, pero también los delitos comunes y las infracciones administrativas. En ese sentido, Montoya Vivanco, (2015), señala que el bien jurídico protegido en este delito es “el correcto y normal funcionamiento de la administración pública”. (p. 121)

#### **1.7.1. Tipicidad Objetiva**

La configuración de este delito “se da cuando el funcionario o servidor público, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos” (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 23). En esa misma línea se considera que existen indicios de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notorio y excesivamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de

los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.

#### **g. Sujeto Activo**

Del texto expreso de la ley se colige que el sujeto activo necesariamente debe ser un funcionario o servidor público, ratificando de esta forma que estos injustos son delitos especiales propios.

#### **h. Sujeto Pasivo**

Por otro lado, no es admisible considerar que en este injusto se pueda considerar un delito pluriofensivo, pues de la misma lectura al texto legal, se colige que este injusto daña únicamente a la Administración Pública y, más específicamente, al patrimonio del Estado, el cual se ve menguado por las acciones ilícitas de los agentes.

#### **1.7.2. Tipicidad Subjetiva**

El tipo penal en comentario, únicamente es sancionable a título de dolo, no se admite la culpabilidad, ni el Error de Tipo ni Error de Prohibición como casusas que puedan atenuar o extinguir la responsabilidad penal de los agentes.

### **2. La Pericia en el Sistema Peruano**

Vivanco, (citado por Coello Huamán , 2019) sostiene que “la pericia es un proceso de estudio, compilación y valoración, para la extracción de criterios analíticos que aporten sustento al dictamen del perito” (p. 35). De igual forma, Goroztiaga (citado por Coello Huamán , 2019), afirma que:

La pericia son aquellos conocimientos, destrezas y experiencias en materias contables o relacionadas, a la orden del bienestar social. El empleo de los servicios especializados de un Contador Público Colegiado para ejercer la labor del perito de parte constituye una certeza en la formación integral del mismo, y el reconocimiento que como profesional tiene (p. 35).

La pericia, en sí, resulta ser la aplicación de conocimientos científicos, técnicos o artísticos para la solución de un determinado problema o asunto; su aplicación requiere de una persona que disponga de esos conocimientos,

a quien se le conoce como perito. El término “perito” proviene del latín “expertus” participio pasado del verbo “experiri” que significa: “hacer experiencia de”.

En esa misma línea, Flores Polo, (2002), señala que:

Se trata pues, de la persona competente en determinada ciencia, arte o industria, y que asesora y que asesora al Juez respecto de algún hecho o circunstancia cuya apreciación exige conocimientos de carácter técnico (p. 573).

Los objetivos que persiguen estas personas especialistas en algún conocimiento, ciencia, arte o industria, son la solución de conflictos suscitados en diferentes ámbitos jurisdiccionales, en ese sentido, estas pericias sirven como herramientas indispensables de las que el Juez se apoya para resolver un determinado caso, o para que el Fiscal fundamente sus medios probatoris como pruebas para acreditar la comisión de algún delito.

Las pericias en el sistema peruano, son utilizadas en procesos penales, civiles, laborales, tributarios entre otros. La finalidad, es la misma, resolver un determinado problema. En cuanto al Derecho Civil, tenemos que el artículo 262° del Código Civil establece que las pericias civiles procede cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artística u otra forma análoga en cualquier proceso. La pericia en materia civil se regula entre los artículos 262° al 271° del Código Civil. Por otro lado, en materia penal, la pericia procede siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. La pericia en materia civil se regula entre los artículos 172° al 181° del Código Procesal Penal.

### **2.1. Clases de Peritos**

En el sistema peruano, existe una clara diferencia de la clasificación de los peritos principalmente en el Código Procesal Penal y en el Civil, los cuales los clasifican de la siguiente manera:

#### **2.1.1. Peritos de Oficio:**

Los peritos de oficio son aquellos profesionales designados por el funcionario competente, como los jueces, los fiscales, los vocales de la Corte Superior o de la Corte Suprema para la actuación en algún asunto que escape de sus posibilidades intelectuales. Los peritos de oficio únicamente pueden ser aquellos adscritos al REPEJ o REPEF, Registro de Peritos de la Corte Superior o Registro de Peritos Fiscales, respectivamente. La acción de estos peritos puede ser definitiva para culminar con el proceso y con el litigio.

#### **2.1.2. Peritos de Parte:**

Son aquellos profesionales solicitados por las partes inmersas en el proceso, en virtud de considerar otro criterio fundamentado desde sus posiciones. Estos peritos tienen como finalidad controlar la objetividad y la veracidad de los peritos de oficio, son contratados por las partes en el litigio y no necesariamente deben ser los adscritos al REPEJ o REPEF.

#### **2.1.3. Peritos Dirimientes:**

Son aquellos convocados por los Magistrados del Poder Judicial y deben estar debidamente contemplados en la nómina oficial de REPEJ, son los que aportan una tercera posición desmontando la discordancia que pueda suscitarse entre dos o más dictámenes periciales a través de la formación de un criterio objetivo. Estos peritos son convocados cuando ocurre una discrepancia entre los peritos de oficio y los de parte.

### **2.2. Clases de Pericias**

Por otro lado, la legislación peruana ha establecido que existen diferentes tipos de informes periciales aplicados al apoyo de la función Fiscal o jurisdiccional, las cuales desarrollaremos a continuación:

#### **2.2.1. Pericias Civiles:**

El artículo 252° del Código Civil establece que las pericias civiles proceden cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artística u otra forma análoga en cualquier proceso. La pericia en materia civil se regula entre los artículos 262° al 271° del Código Civil.



### **2.2.2. Pericias Penales:**

La pericia en materia penal procede siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. La pericia en materia civil se regula entre los artículos 172° al 181° del Código Procesal Penal.

### **2.2.3. Pericias Laborales:**

En materia laborales, la pericia procede para resolver problemas sobre los pagos irregulares de pensiones o remuneraciones de los trabajadores y estos son tratados por los procedimientos laborales.

### **2.2.4. Pericias Tributarias:**

Las pericias tributarias proceden cuando son de este carácter, como infracciones, extorsión, lavado de dinero, evasión de impuestos y etc.

## **2.3. Pericias en los delitos Contra la Administración Pública**

Los delitos contra la Administración pública, son un catálogo normativo que sanciona aquellas conductas realizadas por parte de los funcionarios o servidores públicos o por parte de los particulares, en contra de la Administración Pública, en donde el bien jurídico general tutelado es la Correcta Administración Pública. La sección VIII de nuestro Código Penal ha establecido dos grandes clasificaciones de estos delitos, por un lado, tenermos delitos contra la Administración Pública cometidos por particulares y, por otro, delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o servidores públicos.

Respecto al primer de ellos, no se presenta mayor dificultad en la determinación de los responsables; por otro lado, en la violación de los deberes funcionariales por parte de los funcionarios o servidores públicos sí se presentan algunas dificultades, principalmente en los delitos que afectan el patrimonio del Estado, como el delito de Peculado, Enriquecimiento Ilícito y Malversación de Fondos, entre otros.

Resulta, que para la investigación y consecuentemente sanción de estos delitos, amerita que el sistema Fiscal y Judicial apoyen sus decisiones en conocimientos periciales científicos, técnicos, artísticos o industriales, pues

la complejidad de algunos puntos del proceso, escapa de las posibilidades académicas de los jueces y fiscales.

Es en estos puntos, en donde los peritos cumplen un rol importantísimo, para la resolución de estos asuntos. La utilización de los informes periciales se realizan principalmente durante toda la Etapa de Investigación Preparatoria en el Sistema Procesal Penal peruano, pues conforme al artículo 321° del Código Procesal Penal se establece que la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado prepara su defensa. En ese sentido, la Policía Nacional del Perú y sus órganos especializados en criminalística, la Dirección de Policía Contra la Corrupción, entre otras instituciones, están en la obligación de prestar el apoyo necesario que el fiscal requiera y, entre ellos, el apoyo pericial.

El apoyo pericial en los delitos contra la administración pública, proviene de la Dirección Policial Contra la Corrupción, por parte del Registro de Peritos Fiscales y del Registro de Peritos Judiciales, los principales peritajes que se realizan en estos delitos con los contables, económicos y grafotécnicos, los cuales procederemos a resolverlos:

#### **2.3.1. Peritaje Contable**

El Perito Contable es aquel profesional calificado en ciencias y técnicas contables que brinda sus servicios para opinar sobre controversias principalmente de carácter patrimonial en su condición de auxiliar de justicia a través de su informe.

Sobre este punto Silva Cayao, (2016), refiere que:

El perito contable, es el profesional con suficientes conocimientos de la ciencia y técnicas contables cuyos servicios son requeridos por el poder judicial para superarlas dificultades que se oponen al conocimiento directo de los hechos por parte del juez en los litigios sobre aspectos patrimoniales de diversa índole. Los resultados de su labor los expone en el informe pericial, que es un instrumento de prueba científico, técnico, objetivo, razonado, imparcial, concluyente. (p. 23)“

Este tipo de pericias son las más utilizadas en los procesos de investigación de delitos contra la administración pública, principalmente en los delitos de Peculado, Colusión, Malversación de Fondos, entre otros.

### **2.3.2. Peritaje Económico**

Estos peritajes son realizados por los peritos económicos, son profesionales económicos o contables, la finalidad de estos es la integración de sus conocimientos sobre economía y auditoría con los correspondientes al sistema legal, y mediante la investigación, está habilitado para evaluar un hecho económico. La revista “El Mundo Financiero”, (2018) ha precisado que el peritaje económico aplicado a los delitos contra la administración pública pueden ser los siguientes:

**Inversiones:** se analizan las situaciones sobre asesoramiento irregular, que haya implicado inversiones negligentes, imprudentes o inadecuadas.

**Derivados:** el perito puede prestar asesoramiento para analizar contratos de divisas a plazo, interés de divisas y otras inversiones complejas

**Préstamos Inmobiliarios:** sean estos residenciales, privados o comerciales. Se pueden relacionar a la acción de prestamistas o tasadores de forma irregular o negligente.

**Fraude bancario:** mediante el análisis de posibles irregularidades, falsificaciones o mal uso, **el perito informará sobre cualquier anomalía en las cuentas bancarias.**

**Banca y finanzas:** el espectro de acción es muy amplio, e incluyen la banca comercial, banca de inversión, banca minorista, banca corresponsal, financiación y gestión de inversiones

Por otro lado, el Gabinete Profesional de Peritos Judiciales, (2020) señalan que este tipo de informes suelen tener asociada una cantidad abundante de documentos o datos que es necesario analizar de forma adecuada, pueden

ser aplicados “a análisis de patrimonio, responsabilidad civil, estudios de indemnización e informes de lucro cesante y daños emergente”. Este peritaje puede ser aplicado también a los procesos por Enriquecimiento Ilícito de los funcionarios, teniendo en cuenta su remuneración y el notorio crecimiento de su patrimonio al margen de sus remuneraciones y la discordancia entre ellos.

### **2.3.3. Peritaje Grafotécnico**

Las pericias grafoténicas son métodos científicos aplicados a los documentos, para determinar si la letra o la firma del mismo corresponde a una persona en específico. En los delitos contra la administración pública no son muy frecuentes, pero sí existen casos en los que se aplica. Tal es el caso del proceso penal seguido contra FRANK JHONATAN NUÑEZ GARZÓN, como cómplice primario del delito contra la Administración Pública – Peculado en agravio del Estado; y, como autor de los delitos Contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita Para Delinquir, en agravio del Estado y Contra la Fe Pública – Falsificación de Documentos, en agravio del Estado y de Carlos Enrique Mesa Angosto y Jaime Ponce de León Muñoz.

Resulta que, en este caso, el Fiscal Superior formuló acusación entre otros contra Frank Jhonatan Núñez Garzón como CÓMPLICE PRIMARIO del delito Contra la Administración Pública – Peculado; y, como AUTOR de los delitos Contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita para Delinquir; y, Contra la Fe Pública – Falsificación de Documentos- toda vez que, entre diciembre del año dos mil y abril del año dos mil cuatro, conjuntamente con sus coprocesados Falla Guerra (Jefe de Tesorería del Consejo Supremo de Justicia Militar), Alfredo de Solano Rosembergtt (Asistente), Palacios Pacherrres, Castañeda Ruiz, y demás personal que laboró en las divisiones Cuentas Judiciales del citado concejo de justicia, se habrían apropiado de la suma de un millón trescientos cuatro mil novecientos cincuenta y siete nuevos soles, siendo que el acusado en mención como Informático de la División de Cuentas Judiciales de la entidad estatal agraviada se encargó de ver cuáles eran los oficios y depósitos judiciales que iban a ser utilizados para sustraer el dinero, vale decir, tenía que ver la forma de camuflar los

retiros que realizaban sus coprocesados; imputación que se corrobora con el reconocimiento de los hechos imputados que efectúa Núñez Garzón en su declaración voluntaria de fecha 28 de abril del 2004, adjunta al Dictamen Pericial de Grafotecnia N° 732-05-DIRCRI-DDVGRA-PNP de fecha 23 de marzo del 2005, donde se concluye que los manuscritos de tal “declaración Voluntaria del señor provienen del puño grafico de Frank Jonathan Núñez Garzón” no obstante negar posteriormente tal reconocimiento inicial, en su manifestación.

Al final del proceso, y una vez acreditada la autenticidad de los documentos redactados y firmados por Frank Jhonatan Núñez Garzón se le condenó por los cargos mencionados a la pena privativa de libertad de cuatro años con carácter de suspendida.

Resulta importante la presencia y la práctica de las pericias grafoténicas en los procesos contra delitos contra la administración pública, pues su cientificidad permite la identificación de los responsables de los delitos, pues sucede que aveces, los funcionarios niegan haber firmado o redactado algunos documentos que son relevantes para la comisión de delitos como peculado, colusión o apropiación ilícita.

### **3. El personal de Apoyo del Ministerio Público**

La actuación del personal del ministerio Público es imprescindible para el normal desarrollo de la persecución penal.

La ley Orgánica del Ministerio Público D.L 052 incorporado en la constitución del año 1979, pero entró en vigencia en marzo del 1981 en adelante, desde donde se le comenzó a considerar como un organismo con actuación independiente. EL ministerio Publico no es considerado como un poder en el Perú, sino como un organismo constitucionalmente autónomo, a diferencia de Francia y otros países donde el Poder Judicial y el MP dependen de un solo órgano, es decir, como un organismo anexo al Poder Judicial.

El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las

limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación (052, 1981).

Para cumplir con sus funciones el Ministerio Público se encuentra organizado jerárquicamente en donde el Fiscal de la Nación es el máximo representante de este. Dentro de este organigrama se encuentran todo el personal auxiliar como es el Asistente en Función Fiscal y el Asistente Administrativo.

Según el Manual de Organización y Funciones y su respectivo reglamento del Ministerio Público, el personal de apoyo se divide entre Asistentes Administrativos propiamente dicho, Asistentes Administrativos – Sistema Fiscal y Asistente en Función Fiscal, de los cuales solo el Asistente Administrativo en Sistema Fiscal y el Asistente en Función Fiscal, cumplen labores propiamente de función fiscal.

El perfil del Asistente en Función Fiscal y Asistente Administrativo se comenzó a establecer en el año 1998, mediante Resolución de Gerencia General N° 274-98-MPFN-GG, de fecha 16 de noviembre del año 1998, mediante el cual se aprobó el perfil de cargos de Asistente en Función Fiscal y Asistente Administrativo del Sistema de Fiscalía del Ministerio Público, donde se establecía como sus funciones los siguientes:

### **3.1. Asistente en Función Fiscal**

Funciones:

Elaborar proyectos de formalización o archivo de denuncia definitivas o provisionales, elaborar proyectos de dictámenes de expedientes sumarios y ordinarios, elaboración de notificaciones, efectuar diligencias conjuntamente con el Fiscal (operativos, intervenciones, etc) y redactar actas (levantamiento de cadáveres, visitas a dependencias policiales, etc).

Conocimientos.

Conocimientos del código penal y civil, computación básica, redacción y ortografía, mecanografía, relaciones humanas y conocimiento del código procesal penal.

Actitud/Aptitud

Confidencialidad, conducta intachable, ética, puntualidad, seriedad.

Asimismo, en el portal del Ministerio Público, en el área de concursos públicos, se apreciaba que el postulante a Asistente en Función Fiscal debe ser estudiante universitario que haya cursado como mínimo el quinto año de Derecho, experiencia mínima de 1 año en Derecho Penal y/o Derecho Procesal Penal, de preferencia haber realizado SECIGRA en el Ministerio Público. Como requisitos adicionales, se requería que éste cuente con capacitación y especialización de preferencia en áreas del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal dentro de los últimos 5 años y con conocimiento del idioma quechua, inglés u otro idioma a nivel básico.

### **3.2. Asistente Administrativo.**

Funciones:

Recepción, clasificación y registro de investigaciones policiales y denuncias, administrar la documentación clasificada analizándola y sistematizándola, clasificar y archivar la documentación de la fiscalía, redacción de diversos documentos relacionados con denuncias e investigaciones que ventila la fiscalía, seguimiento de los expedientes que ingresan a la Fiscalía, preparando periódicamente los informes de situación, coordinar y ejecutar actividades relacionadas con la Fiscalía.

Conocimientos.

Computación, mecanografía, redacción y ortografía, amplio conocimiento y manejo de archivos

relaciones humanas, técnicas de atención al público.

Actitud/Aptitud

Ética, conducta intachable, puntualidad, confidencialidad, seriedad, trato agradable al público.

### **3.3. Asistentes Administrativo – Sistema Fiscal**

Es el encargado de realizar la gestión documentaria dentro del Despacho Fiscal,

Para ejercer el cargo, con la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal se requiere una formación académica: estudiante universitario de la carrera de derecho, a partir del 4° año (8° ciclo); cursos, talleres y/o seminarios en litigación oral con el derecho penal y/o procesal penal, además se debe contar con experiencia general mínimo de 01 año, en entidades del sector público y/o privado en el área jurídica realizando funciones relacionadas al cargo.

Las funciones que éste debe realizar se encuentran establecidas dentro del Manual de Organización y Funciones del Ministerio Público, donde se establece como sus funciones principales los siguientes:

- Recibir y registrar en el sistema informático el ingreso de escritos, oficios y otros documentos.
- Recibir, clasificar y registrar, en el día, los documentos ingresados al despacho fiscal. dando cuenta al Fiscal.
- Atender al usuario, facilitando las carpetas Fiscales para su lectura y expedición de copias, dispuestas por el Fiscal.
- Digitalizar. imprimir o fotocopiar, así como certificar los actuados de las carpetas fiscales y sus anexos, según lo disponga el Fiscal.
- Apoyar en la conformación, foliación y organización de la carpeta fiscal, cuadernos y anexos.
- Custodiar, mantener y clasificar los archivos y documentación del Despacho Fiscal.
- Apoyar en las labores del turno fiscal, conforme a la necesidad del servicio y a lo dispuesto por el Fiscal.
- Realizar el trámite documentario y notificaciones que el fiscal disponga, dentro del plazo de ley.
- Otras actividades que disponga el fiscal.

#### **3.4. Asistente en Función Fiscal**

Es el personal autorizado para realizar la proyección de las providencias, disposiciones y requerimientos.

Con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, para que el personal ejerza el cargo de Asistente en Función Fiscal, mínimamente debe contar con experiencia general laboral mínima de dos (02) años, en entidades del sector público y/o privado en el área jurídica en materia penal realizando



labores afines al objeto de la convocatoria, formación académica: diploma de grado de bachiller en derecho, tener especialización: curso y/o diplomado en derecho penal y/o procesal penal, en los últimos tres/03 años; no menor a noventa (90) horas académicas, no acumulables; cursos, talleres y/o seminarios en derecho penal y/o derecho procesal penal y conocimiento en Microsoft office.

Dentro de sus funciones principales se encuentra los siguientes:

- Elaborar proyectos de disposiciones y requerimientos fiscales; así como notificaciones, oficios, informes u otros documentos de impulso de las investigaciones.
- Apoyar en análisis y evaluación de procedimientos propios del área usuaria.
- Redactar las disposiciones, realizar actividades de gestión de documentos, y requerimientos por orden del fiscal, quien, bajo responsabilidad, debe instruir sobre sus lineamientos y fundamentos.
- Apoyar en la redacción de actas, bajo la dirección del fiscal.
- Elaborar y mantener actualizada la agenda fiscal.
- Apoyo en análisis y evaluación de procedimientos propios del área usuaria.
- Mantener actualizado el sistema de gestión fiscal (SGF) y la información de la carpeta virtual.
- Realizar el manejo, custodia, registro y archivo de la carpeta fiscal.
- Formar, custodiar y foliar las carpetas fiscales y los cuadernos para solicitar las medidas restrictivas (levantamiento del secreto de las comunicaciones, confirmatoria de incautación, levantamiento del secreto bancario, etc.).
- Entregar los depósitos administrativos de la reparación civil a los beneficiarios y a la administración o gerencia administrativa.
- Verificar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas, cuando el fiscal lo disponga, dando cuenta inmediata.
- Custodiar los bienes incautados y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente, conforme al reglamento.
- Apoyar al fiscal en la recepción de denuncias verbales.
- Generar las cédulas de notificaciones y citaciones.

- Apoyar en las labores del turno fiscal, las labores fuera de la jornada ordinaria deberán considerar la normatividad vigente.
- Certificar las copias que disponga el fiscal.
- Otras labores que le asigne el jefe inmediato superior o de la unidad especializada.

### **3.5. Importancia del personal de Apoyo del Ministerio Público**

El trabajo del Asistente Administrativo y del Asistente en Función Fiscal hacen posible la labor fiscal, porque el trabajo de un fiscal no solo se resume en requerir acusaciones, prisiones preventivas, procesos inmediatos, acusaciones directas u otros, sino en realizar previamente una exhaustiva investigación, pero dicha investigación se realiza mediante toma de declaraciones, emisión de oficios para requerir o solicitar algo, realización de inspecciones, visualización de videos y un sinnúmero de diligencias complementarias. Dichas diligencias para poder llevarse a cabo necesariamente requieren de la intervención de los asistentes, quienes se encargan de notificar a las partes y testigos, redactar oficios, proyectar los requerimientos, providencias y disposiciones y demás actividades propios del despacho. Por ejemplo, es común, que muchas investigaciones se amplíen en los plazos iniciales por inconcurrencia de las partes, debido a una inefectiva notificación; y es común escuchar en los despachos que el fiscal pregunta al asistente sobre la cantidad de audiencias que tiene en el día o si las partes se encuentran válidamente notificados, éste responde que efectivamente se encuentra válidamente notificados. En realidad lo que demanda el Nuevo Código Procesal es ser una gestión de resultados, y esos resultados depende de la operatividad del equipo y particularmente del encargado del manejo operativo del despacho fiscal, que viene a ser el Asistente en Función Fiscal; pues volviendo al tema lo que importa, es que la persona que tiene que concurrir tal o cual día, tiene que concurrir en tal o cual día; así que la forma como tenga que conseguirse ese "resultado" es responsabilidad del asistente, quien verá y hará lo posible para que las partes asistan a las diligencias, ya sea mediante una notificación personal, llamando por teléfono o entrevistándose previamente con el citado; lo importante para esta nueva forma de trabajo, recalcamos, no es ver si salió o no la notificación, lo

importante es que el citado concorra, y se lleve a cabo la diligencia programada y no dilaten las investigaciones por inoperatividad.

Otro tema, por demás importante en la que interviene el asistente es la evacuación de documentos de índole peticionario, como oficios, requiriendo información a diferentes entidades, documentos que en muchas ocasiones son obviados y no son respondidos por las entidades, por esa razón no basta con remitir o evacuar el documento, sino principalmente en "hacer el seguimiento" a dicho documento, si llega a su destinatario, y lo más importante en la obtención del cometido de dicho documento, para ello debe hacerse uso de todos los medios logísticos con que cuenta nuestra entidad.

Asimismo, se espera que el asistente adopte una actitud dinámica, proactiva, con iniciativa y progresista con miras a conseguir que lo dispuesto por el Fiscal se haga efectivo en los términos programados, y así pueda desarrollarse el proceso dentro de las prerrogativas de celeridad con eficiencia y eficacia, que juega en beneficio de la buena imagen y propósitos institucionales y cumplimiento de objetivos del sistema. También que durante la etapa previa al desarrollo de la audiencia cumpla un rol protagónico, en cuanto a identificar y ubicar en el ambiente adecuado a los comparecientes, se les informe del motivo de la citación, en que consiste la audiencia para la que han sido citados, de los beneficios que se puede obtener participando en la misma, y del desarrollo de la audiencia programada, como trabajo preparatorio del que luego va a realizar el Fiscal.

Por otro lado, también resulta necesario resaltar la labor que desarrollan los Asistentes de la Función Fiscal, en cuanto al manejo de las carpetas fiscales, pues es aquí donde se producen un sin número de actuaciones que son de entera responsabilidad del asistente en función fiscal; por ejemplo, en cuanto a la recepción de documentos que tiene relación con la carpeta fiscal, el cual debe dar cuenta inmediata al Fiscal responsable, para luego proyectar la providencia correspondiente para integrar dicho documento a la carpeta fiscal que corresponda; asimismo, es el encargado de la foliación correlativa, elaboración de la carpeta auxiliar, la verificación de la correcta manipulación de cada caso en el Sistema de Gestión Fiscal, etc.

En suma, lo que se espera del Asistente en Función Fiscal y del Asistente Administrativo, es entrega e identificación, iniciativa, desenvolviéndose como

un operador proactivo, con visión de futuro, consiente del espíritu del modelo actual del proceso penal, y que su accionar se encuentre orientado a resultados

### 2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

1. **Delitos contra la administración pública:** Son aquellos delitos tipificados en el Título XVIII del Código Penal, estos delitos son de naturaleza especial, pues únicamente pueden ser cometidos por funcionarios o servidores público y, de manera excepcional por particulares, el bien jurídico protegido es el normal desarrollo de la administración pública, se protege la objetividad, imparcialidad y el patrimonio del Estado, de tal forma que “el legislador ha decidido que en estos delitos de corrupción tenga que intervenir necesariamente, como autor, un funcionario público. Esta característica es la que convierte a los delitos contra la administración pública en delitos especiales” (Montoya Vivanco, 2015, p. 50).
2. **Limitaciones del Ministerio Público:** Son aquellas elementos o circunstancias que evitan el correcto y normal desarrollo de las actividades del Ministerio Público, pueden presentarse en el uso de los recursos logísticos, en las funciones del personal de apoyo y en los informes científicos o técnicos periciales.
3. **Funcionario Público:** “Persona que forma parte del sistema administrativo del Estado, dedicada al servicio público estatal, dotada de una delegación especial para representar la voluntad del gobierno” (Chanamé Orbe, 2009, p 290).
4. **Servidor Público:** Es el denominado “empleado público” que es la persona técnica o profesional que presta su actividad para la realización de los fines de interés público, cumpliéndolos de hecho o ayudando a su realización, a cambio de ciertos derechos exigibles a la administración” (Peña Cabrera Freyre, 2009, p. 51).
5. **Pericias contables:** Es la aplicación de conocimientos contables por parte de un perito contable para resolución de un determinar conflicto

o asunto indispensable para la toma de decisión por parte del Fiscal o Juez en un determinado proceso.

6. **Pericias grafo técnicas:** Es una disciplina que podemos enmarcar dentro de las ciencias experimentales, específicamente dentro de las ciencias periciales o forenses (Criminalística). Tiene como finalidad el estudio y análisis de documentos desde el punto de vista material, no estudiando sus aspectos ideológicos. Sus objetivos generales son: 1) Determinar la autoría del contenido de documentos; y 2) Determinar la naturaleza o constitución del material utilizado para su confección. Se apoya en el método científico y otras disciplinas científicas, tales como la fisiología humana, la física y la química para lograr sus objetivos (Laboratorio Grafotécnico Orta Poleo, 2008)
7. **Pericias económicas:** Un **peritaje económico** es un informe pericial en el cual se evalúa ante un juez los daños económicos que ha comportado situaciones tan diferentes como pueden ser un acto de Enriquecimiento Ilícito, en el cual se debe hacer un balance de las remuneraciones y el patrimonio del sospechoso.
8. **Asistente en función Fiscal:** Es el personal asignado al despacho fiscal mediante la Resolución de Gerencia General No. 274-98-MPFN-GG, de fecha 16 de noviembre del año 1998, las funciones de este personal son elaborar proyectos de formalización o archivo de denuncia definitivas o provisionales. Elaborar proyectos de dictámenes de expedientes sumarios y ordinarios. Elaboración de notificaciones efectuar diligencias conjuntamente con el Fiscal (operativos, intervenciones, etc.) redactar actas (levantamiento de cadáveres, visitas a dependencias policiales, etc.) (Cabrera Cabrera, 2010, p. 02)
9. **Asistente Administrativo:** También es el personal de apoyo a la función fiscal, cuyas funciones atribuidas por la Resolución de Gerencia General No. 274-98-MPFN-GG, de fecha 16 de noviembre del año 1998 son recepción, clasificación y registro de investigaciones policiales y denuncias. Administrar la documentación clasificada analizándola y sistematizándola. Clasificar y archivar la documentación de la fiscalía. Redacción de diversos documentos relacionados con denuncias e investigaciones que ventila la fiscalía. Seguimiento de los

expedientes que ingresan a la Fiscalía, preparando periódicamente los informes de situación. Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con la Fiscalía (Cabrera Cabrera, 2010, p. 03).

## **2.4. HIPÓTESIS**

### **2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL**

**Hi:** Existen limitaciones del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.

**H0:** No existen limitaciones del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.

### **2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS**

**Hi<sub>1</sub>:** Existen limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público que se relacione con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.

**H0<sub>1</sub>:** No existen limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público que se relacione con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.

**Hi<sub>2</sub>:** Existen limitaciones en cuanto a los peritos con que cuenta el Ministerio Público que se relacione con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.

**H0<sub>2</sub>:** No existen limitaciones en cuanto a los peritos con que cuenta el Ministerio Público que se relacione con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.

**Hi<sub>3</sub>:** Existen limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra

la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.

**H0<sub>3</sub>:** No existen limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.

## 2.5. VARIABLES

### 2.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE

**X:** Limitaciones del Ministerio Público

### 2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE

**Y:** Delitos contra la administración pública

## 2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (DIMENSIONES E INDICADORES)

Variables	Dimensión	Tipo de variable	Indicador	Escala de medición
<b>VARIABLE INDEPENDIENTE</b>				
<b>Limitaciones del Ministerio Público</b>  Circunstancia o condición de algo o de alguien que limita, impide o dificulta y afectan el normal desarrollo de una investigación llevado a cabo por un fiscal que está a cargo de un	Recursos	Cualitativo	Pericia eficiente y célere, ampliación de plazo, recaudo de elementos por parte de la pericia contable	Nominal
	Peritos	Cualitativo	Peritos de la Dirección Policial Contra la Corrupción y peritos adscritos al REPEJ y REPEF; Informes periciales contables, económicos, grafo técnicos,	Nominal

determinado caso.			capacitación de peritos	
	Personal	Cualitativo	Labor administrativa de los asistentes en Función Fiscal y Asistentes Administrativos, Personal capacitado Personal idóneo para las investigaciones	Nominal
<b>VARIABLE INDEPENDIENTE</b>				
<b>Delitos contra la administración pública</b>  Son conductas que atentan contra la función o gestión pública, o contra bienes públicos, cuyas acciones están tipificadas en las secciones II, III Y IV, de los artículos 382 al 401 del capítulo II, del título XVIII del código penal.	Tipos de delito	Abuso de Autoridad	Características del delito  Bien jurídico protegido	Nominal
		Concusión		Nominal
		Peculado		Nominal
		Cohecho		Nominal
		Negociación incompatible		Nominal
		Tráfico de influencias		Nominal
		Enriquecimiento ilícito		Nominal



## **CAPÍTULO III**

### **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN**

##### **3.1.1. ENFOQUE**

El enfoque fue cuantitativo, ya que básicamente perseguimos la descripción lo exacta de las cosas que ocurre en la existencia social. Para todo ello es que se apoyó en las técnicas estadísticas, en ello se tomó en cuenta las encuestas y el análisis documental. Por ello se consideró un conocimiento objetivo, deslindando de posibles distorsiones de información que puedan generar los sujetos desde su propia subjetividad.

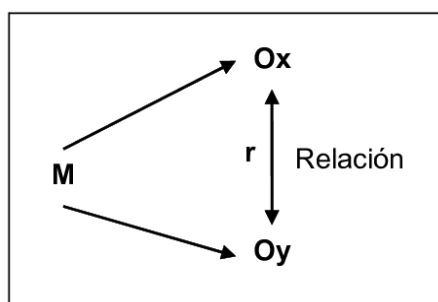
##### **3.1.2. ALCANCE O NIVEL**

La presente investigación se enmarcó dentro del nivel de investigación descriptiva – correlacional, dado que se realizó a razón de relacionar dos variables, así mismo se describió cada una de ellas sin intervenir o modificar ninguna de las variables.

##### **3.1.3. DISEÑO**

El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, (2014) al diseño no experimental, transversal actual por cuanto no se manipularon las variables, en virtud a que solo se observaron los hechos como son en el contexto natural, para luego ser analizados, según la secuencia del estudio fue de corte transversal debido a que los datos se obtuvieron en un solo tiempo y según la profundidad del estudio este fue de tipo correlacional - causal (causal-explicativo) con ello se evaluó los delitos contra la administración pública y las limitaciones de los mismo, cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco.

El diseño de investigación se representó con el siguiente esquema:



**Leyenda:**

**M:** Muestra

**X:** Limitaciones del ministerio público

**Y:** Delitos contra la administración pública

**R:** Relación existente entre las variables

### 3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

#### 3.2.1. POBLACIÓN

El presente trabajo de investigación se realizó con una población de 35 trabajadores del Ministerio público pertenecientes a la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios del distrito fiscal de Huánuco en el año 2018.

FUENTE: OFICINA DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE FISCALES.

#### 3.2.2. MUESTRA

La muestra estuvo determinada por la fórmula que se utiliza para variables cualitativas o para proporciones, en el caso en donde se conoce la población la cual es la siguiente:

$$n = \frac{(p * q) z^2 N}{\epsilon^2(N - 1) + (p.q)z^2}$$

**Dónde:**

**n:** Número de elementos de la muestra, valor por determinar.

**N:** Número de elementos en el universo o población ( $N = 35$ ).

**p:** Proporción de hombres de la Fiscalía anticorrupción en la Región de Huánuco, para el caso del presente estudio  $p = 0.6$ .

**q:** Proporción de fiscales de la Fiscalía anticorrupción en la Región de Huánuco, para el caso del presente estudio  $p = 0.4$ .

**z:** Valor de  $z$  está asociado al nivel de confianza, para lo cual se ha considerado una confianza del 95%, para lo cual se tiene un valor de  $z = 1.64$ .

**€:** Error estándar de la estimación, su rango de variación es de  $1\% \leq € \leq 10\%$  mide la confiabilidad de los resultados, para el caso del problema  $€ = 0.08$ .

**Reemplazando:**

$$n = \frac{(0.6 \cdot 0.4) (1.64)^2 35}{(0.08)^2 (35 + (0.6 \cdot 0.4) (1.64)^2)} = 35$$

### 3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

#### 3.3.1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

**Técnicas**

Se aplicó dos encuestas para poder describir las limitaciones del ministerio público y para poder describir los delitos contra la administración pública; observando criterios metodológicos para determinar sus términos.

Así mismo el análisis documental, que sirvió para obtener datos de las fuentes de información tales como normas, leyes, resoluciones, libros,

manuales, reglamentos, tesis, y trabajos de investigación sobre el tema.

### **Instrumentos**

#### **Cuestionario de limitaciones del Ministerio Público (Anexo 02)**

Este instrumento permitió valorar las dimensiones (recursos, peritos y personal calificado) para poder determinar las limitaciones del Ministerio Público, mediante una encuesta de opinión que cuenta con 11 ítems, dirigidos a los trabajadores del Ministerio Público en la Región de Huánuco.

#### **Cuestionario de delitos contra la administración pública (Anexo 03)**

Este instrumento se usó para describir los delitos contra la administración pública, cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, donde se describió seis secciones en ello se abarcó, el abuso de autoridad, concisión, peculado, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias; englobando las características del delito y el bien jurídico.

### **3.3.2. PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS**

- a) **Para el procesamiento y presentación de datos:** Para la presentación y el procesamiento, los datos fueron recolectados en forma ordenada, seleccionada y tabulada con el programa de SPSS 22 y Excel 2013, con ello se procedió a elaborar las tablas, con sus relativas figuras, según lo determinado.

### **3.3.3. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS**

- a) **Para el análisis e interpretación de los datos:** Para analizar e interpretar los datos se utilizó el análisis descriptivo donde, de acuerdo a las características de las variables, de acuerdo al tipo de variable con que se trabajó (categóricas); se tuvo en cuenta las medidas de tendencia central y de frecuencia para las variables. Se emplearon figuras para facilitar la comprensión; del mismo modo en el análisis

inferencial se consideró varias medidas ya que se buscó en primera instancia, identificar las variables, con ella se aplicó la prueba estadística del Chi cuadrado ( $X^2$ )

## CAPÍTULO IV

### RESULTADOS

#### 4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS.

**Tabla N° 1. Descripción de la limitación en recursos del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Limitación en recursos del Ministerio Público	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿En las Diligencias Preliminares que su despacho ha aperturado para investigar delitos Contra la Administración Pública, la pericia de los profesionales de la Dirección Policial Contra la Corrupción del Distrito Fiscal de Huánuco, le ha sido eficiente y célere para registrar los actos urgentes e inaplazables?	10	28.6	25	71.4
¿Durante el ejercicio de su función, se ha visto en la necesidad de ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares por defectos en la realización de los informes periciales de los peritos adscritos al REPEJ de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, en procesos contra delitos Contra la Administración Pública?	26	74.3	9	25.7
¿Durante la etapa de Investigación Preparatoria por Delitos Contra la Administración Pública, los informes periciales de los peritos adscritos al REPEF del Distrito Fiscal de Huánuco, le han permitido reunir elementos de convicción, principalmente de cargo?	9	25.7	26	74.3
¿En el ejercicio de su función, se le han presentado situaciones en las que, luego de formular Acusación Fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria dispuso sobreseer el caso por defectos y deficiencias de la pericia contable que imposibilitaba acreditar la responsabilidad penal del acusado?	25	71.4	10	28.6

Fuente: Cuestionario de limitaciones del ministerio público.

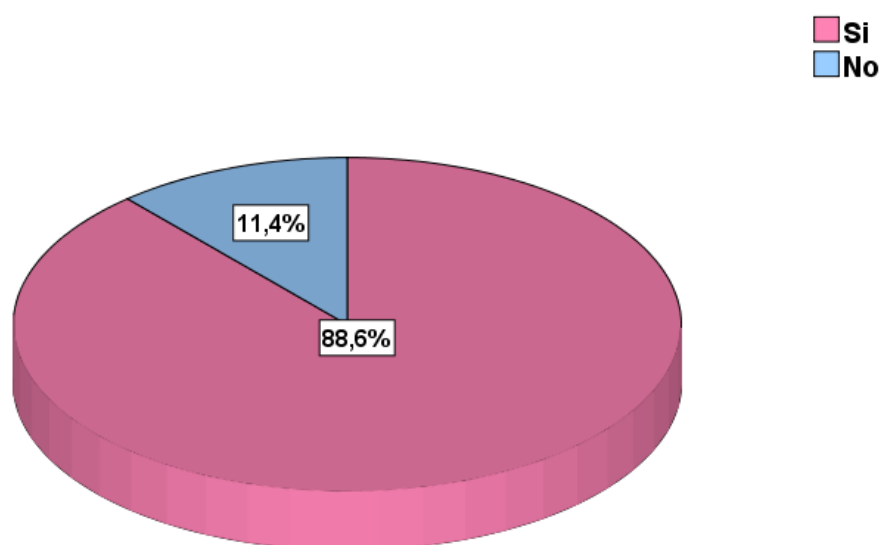
### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla, respecto a la limitación en recursos del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, se observa que los fiscales, en su mayoría [74.3%(26)], se han visto en la necesidad de ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares por defectos en la realización de los informes periciales de los peritos adscritos a la Dirección Policial Contra la Corrupción; así mismo, en igual proporción [74.3%(26)], refieren que durante la etapa de Investigación Preparatoria por Delitos Contra la Administración Pública, los informes periciales de los peritos adscritos al REPEJ del Distrito Fiscal de Huánuco, no le han permitido reunir elementos de convicción, en tanto 71.4%(25) afirman que la pericia de los profesionales de la Dirección Policial Contra la Corrupción del Distrito Fiscal de Huánuco, no le ha sido eficiente y célere para registrar los actos urgentes e inaplazables, en igual proporción afirma que luego de formular Acusación Fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria dispuso sobreseer el caso por defectos y deficiencias de la pericia contable que imposibilitaba acreditar la responsabilidad penal del acusado.

**Tabla N° 2. Los recursos del Ministerio Publico como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Los recursos como limitante	n = 35	
	Fi	%
<b>Si</b>	31	88.6
<b>No</b>	4	11.4
<b>Total</b>	35	100.0

Fuente: Cuestionario de limitaciones del ministerio público.



**Gráfico N° 1. Representación gráfica de los recursos del Ministerio Publico como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, respecto a los recursos del Ministerio Publico como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, se evidencia que los fiscales, en su gran mayoría [88.6%(31)] consideran que los recursos con que cuentan son una limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; por otro lado, una menor cantidad [11.4%(4)] consideran que no lo es.



**Tabla Nº 3. Descripción de la limitación en los Peritos del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Limitación en los Peritos del Ministerio Público	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿El apoyo científico y técnico de los Informes Periciales Contables, como medio de prueba, le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la responsabilidad penal de los acusados por delitos contra la administración pública?	11	31.4	24	68.6
¿El apoyo científico y técnico de los informes periciales económicos, le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la responsabilidad penal de los acusados por delitos contra la administración pública?	10	28.6	25	71.4
¿El apoyo científico y técnico de los informes periciales grafo técnico, le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la individualización del o los posibles autores de la comisión de delitos Contra la Administración Pública?	11	31.4	24	68.6
¿Considera que los peritos contables, económicos o grafo técnico adscritos a la Dirección de la Policía Contra la Corrupción, con los que ha podido trabajar, se encuentran lo suficientemente capacitados para emitir informes periciales seguidos en procesos Contra la Administración Pública?	8	22.9	27	77.1

Fuente: Cuestionario de limitaciones del ministerio público.

#### **Análisis e interpretación.**

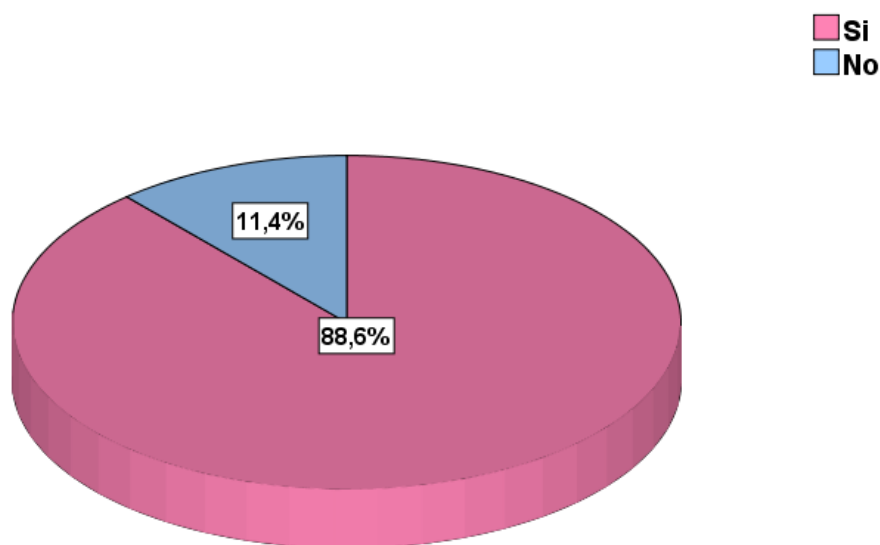
En la presente tabla, respecto a la limitación en los Peritos del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, se observó que en su mayoría [77.1%(27)] consideran que los peritos contables, económicos o grafo técnico adscritos a la Dirección de la Policía Contra la Corrupción, con los que ha podido trabajar, no se encuentran lo suficientemente capacitados para emitir informes periciales seguidos en procesos Contra la Administración Pública; por otro lado, en proporciones similares, un 71.4%(25), afirman que el apoyo científico y técnico de los

informes periciales económicos, no le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la responsabilidad penal de los acusados por delitos contra la administración pública; así mismo, en proporciones similares, un [68.6%(24)] de fiscales encuestados referían que el apoyo científico y técnico de los Informes Periciales Contables, como medio de prueba, le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la responsabilidad penal de los acusados por delitos contra la administración pública y, el apoyo científico y técnico de los informes periciales grafo técnico, le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la individualización del o los posibles autores de la comisión de delitos Contra la Administración Pública, respectivamente.

**Tabla N° 4. Los Peritos del Ministerio Publico como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Los Peritos como limitante	n = 35	
	Fi	%
<b>Si</b>	31	88.6
<b>No</b>	4	11.4
<b>Total</b>	35	100.0

Fuente: Cuestionario de limitaciones del ministerio público.



**Gráfico N° 2. Representación gráfica de los Peritos del Ministerio Publico como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, respecto a los Peritos del Ministerio Publico como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, se evidencia que los fiscales, en su gran mayoría [88.6%(31)] referían que los Peritos con que laboran, son una limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; por otro lado, en menor proporción [11.4%(4)] consideran que no lo son.

**Tabla Nº 5. Descripción de la limitación en el personal del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Limitación en el personal del Ministerio Público	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿Considera que las funciones consignadas en el MOF respecto de los Asistentes en Función Fiscal, son suficientes y adecuadas para coadyuvar en investigaciones seguidos por Delitos Contra la Administración Pública?	12	34.3	23	65.7
¿Considera que las funciones consignadas en el MOF del Ministerio Público respecto de los Asistentes Administrativos, son suficientes y adecuados para coadyuvar en la investigación seguidos por Delitos Contra la Administración Pública?	11	31.4	24	68.6
¿Considera que la participación del personal de su despacho es idónea para coadyuvaren la labor fiscal y culminar eficazmente las investigaciones por delitos contra la Administración Pública dentro de un plazo razonable?	13	37.1	22	62.9

Fuente: Cuestionario de limitaciones del ministerio público.

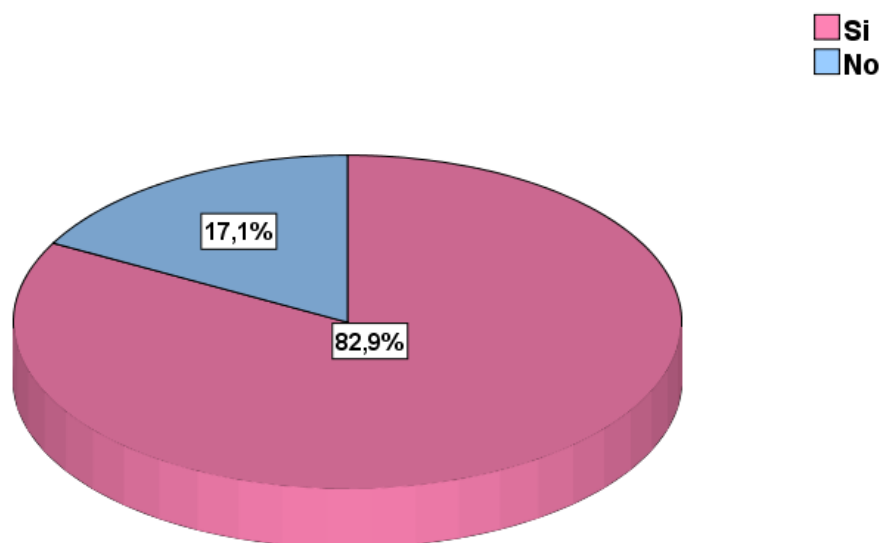
#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla, concerniente a la limitación en el personal del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, los fiscales encuestados, en mayor proporción [65.7%(23)] consideran que las funciones consignadas en el MOF del Ministerio Público respecto de los Asistentes Administrativos, no son suficientes y adecuados para coadyuvar en la investigación seguidos por Delitos Contra la Administración Pública; por otro lado, un 65.7%(23) de los encuestados afirman que las funciones consignadas en el MOF respecto de los Asistentes en Función Fiscal, no son suficientes ni adecuadas para coadyuvar en investigaciones seguidos por Delitos Contra la Administración Pública y, un 37.1%(13) consideran que la participación del personal de su despacho es idónea para coadyuvaren la labor fiscal y culminar eficazmente las investigaciones por delitos contra la Administración Pública dentro de un plazo razonable.

**Tabla N° 6. El personal del Ministerio Publico como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

El personal como limitante	n = 35	
	fi	%
<b>Si</b>	29	82.9
<b>No</b>	6	17.1
<b>Total</b>	35	100.0

Fuente: Cuestionario de limitaciones del ministerio público.



**Gráfico N° 3. Representación gráfica del personal del Ministerio Publico como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

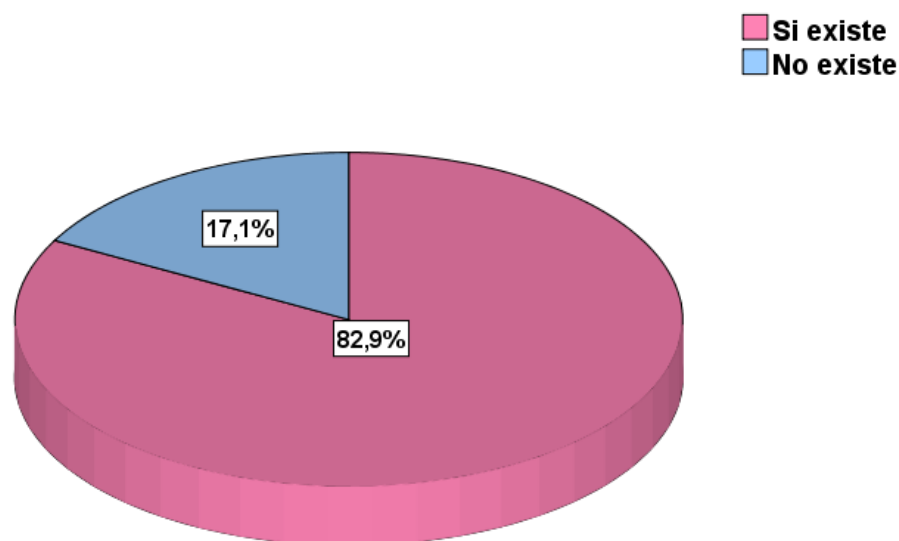
#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, en razón al personal del Ministerio Publico como limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, se observa que los encuestados, en su mayoría, [82.9%(29)] afirman que el personal con que cuenta el Ministerio Publico, son una limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; por otro lado, en menor proporción [17.1%(6)] consideran que no lo son.

**Tabla N° 7. Limitaciones del Ministerio Publico en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Limitaciones del Ministerio Publico	n = 35	
	fi	%
<b>Si existe</b>	29	82.9
<b>No existe</b>	6	17.1
<b>Total</b>	35	100.0

Fuente: Cuestionario de limitaciones del ministerio público.



**Gráfico N° 4. Representación gráfica de las limitaciones del Ministerio Publico en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, respecto a las limitaciones del Ministerio Publico en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, se aprecia que los fiscales encuestados, en su mayoría [82.9%(29)] consideran que existen limitantes en el Ministerio Publico, en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; por otro lado, y en menor proporción [17.1%(6)] consideran que no existen.

**Tabla Nº 8. Descripción del delito de Abuso de Autoridad contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Descripción del delito de Abuso de Autoridad	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿En este delito, el funcionario público aparte de tener atribuciones, debe estar activo en el ejercicio de su función?	10	28.6	25	71.4
¿El sujeto de la acción, necesariamente es un servidor público o funcionario del Estado?	8	22.9	27	77.1
¿El término “acto arbitrario” significa que lo dispuesto por el sujeto activo sea contrario a las normas legales que rigen el cargo que ostenta?	7	20.0	28	80.0
¿Para la consumación de este delito, amerita que el acto u orden arbitrario emitido por el funcionario, cause daño al sujeto pasivo o a un tercero?	11	31.4	24	68.6

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública

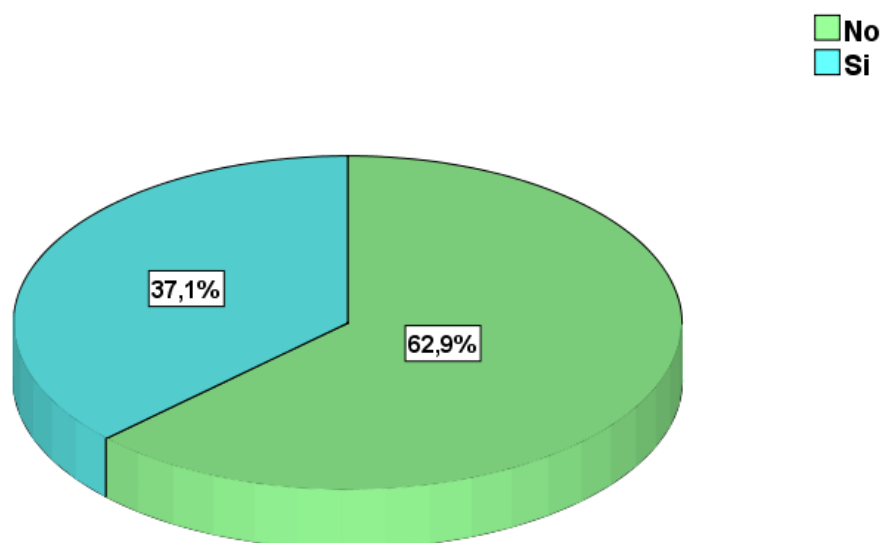
#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla se describe el delito de Abuso de Autoridad contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, donde en mayor proporción [80.0%(28)] manifiestan que el término “acto arbitrario” no significa que lo dispuesto por el sujeto activo sea contrario a las normas legales que rigen el cargo que ostenta, 77.1%(27) refiere que el sujeto de la acción, no necesariamente es un servidor público o funcionario del Estado, casi un tercio [31.4%(11)] considera que para la consumación del delito, amerita que el acto u orden arbitrario emitido por el funcionario, cause daño al sujeto pasivo o a un tercero y 28.6%(10) afirma que el funcionario público aparte de tener atribuciones, debe estar activo en el ejercicio de su función.

**Tabla N° 9. Bien jurídico protegido en el delito de Abuso de autoridad contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Bien jurídico protegido en el delito de Abuso de autoridad, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública	n = 35	
	fi	%
Si	13	37.1
No	22	62.9
Total	35	100.0

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.



**Gráfico N° 5. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Abuso de autoridad contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico; se observa, respecto al bien jurídico protegido en el delito de Abuso de autoridad contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; donde en mayor proporción [62.9%(22)] consideran que no es un bien jurídico protegido, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública y 37.1%(13) consideran que si lo es.



**Tabla Nº 10. Descripción del delito de Concusión contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Descripción del delito de Concusión	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿Este delito puede ser cometido tanto por funcionarios como por servidores públicos?	26	74.3	9	25.7
¿El sujeto de la acción, puede ser cualquier persona independientemente de su situación jurídica?	25	71.4	10	28.6
¿La finalidad que el funcionario o servidor persigue es este delito es obtener un beneficio patrimonial de manera indebida?	29	82.9	6	17.1
¿La consumación de este delito se da con la sola promesa indebida de otorgar un beneficio patrimonial ilícito?	24	68.6	11	31.4

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.

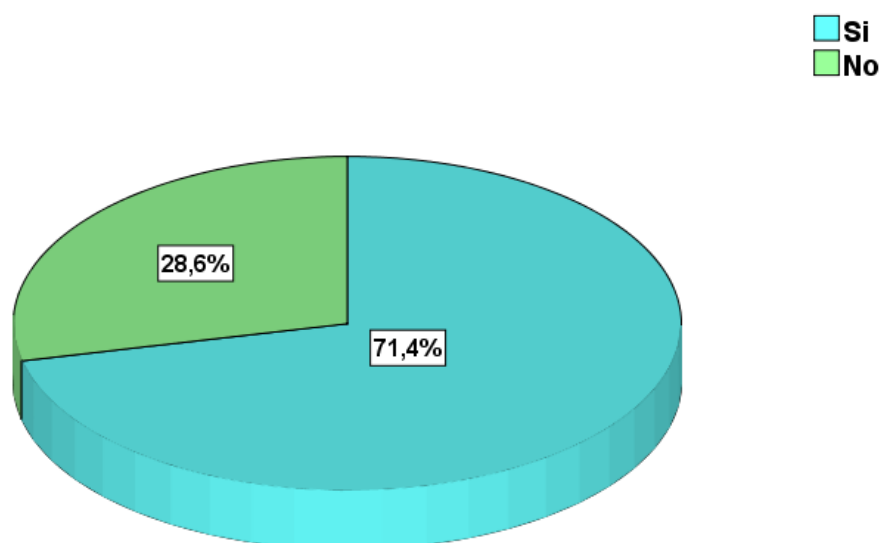
#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla se describe el delito de Concusión contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, donde en su mayoría [82.9%(29)] afirman que la finalidad que el funcionario o servidor persigue es obtener un beneficio patrimonial de manera indebida, así también 74.3%(26) mencionan que puede ser cometido tanto por funcionarios como por servidores públicos; 71.4%(25) manifiestan que puede ser cualquier persona independientemente de su situación jurídica y un 68.6%(24) refieren que la consumación se da con la sola promesa indebida de otorgar un beneficio patrimonial ilícito.

**Tabla N° 11. Bien jurídico protegido en el delito de Concusión contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Bien jurídico protegido en el delito de Concusión, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública	n = 35	
	fi	%
Si	25	71.4
No	10	28.6
Total	35	100.0

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.



**Gráfico N° 6. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Concusión contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, concerniente al bien jurídico protegido en el delito de Concusión contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, en mayor proporción [71.4%(25)] consideran que es un bien jurídico protegido, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública y 28.6%(10) consideran que no lo es.

**Tabla Nº 12. Descripción del delito de Peculado contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Descripción del delito de Peculado	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿El funcionario o servidor público, únicamente puede cometer el delito cuando utiliza o se apropia de bienes de su administración, que le estén confiados por razón de su cargo?	27	77.1	8	22.9
¿El sujeto pasivo en este injusto, únicamente es la Entidad como ente de la administración pública, al ver menoscabados sus intereses patrimoniales?	25	71.4	10	28.6
¿Para la consumación del delito, existe una forma exclusiva de utilizar o de apropiarse de los caudales?	30	85.7	5	14.3
¿La tipicidad subjetiva de este delito, permite que sea reprimible a título “doloso” y “culposo” para el agente?	28	80.0	7	20.0

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.

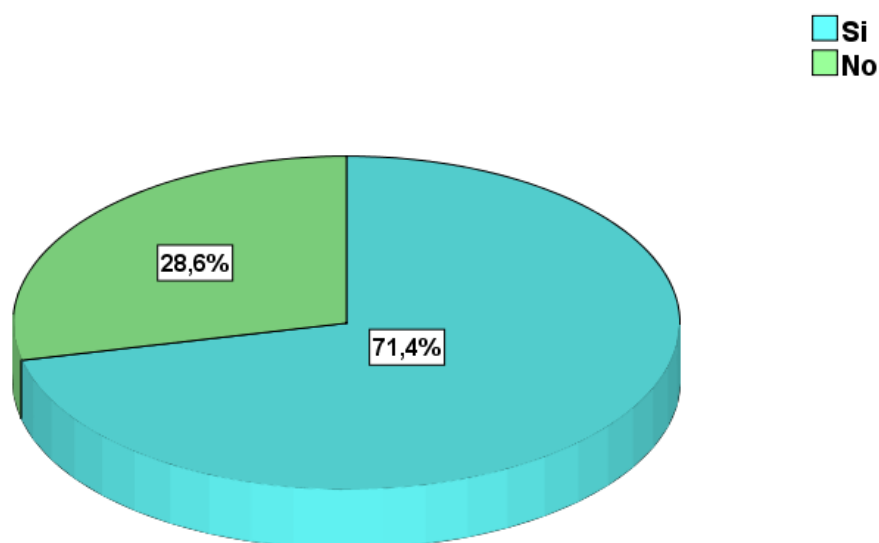
#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla se describe el delito de Peculado contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, donde en su gran mayoría [85.7%(30)] consideran que para la consumación del delito, existe una forma exclusiva de utilizar o de apropiarse de los caudales, así también el 80.0%(28) afirman que la tipicidad subjetiva de este delito, permite que sea reprimible a título “doloso” y “culposo” para el agente, 77.1%(27) refieren que únicamente se puede cometer el delito cuando utiliza o se apropia de bienes de su administración, que le estén confiados por razón de su cargo y 71.4%(25) mencionan que el sujeto pasivo en este injusto, únicamente es la Entidad como ente de la administración pública, al ver menoscabados sus intereses patrimoniales.

**Tabla N° 13. Bien jurídico protegido en el delito de Peculado contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Bien jurídico protegido en el delito de Peculado, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública	n = 35	
	fi	%
Si	25	71.4
No	10	28.6
Total	35	100.0

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.



**Gráfico N° 7. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Peculado contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, concerniente al bien jurídico protegido en el delito de Peculado contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; en mayor proporción [71.4%(25)] consideran que es un bien jurídico protegido, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública y 28.6%(10) consideran que no lo es.

**Tabla N° 14. Descripción del delito de Cohecho contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Descripción del delito de Cohecho	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿La materialización de este delito puede iniciar tanto por parte del funcionario o servidor público, como por parte del administrado o administrador con interés de realizar u omitir un acto en violación de una obligación de la administración pública?	25	71.4	10	28.6
¿La “solicitud indirecta” del donativo, promesa, o cualquier otra ventaja o beneficio que realiza el funcionario o servidor público, hace referencia a la participación de un tercero en la comisión del delito?	27	77.1	8	22.9
¿La consumación de este delito se presenta con la aceptación del donativo, promesa o cualquiera otra ventaja o beneficio indebido para realizar u omitir un acto funcionar, o de igual forma como consecuencia de ello?	23	65.7	12	34.3
¿La materialización de este delito puede iniciar tanto por parte del funcionario o servidor público, como por parte del administrado o administrador con interés de realizar u omitir un acto en violación de una obligación de la administración pública?	24	68.6	11	31.4

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.

#### **Análisis e interpretación.**

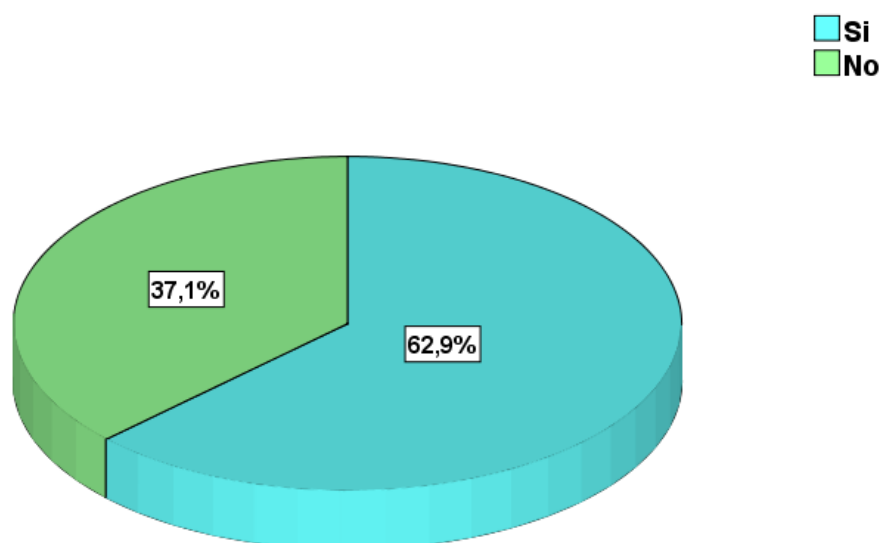
En la presente tabla se describe el delito de Cohecho contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, donde la mayoría [77.1%(27)] refieren que la “solicitud indirecta” del donativo, promesa, o cualquier otra ventaja o beneficio que realiza el funcionario o servidor público, hace referencia a la participación de un tercero en la comisión del delito, así también 71.4%(25) afirman que la materialización puede iniciar tanto por parte del funcionario o servidor público, como por parte del administrado o administrador con interés de realizar u omitir un acto en violación de una obligación de la administración pública, un 68.6%(24) alegan que la materialización puede iniciar tanto por parte del funcionario o servidor

público, como por parte del administrado o administrador con interés de realizar u omitir un acto en violación de una obligación de la administración pública y 65.7%(23) que la consumación se presenta con la aceptación del donativo, promesa o cualquiera otra ventaja o beneficio indebido para realizar u omitir un acto funcionar, o de igual forma como consecuencia de ello.

**Tabla N° 15. Bien jurídico protegido en el delito de Cohecho contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Bien jurídico protegido en el delito de Cohecho, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública	n = 35	
	fi	%
Si	22	62.9
No	13	37.1
Total	35	100

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.



**Gráfico N° 8. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Cohecho contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, referente al bien jurídico protegido en el delito de Cohecho contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; en mayor proporción [62.9%(22)] afirman que es un bien jurídico protegido, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública y 37.1%(13) consideran que no lo es.

**Tabla Nº 16. Descripción del delito de Negociación incompatible contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Descripción del delito de Negociación incompatible	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿Este injusto tiene como verbo rector el término “interesar”?	22	62.9	13	37.1
¿Este delito, amerita la existencia de un interés indebido sobre un contrato u operación y un interés de obtener un provecho propio o para tercero, por parte del funcionario o servidor público?	25	71.4	10	28.6
¿Es un delito especial propio que tutela la transparencia e imparcialidad de los funcionarios y servidores públicos en la toma de decisiones propias?	28	80.0	7	20.0
¿El estatus funcional y la relación funcional específica son requisitos típicos de este injusto?	21	60.0	14	40.0

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.

#### **Análisis e interpretación.**

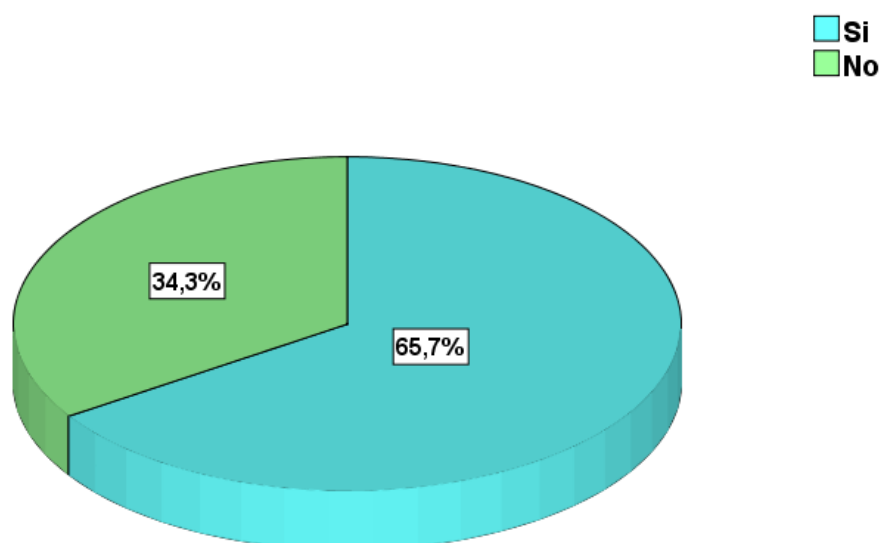
En la presente tabla se describe el delito de Negociación incompatible contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, donde en la mayoría [80.0%(28)] afirman que es un delito especial propio que tutela la transparencia e imparcialidad de los funcionarios y servidores públicos en la toma de decisiones propias, así también el 71.4%(25) alegan que amerita la existencia de un interés indebido sobre un contrato u operación y un interés de obtener un provecho propio o para tercero, por parte del funcionario o servidor público, un 62.9%(22) refieren que este injusto tiene como verbo rector el término “interesar” y un 60.0%(21) mencionan que el estatus funcional y la relación funcional específica son requisitos típicos de este injusto.



**Tabla N° 17. Bien jurídico protegido en el delito de Negociación incompatible contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Bien jurídico protegido en el delito de Negociación incompatible, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública	n = 35	
	fi	%
Si	23	65.7
No	12	34.3
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.



**Gráfico N° 9. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Negociación incompatible contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, respecto al bien jurídico protegido en el delito de Negociación incompatible contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; en mayor proporción [65.7%(23)] afirman que es un bien jurídico protegido, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública y más de un tercio [34.3%(12)] consideran que no lo es.

**Tabla Nº 18. Descripción del delito de Tráfico de influencias contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Descripción del delito de Tráfico de influencias	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿El agente de este delito, puede ser un funcionario o servidor público, así como cualquier otra persona independientemente de su situación jurídica?	27	77.1	8	22.9
¿Solo puede considerarse “instigador” al tercero “comprador solicitante de influencias” cuando sus actos hayan reforzado la resolución criminal del “vendedor de influencias” mediante influjo psíquico?	26	74.3	9	25.7
¿Es un delito de consumación y tentativa?	21	60.0	14	40.0
¿Es un delito de enriquecimiento de naturaleza de peligro y de simple actividad?	29	82.9	6	17.1

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.

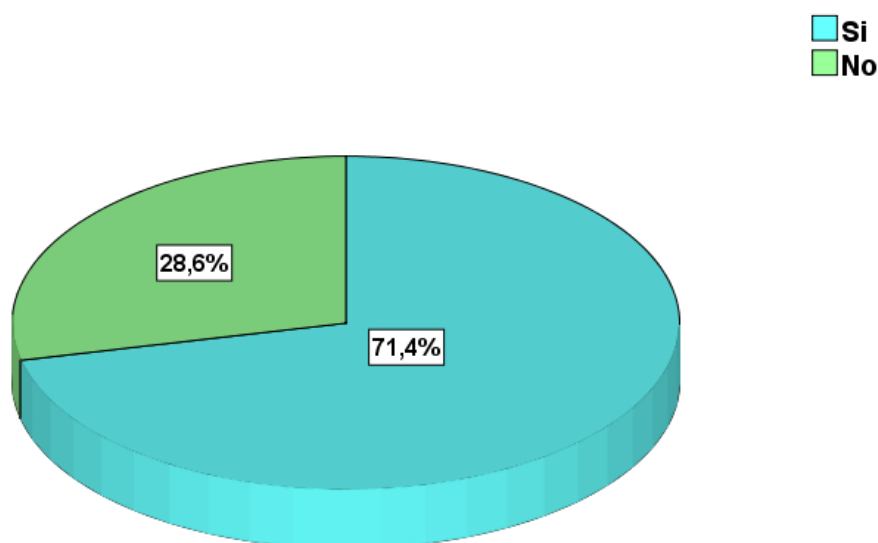
#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla se describe el delito de Tráfico de influencias contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, en donde se observa que en su mayoría [82.9%(29)] consideran que es un delito de enriquecimiento de naturaleza de peligro y de simple actividad, así mismo 77.1%(27) afirman que el agente de este delito, puede ser un funcionario o servidor público, así como cualquier otra persona independientemente de su situación jurídica, un 74.3%(26) mencionan que solo puede considerarse “instigador” al tercero “comprador solicitante de influencias” cuando sus actos hayan reforzado la resolución criminal del “vendedor de influencias” mediante influjo psíquico y 60.0%(21) que es un delito de consumación y tentativa.

**Tabla N° 19. Bien jurídico protegido en el delito de Tráfico de influencias contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Bien jurídico protegido en el delito de Tráfico de influencias, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública	n = 35	
	fi	%
Si	25	71.4
No	10	28.6
Total	35	100.0

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.



**Gráfico N° 10. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Tráfico de influencias contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, en razón al bien jurídico protegido en el delito de Tráfico de influencias contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; en mayor proporción [71.4%(25)] afirman que es un bien jurídico protegido, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública y casi un tercio [28.6%(10)] consideran que no lo es.

**Tabla Nº 20. Descripción del delito de Enriquecimiento ilícito contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Descripción del delito de Enriquecimiento ilícito	n = 35			
	Si		No	
	fi	%	fi	%
¿En este delito solo se reprime al funcionario público?	28	80.0	7	20.0
¿La declaración jurada de bienes y rentas, es indispensable para encontrar indicios de enriquecimiento ilícito?	22	62.9	13	37.1
¿El funcionario o servidor público, únicamente puede cometer el delito haciendo uso y abusando de su cargo?	21	60.0	14	40.0
¿La agravación de la pena, responde a la jerarquía del funcionario?	25	71.4	10	28.6

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.

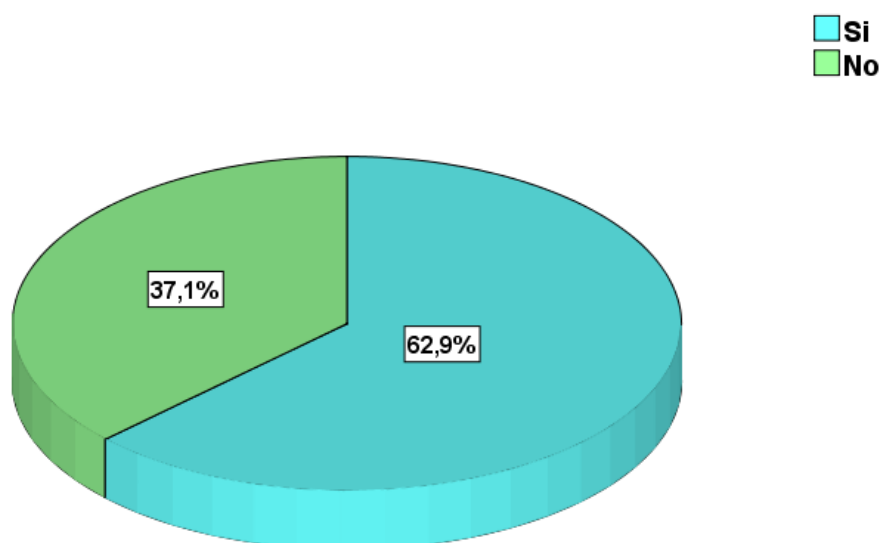
#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla se describe el delito de Enriquecimiento ilícito contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, donde se aprecia que en su mayoría [80.0%(28)] consideran que este delito solo se reprime al funcionario público, así también un 71.4%(25) manifiestan que la agravación de la pena, responde a la jerarquía del funcionario, el 62.9%(22) afirman que la declaración jurada de bienes y rentas, es indispensable para encontrar indicios de enriquecimiento ilícito y un 60.0%(21) mencionan que únicamente se puede cometer el delito haciendo uso y abusando de su cargo.

**Tabla N° 21. Bien jurídico protegido en el delito de Enriquecimiento ilícito contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Bien jurídico protegido en el delito de Enriquecimiento ilícito, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública	n = 35	
	fi	%
Si	22	62.9
No	13	37.1
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.



**Gráfico N° 11. Representación gráfica del bien jurídico protegido en el delito de Enriquecimiento ilícito contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

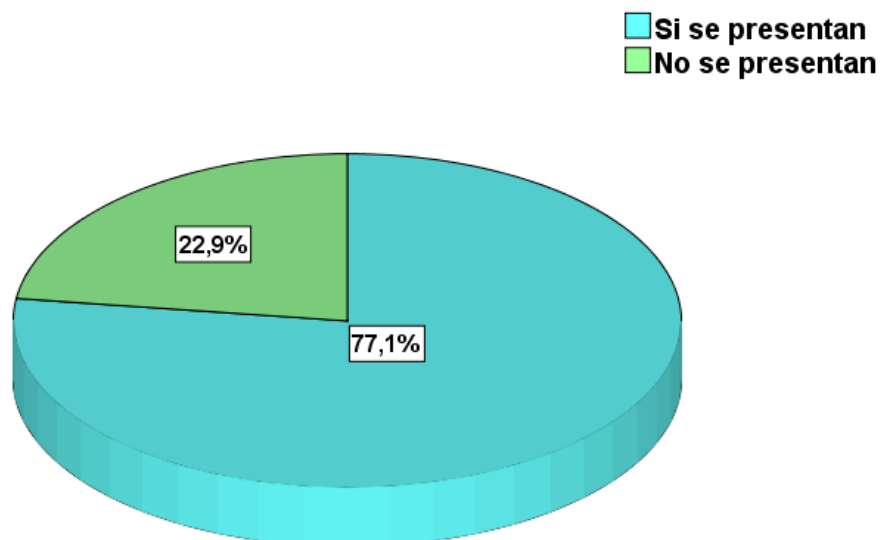
#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, respecto al bien jurídico protegido en el delito de Enriquecimiento ilícito contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; en mayor proporción [62.9%(22)] consideran que es un bien jurídico protegido, correcto y normal desarrollo de la Administración Pública y más de un tercio [37.1%(13)] consideran que no lo es.

**Tabla N° 22. Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

Delitos contra la Administración Pública	n = 35	
	fi	%
Si se presentan	27	77.1
No se presentan	8	22.9
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Cuestionario de delitos contra la administración pública.



**Gráfico N° 12. Representación gráfica de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.**

#### **Análisis e interpretación.**

En la presente tabla y gráfico, respecto a los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; en su mayoría [77.1%(27)] menciona que si se presentan casos en su despacho, y solo un 22.9%(8) refiere que no se presenta.

#### 4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS

**Tabla N° 23. Limitaciones del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.**

Variables de correlación	Valor	Gl	Significancia
Limitaciones del Ministerio Público Delitos contra la administración pública	91.729	48	0.000

Fuente. Base de datos (Elaboración propia)

##### **Análisis.**

En la presente tabla, se analiza la relación entre las limitaciones del Ministerio Público y delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018; donde el valor calculado de Chi cuadrado es de 91.729 para 48 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que con una probabilidad de error menor al 5% se admite que las limitaciones del Ministerio Público se relaciona con los delitos contra la administración pública. Se rechaza la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.

**Tabla N° 24. Limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.**

<b>Variables de correlación</b>	<b>Valor</b>	<b>Gl</b>	<b>Significancia</b>
Limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público	59.336	24	0.000
Delitos contra la administración pública			

Fuente. Base de datos (Elaboración propia)

#### **Análisis.**

En la presente tabla, se analiza la relación entre las limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público y delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018; donde el valor calculado de Chi cuadrado es de 59.336 para 24 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que con una probabilidad de error menor al 5% se admite que las limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público se relaciona con los delitos contra la administración pública. Se rechaza la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.



**Tabla Nº 25. Limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.**

<b>Variables de correlación</b>	<b>Valor</b>	<b>Gl</b>	<b>Significancia</b>
Limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público Delitos contra la administración pública	55.795	24	0.000

Fuente. Base de datos (Elaboración propia)

#### **Análisis.**

En la presente tabla, se analiza la relación entre las limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público y delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018; donde el valor calculado de Chi cuadrado es de 55.795 para 24 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que con una probabilidad de error menor al 5% se admite las limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público se relaciona con los delitos contra la administración pública. Se rechaza la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.

**Tabla Nº 26. Limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.**

<b>Variables de correlación</b>	<b>Valor</b>	<b>Gl</b>	<b>Significancia</b>
Limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público	51.461	18	0.000
Delitos contra la administración pública			

Fuente. Base de datos (Elaboración propia)

#### **Análisis.**

En la presente tabla, se analiza la relación entre las limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público y delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018; donde el valor calculado de Chi cuadrado es de 51.461 para 18 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que con una probabilidad de error menor al 5% se admite las limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público se relaciona con los delitos contra la administración pública. Se rechaza la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.

## **CAPÍTULO V**

### **DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

#### **4.3. PRESENTAR LA CONTRATACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.**

##### **A. Contratación con la formulación del Objetivo General**

En esta parte del estudio se van a reiterar los puntos más relevantes de los hallazgos, con ello se podrá dar mayor validez a nuestros resultados obtenidos y se hará la contrastación con otros resultados de estudios de diferentes autores que son afines al tema de la presente investigación.

El objetivo general planteado en la presente tesis fue “determinar las limitaciones del Ministerio Público relacionados en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018”; de acuerdo con lo obtenido en la Tabla 07, resultó que un 82.9%(29) de fiscales encuestados consideran que sí existe limitantes en el Ministerio Público durante la investigación de delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores Públicos de la región Huánuco y, un 17.1%(6) de la muestra considera que no existen limitaciones. Por otro lado, de los resultados obtenidos de la Tabla 23, el valor calculado de Chi cuadrado es de 91.729 para 48 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que con una probabilidad de error menor al 5% se admite que las limitaciones del Ministerio Público se relaciona con los delitos contra la administración publica, datos que al ser comparados con lo sostenido por Sanchez Bautista, (2017) en la tercera conclusión de su tesis titulada ““Deficiencias funcionales del Ministerio Público que afectan el Derecho de acceso a la Justicia en el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en Chiclayo, 2016”, en la que sostiene que el Ministerio Público, es el responsable de la investigación previa al proceso judicial, el que debe realizar de manera efectiva y eficiente sus acciones, las que serán técnica y científicamente idóneas a fin de obtener los indicios probatorios precisando las circunstancias en que se produce un hecho jurídico, haciendo razonable y justa la interposición de la acción penal, superando obstáculos y deficiencias en sus funciones que

imposibilite que los tribunales de justicia lleven a cabo el proceso judicial que corresponde a la violación de los derechos fundamentales de la persona humana, materializándose así el derecho de acceso a la justicia de la(s) víctima(s) y de sus familiares, da como resultado que las limitaciones del Ministerio Público se relacionan con los delitos contra la administración pública, hecho que nos permite rechazar la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.

Una de las atribuciones constitucional del Ministerio Público contempladas en el numeral 6) del artículo 159° de la Constitución Política del Perú, es el de ejercitar la acción penal, es decir, dirigir las investigaciones de los delitos y faltas que pongan el peligro o que vulneren bienes jurídicos tutelados por el Estado. De tal razón que del artículo IV del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, se derive que a esta institución se le considere como el “Titular de la acción penal”, y como tal, el deber de la carga de la prueba, es decir, el deber de obtener todos los elementos de convicción objetivos que puedan ser elevados a la categoría de medios probatorios para demostrar la responsabilidad penal o la inocencia de los investigados.

Así, como se señala en el informe “Fiscales y Defensores en la Agenda Democrática propuesta para el fortalecimiento del Ministerio Público”, el Ministerio Público posee una misión política esencial. Es una Entidad fundamental para el buen funcionamiento de la justicia y la vigencia de los derechos fundamentales, su funcionamiento es importante para el mantenimiento del orden jurídico en el país. En ese sentido, como Institución encargada de la función de perseguir las acciones delictivas, debe contar con todos los instrumentos necesarios y eficientes, así como con los recursos humanos y materiales adecuados para el apoyo de su función, tratando, en la medida de lo posible, sino de eliminar, reducir las limitaciones que pueda tener tanto la institución como los fiscales en esta importante labor socio jurídica.

### **Contrastación con el primer objetivo específico:**

El primer objetivo específico de la presente tesis fue la siguiente: “Establecer si los recursos son limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018”, de acuerdo con lo obtenido en la Tabla N° 02 se evidencia que un total de 88.6%(31) de Fiscales encuestados consideran que los recursos con que cuentan son una limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores Públicos en la Región Huánuco; por otro lado, un total de 11.4%(4) de fiscales encuestados consideran que no lo es. Por lo tanto, de los resultados obtenidos en la Tabla 24 tenemos que el valor calculado de Chi cuadrado es de 59.336 para 24 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que con una probabilidad de error menor al 5% se admite que las limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público se relacionan con los delitos contra la administración pública, datos que al ser comprobados con lo sostenido por Sanchez Bautista, (2017), quien en la segunda conclusión de su tesis titulada “Deficiencias funcionales del Ministerio Público que afectan el Derecho de acceso a la Justicia en el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en Chiclayo, 2016”, menciona que no es suficiente que los medios, recursos e instituciones estén debidamente formalizados, como es el caso del Ministerio Público, sino que estos sean efectivos y en la práctica aseguren el acceso a la justicia, con oportunidad, efectivizando el derecho de las víctimas y sus familiares, para iniciar ex officio y sin dilaciones, una investigación eficaz, imparcial y efectiva utilizando los medios legales a su alcance para determinar la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables, da como resultado que las limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público se relacionan con los delitos contra la administración pública, hecho que nos permite rechazar la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la b administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.

El artículo 321° del Nuevo Código Procesal Penal establece que al finalidad de la Investigación Preparatoria es reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permital al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado prepara su defensa. El numeral 2) del mismo artículo establece que ciertas instituciones y organismos, tales como la Policía Nacional del Perú y sus órganos especializados en criminalística, así como la Dirección Policial Contra la Corrupción, Universidades, Institutos y etc., estan en la obligación de prestar el apoyo necesario al fiscal. Este apoyo puede ser físico, como por ejemplo en un acto de allanamiento domiciliario, una constatación de los hechos o reconstrucción de los hechos; pero también puede ser apoyo científico, técnico o artístico materializado en los informes periciales, esto puede entenderse como apoyo en recursos como medios probatorios de cargo y de descargo.

En ese sentido, el apoyo que brindan estas instituciones deben ser lo más exactos posibles, pues se trata de determinar si las conductas humanas en investgación constituyen o no delitos o faltas y, depende de ello, corresponderá ver si se aplica o no las diferentes penas que nuestro ordenamiento juridico establece.

### **Contrastación con el segundo objetivo específico:**

El segundo objetivo específico de la presente tesis fue: “Examinar si los peritos del Ministerio Público son una limitante en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018”, de acuerdo con lo obtenido en la Tabla 04, tenemos que un 88.6%(31) de los fiscales encuestados referían que los Peritos con que laboran, son una limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; y, solo un 11.4%(4) consideran que no lo son. En vista de ello, y conforme a lo obtenido con la Tabla 25, tenemos que el valor calculado de Chi cuadrado es de 55.795 para 24 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que con una probabilidad de error menor al 5% se admite las limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público se relaciona con los delitos contra la administración pública, datos que al ser comprobados con lo sostenido por Alarcón Untón, (2018) quien en la tercera conclusión de su tesis titulada “El peritaje contable laboral y su contribución en la Administración de Justicia de la Corte Superior de Lima Metropolitana 2016”, señala que el desarrollo eficiente de las fases del peritaje contable laboral garantiza que la investigación de la prueba material y otros objetivos demuestren objetivamente la realidad de los hechos, materia de controversia contribuyendo de esta manera a la obtención de un dictamen de calidad y, complementariamente, en su cuarta conclusión sostiene que la profesionalización permanente y continua de los peritos contables laborales incrementan sus conocimientos en el aspecto legal y experiencia pericial, para la demostración técnica y científica de las pericias. El mismo que a su vez, comprobado con lo sostenido por Silva Cayao, (2016) quien en la primera conclusión de su tesis titulada “El peritaje contable como aporte científico en la solución de hechos controversiales en la Fiscalía Anticorrupción de la Región San Martín, período 2012”, señala que se ha determinado que la efectividad de la prueba pericial contable depende del nivel de conocimiento y la capacitación del profesional perito contable, así como de la experiencia que este tiene dentro de la especialidad, que le permitan ilustrar los puntos o temas específicos para los

que ha sido nombrado evitando incursionar en hechos que no son de su competencia, influyendo de manera positiva en la solución de hechos controversiales de los procesos judiciales presentados en el año 2012, da como resultado que las limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público se relacionan con los delitos contra la administración pública, hecho que nos permite rechazar la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones en cuanto a los peritos del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.

En ese sentido, es necesario tener presente la gran relevancia que los informes periciales representan para el sistema de Administración de Justicia y más importante aún, para el apoyo de la persecución de la acción penal por parte del Ministerio Público, pues de la pericia, y más concretamente el informe pericial, como instrumento de prueba, dependerá la corroboración y acreditación de la antijuricidad de los hechos típicos y más aún, de la determinación de la culpabilidad de los agentes activos. En tal sentido, como señala Peñalva, (2017) La prueba pericial tiene una finalidad específica, que la distingue de todos los demás medios de prueba, pues resulta ser un medio de prueba que proporcionar al juez aquellos conocimientos científicos o tecnológicos no jurídicos, necesarios para poder resolver la controversia que se le ha planteado (párraf. 07). De tal forma que los profesionales sobre quienes recae tal labor científica o técnica, deben estar lo suficientemente preparados para aplicar el conocimiento que requiera para el impulso del proceso judicial.



### **Contrastación con el tercer objetivo específico:**

El tercer objetivo específico de la presente tesis fue: “Evaluar si la contratación de personal del Ministerio Público son una limitante en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco” de acuerdo con lo obtenido en la Tabla 06, tenemos que un [82.9%(29)] de fiscales encuestados afirman que el personal con que cuenta el Ministerio Público, son una limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco; por otro lado, solo un 17.1%(6) 3consideran que no lo son. De igual forma, de lo obtenido en Tabla 26, tenemos que el valor calculado de Chi cuadrado es de 51.461 para 18 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que con una probabilidad de error menor al 5% se admite las limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público se relaciona con los delitos contra la administración pública, datos que al ser comprobados con lo sostenido por Monar Luna, (2018) quien en la segunda conclusión de su tesis titulada “Factores que limitan la productividad laboral de los trabajadores del Área de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público, sede Lima – 2018”, sostiene que del primer objetivo específico, el indicador predominante que limita la productividad laboral es la falta de capacitación, debido a que la institución (el Ministerio Público) no prioriza el requerimiento (contratación) de personal para mejorar su producción y tampoco puede gestionar bien los recursos económicos para solicitar más personal para la institución, da como resultado que la falta de contratación de personal presenta en para el Ministerio Público en la investigación de delitos contra la Administración Pública, hecho que nos permite rechazar la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.

La función constitucional de la acción de la persecución penal atribuida por la Constitución Política del Perú al Ministerio Público, amerita que esta institución no solo goce de autonomía, sino también que los Fiscales que

conforman su estructura dispongan de los medios necesarios para la eficiente investigación no solo en los delitos Contra la Administración Pública, sino de todos los delitos que pongan en peligro o que lesionen los bienes jurídicos tutelados por el Estado, esto incluye, también, la buena gestión de los Recursos Humanos. Pues, como señala Vilca Pinche, (2019), quien en su investigación ha determinado que la gestión de recursos humanos incide directamente en la misión institucional del Ministerio Público como ente investigador; mediante las políticas de recursos humanos, estrategias de recursos humanos, remuneraciones de recursos humanos, productividad de los recursos humanos y la auditoría del desempeño de los recursos humanos. En tal sentido, los Fiscales y el Ministerio Público, deben contar con el personal con funciones y atribuciones especiales que los ayuden en la persecución de la acción penal.

## CONCLUSIONES

**PRIMERO.** Al establecer los recursos del Ministerio Público como limitante, se halló que los fiscales, en su gran mayoría 88.6%(31), considera que sí es una limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores, al describirlo se encontró que un 74.3%(26) de los mismos, se han visto en la necesidad de ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares por defectos en la realización de los informes periciales de los peritos adscritos al REPEJ de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, así mismo en igual proporción 74.3%(26), refieren que durante la etapa de Investigación Preparatoria por Delitos Contra la Administración Pública, los informes periciales de los peritos adscritos al REPEF del Distrito Fiscal de Huánuco, no le han permitido reunir elementos de convicción.

**SEGUNDO.** En el estudio también se examinó a los peritos del Ministerio Público como limitante, se comprobó que la gran mayoría de fiscales 88.6%(31), afirman que sí es una limitante en la investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios y Servidores, así mismo al describirlo, un 77.1%(27) de los fiscales consideran que los peritos contables, económicos o grafo técnico adscritos a la Dirección de la Policía Contra la Corrupción, con los que ha podido trabajar, no se encuentran lo suficientemente capacitados para emitir informes periciales seguidos en procesos Contra la Administración Pública, así como también un 71.4%(25) afirman que el apoyo científico y técnico de los informes periciales económicos, no le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la responsabilidad penal de los acusados por delitos contra la administración pública.

**TERCERO.** En la evaluación de la contratación de personal del Ministerio Público son una limitante en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, se demostró que los fiscales, en su gran mayoría 82.9%(29), consideran que si es una limitante, así también al describirlo, se encontró que un 68.6%(24) de los fiscales afirman que las funciones consignadas en el MOF del Ministerio Público respecto de los Asistentes Administrativos, no

son suficientes y adecuados para coadyuvar en la investigación seguidos por Delitos Contra la Administración Pública, el 65.7%(23) afirman que las funciones consignadas en el MOF respecto de los Asistentes en Función Fiscal, no son suficientes y adecuadas para coadyuvar en investigaciones seguidos por Delitos Contra la Administración Pública.

**CUARTO.** Contrastando las variables en estudio, “limitaciones del Ministerio Público y delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018”; donde el valor calculado de Chi cuadrado es de 91.729 para 48 grados de libertad y significancia de 0.000 ( $p < 0.05$ ); por lo que se rechaza la hipótesis de independencia y se determina que existen limitaciones del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018.

## RECOMENDACIONES

**PRIMERO.** Respecto a los recursos como limitantes en la investigación de delitos contra la administración pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben promover una constante fiscalización de la producción científica o técnica principalmente, de los peritos adscritos al REPEJ y REPEF, o determinar cuáles son los defectos de los informes periciales que hizo que un 74.3%(26), de fiscales se hayan visto en la necesidad de ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares por defectos en la realización de los informes periciales de los peritos adscritos al REPEJ de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y que un 74.3%(26) de fiscales refieran que durante la etapa de Investigación Preparatoria por Delitos Contra la Administración Pública, los informes periciales de los peritos adscritos al REPEF del Distrito Fiscal de Huánuco, no les han permitido reunir elementos de convicción.

**SEGUNDO.** Respecto a los peritos como limitante en la investigación de delitos contra la administración pública, el Ministerio Público y la Dirección Policial Contra la Corrupción, deben promover capacitaciones constantes a los peritos adscritos a su dependencia o determinar cuáles son los defectos en los mismos que llevó a un 77.1%(27) de fiscales a considerar que los peritos contables, económicos o grafo técnico adscritos a la Dirección de la Policía Contra la Corrupción, con los que ha podido trabajar, no se encuentran lo suficientemente capacitados para emitir informes periciales seguidos en procesos Contra la Administración Pública y, que 71.4%(25) de fiscales afirmen que el apoyo científico y técnico de los informes periciales económicos, no le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la responsabilidad penal de los acusados por delitos contra la administración pública.

**TERCERO.** Respecto al personal de despacho fiscal como limitante en la investigación de delitos contra la administración pública, el Ministerio Público, principalmente, debe realizar una revisión, y posterior modificación y/o reforma del marco normativo que regula la función de los Asistentes en Función Fiscal y de los Asistentes Administrativo del despacho de la Fiscalía Anticorrupción, esto es, Manual de Organizaciones y Funciones, la Resolución de Gerencia General No. 274-98-MPFN-GG, entre otros, para

determinar las causas para que un 68.6%(24) afirman que las funciones consignadas en el MOF del Ministerio Público respecto de los Asistentes Administrativos, no son suficientes y adecuados para coadyuvar en la investigación seguidos por Delitos Contra la Administración Pública o para que el 65.7%(23) de fiscales afirmaran que las funciones consignadas en el MOF respecto de los Asistentes en Función Fiscal, no son suficientes y adecuadas para coadyuvar en investigaciones seguidos por Delitos Contra la Administración Pública.

**CUARTO.** El Ministerio Público y las Entidades responsables deben reducir la existencia de limitaciones del Ministerio Público relacionadas con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco en el 2018, pues su presencia reduce de manera significativa el actuar de los fiscales en la persecución de la acción penal por los delitos contra la administración pública.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alarcón Untón, J. A. (2018). *El peritaje contable laboral y su contribución en la Administración de Justicia de la Corte Superior de Lima Metropolitana 2016*. Lima: Universidad San Martín de Porres. Obtenido de [http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/3843/alarcon\\_uja.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/3843/alarcon_uja.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
2. Monar Luna, K. D. (2018). *Factores que limitan la productividad laboral de los trabajadores del Área de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público, sede Lima - 2018*. Lima: Universidad César Vallejo - Escuela de Posgrado. Obtenido de [http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/31092/Katherine\\_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/31092/Katherine_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
3. Peñalva, I. (2017). La importancia del Informe Pericial en los procesos judiciales. *Cooperación y Ciudadanía - Asesoramiento para fincas e inmuebles*. Obtenido de <https://www.cooperacionyciudadania.es/la-importancia-del-informe-pericial-los-procesos-judiciales/>
4. Sanchez Bautista, N. J. (2017). *Deficiencias funcionales del Ministerio Público que afectan el Derecho de Acceso a la Justicia en el Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en Chiclayo, año 2016*. Pimentel - Perú: Universidad Señor de Sipán. Obtenido de <http://servicios.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/4175/SANCHEZ%20BAUTISTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
5. Silva Cayao, Y. (2016). *El peritaje contable como aporte científico en la solución de hechos controversiales en la Fiscalía Anticorrupción de la Región San Martín, período 2012*. Tarapoto: Universidad Nacional de San Martín. Obtenido de <http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/1316/ITEM%4011458-1034.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
6. Vilca Pinche, W. (2019). *La gestión de Recursos Humanos como plataforma para la misión Institucional del Ministerio Público*. Lima: Universidad Federico Villareal. Obtenido de <http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3992/VILCA%20PINCHE%20WUISTON%20%20MAESTRIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
7. Cabrera Cabrera, M. O. (2010). Algunos líenas sobre el rol del Asistente en Función Fiscal y Asistente Administrativo en el Nuevo Modelo Procesal Penal. San Martín: Fiscalía Corporativa Nueva Cajamarca. Obtenido de <https://www.monografias.com/trabajos-pdf4/rol-del-asistente-funcion-fiscal-nuevo-modelo-procesal-penal/rol-del->

8. Chanamé Orbe, R. (2009). Diccionario Jurídico, Término y Conceptos. Lima: ARA EDITORES.
9. Chanjan Document, R., Solis Curi, E., & Puchuri Torres, F. C. (2018). Sistema de Justicia, Delitos de Corrupción y Lavado de Activos. Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú. Obtenido de <https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2019/03/01173032/sistema-de-justicia-delitos-web-2.pdf>
10. Coello Huamán, W. (2019). El uso de la pericia contable en los delitos de Colusión y Peculado en la Fiscalía Corporativa Anticorrupción del Callao 2015-2017. Lima: Universidad Privada Norbert Wiener.
11. Defensoría del Pueblo. (2013). Guía práctica para la denuncia ciudadana contra actos de corrupción y otras faltas contra la ética pública. Lima: Defensoría del Pueblo. Obtenido de <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Guia-IMPRESA-2.pdf>
12. Definición y Estructura Típica del Delito de Peculado - Art. 378° C.P., Acuerdo Plenario N° 4-2005/CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 30 de Setiembre de 2005). Obtenido de [https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/03049b004bbf7ccf852cdd40a5645add/acuerdo\\_plenario\\_04-2005\\_CJ\\_116.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=03049b004bbf7ccf852cdd40a5645add](https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/03049b004bbf7ccf852cdd40a5645add/acuerdo_plenario_04-2005_CJ_116.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=03049b004bbf7ccf852cdd40a5645add)
13. El Mundo Financiero. (2018). ¿Qué es un perito económico y cuándo es requerido? El Mundo Financiero.Com. Obtenido de <https://www.elmundofinanciero.com/noticia/78670/economia/que-es-un-perito-economico-y-cuando-es-requerido.html>
14. Flores Polo, P. (2002). Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Grijley.
15. Gabinete Profesional de Peritos Judiciales. (2020). Gabinete Profesional de Peritos Judiciales. Obtenido de Gabinete Profesional de Peritos Judiciales: <https://www.peritos-judiciales.com/index.php/tipos-de-peritaje/peritaje-economico>
16. Gaspar Chirino, A. (2016). Principales Aspecto de los Delitos de Corrupción de Funcionarios. Lima: Academia de la Magistratura. Obtenido de <http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/683/MANUAL.pdf?sequence=4&isAllowed=y>



17. Laboratorio Grafotécnico Orta Poleo. (27 de Abril de 2008). Laboratorio Grafotécnico Orta Poleo. Obtenido de Laboratorio Grafotécnico Orta Poleo:  
[http://grafotecnica.com/grafotecnica/index.php?option=com\\_content&view=article&id=177:que-es-la-grafotecnica-o-pericia-caligrafica&catid=8&Itemid=118](http://grafotecnica.com/grafotecnica/index.php?option=com_content&view=article&id=177:que-es-la-grafotecnica-o-pericia-caligrafica&catid=8&Itemid=118)
18. Martínez Huamán, R. (2015). Cohecho Pasivo Propio - Análisis del artículo 393 del Código Penal. 01 - 19. Obtenido de [http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a\\_20191208\\_03.pdf](http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20191208_03.pdf)
19. Montoya Vivanco, Y. (2015). Manual sobre Delitos contra la Administración Pública. Lima: Open Society Foundations. Obtenido de <https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/04/Manual-sobre-Delitos-contr-la-Administraci%C3%B3n-P%C3%BAblica.pdf>
20. Pariona Arana, R. (28 de Febrero de 2016). El delito de Abuso de Autoridad. Consideraciones Dogmáticas y Político - Criminales. THEMIS 68/ Revista de Derecho, 91 - 100. Obtenido de [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/15585-Texto%20del%20art%C3%ADculo-61868-1-10-20161007%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/15585-Texto%20del%20art%C3%ADculo-61868-1-10-20161007%20(1).pdf)
21. Peña Cabrera Freyre, A. R. (2009). Derecho Penal, Parte Especial - Tomo V. Lima : IDEMSA.
22. Silva Cayao, Y. (2016). El Peritaje Contable como aporte científico en la solución de hechos controversiales en la Fiscalía Anticorrupción de la Región San Martín, período 2012. Tarapoto: Universidad Nacional de San Martín.
23. Torres Pachas , D., Rodriguez Vásquez , J., & Guimaray Mori, E. (s.f.). La Conducta Prohibida en el Delito de Concusión. Comentario Académico, 13 - 14. Obtenido de <https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/LA-CONDUCTA-PROHIBIDA.pdf>
24. Torres Vasquez, A. (2015). Introducción al Derecho - Teoría General del Derecho. Lima: Instituto Pacífico.

# ANEXOS

**ANEXO 1**  
**MATRIZ DE CONSISTENCIA**

“Limitaciones del Ministerio Público en la Investigación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios y servidores públicos en la Región Huánuco, 2018”

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLE	INDICADORES	METODOLOGÍA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
PROBLEMA GEBERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPOTESIS GENERAL	VARIABLE INDEPENDIENTE		INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018?	Determinar las limitaciones del Ministerio Público relacionados en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.	Existen limitaciones del Ministerio Público que se relacionan con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018.	Limitaciones del Ministerio Público	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pericia eficiente y célere, ampliación de plazo, recaudo de elementos por parte de la pericia contable</li> <li>• Peritos de la Dirección Policial Contra la Corrupción y peritos adscritos al REPEJ y REPEF; Informes periciales contables, económicos, grafo técnicos, capacitación de peritos</li> <li>• Labor administrativa de los asistentes en Función Fiscal y Asistentes Administrativos, Personal capacitado Personal idóneo para las investigaciones</li> </ul>	➤ Tipo de investigación: Documental ➤ Enfoque: Cuantitativo ➤ Alcance o nivel: Descriptivo - Correlacional ➤ Diseño: No experimental, transversal correlacional
PROBLEMAS ESPECIFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPOTESIS ESPECIFICAS	VARIABLE DEPENDIENTE		INSTRUMENTO Y TECNICAS
¿Los recursos son limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y	Establecer si los recursos son limitaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración	Hi1: Existen limitaciones en cuanto a los recursos del Ministerio Público que se relacione con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y	Delitos Contra la Administración Pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características del delito</li> <li>• Bien jurídico protegido</li> </ul>	<b>Técnicas:</b> La técnica empleada fue dos encuestas para describir las limitaciones del ministerio público y para poder describir los delitos contra la administración pública.

<p>los servidores en la Región de Huánuco, 2018?</p> <p>e) ¿Los peritos son una limitante del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018?</p> <p>f) ¿El Personal es una limitación del Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018?</p>	<p>pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018</p> <p>Examinar si los peritos del Ministerio Público son una limitante en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y los servidores en la Región de Huánuco, 2018.</p> <p>Evaluar si la contratación de personal del Ministerio Público son una limitante en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco.</p>	<p>servidores en la Región de Huánuco, 2018</p> <p><b>Hi2:</b> Existen limitaciones en cuanto a los peritos con que cuenta el Ministerio Público que se relacione con la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores de la Región Huánuco, 2018.</p> <p><b>Hi3:</b> Existen limitaciones en la contratación de personal del Ministerio Público que se relaciona con la investigación de delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios o servidores públicos de la Región Huánuco, 2018.</p>			<p><b>Instrumentos:</b> Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario de limitaciones del Ministerio Público y un cuestionario de delitos contra la Administración Pública.</p> <p><b>POBLACIÓN Y MUESTRA</b></p> <p><b>Población:</b> Estuvo conformada por 35 fiscales del Ministerio Público pertenecientes a la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios del distrito Fiscal de Huánuco.</p> <p><b>Muestra:</b> La muestra estuvo determinada por la fórmula que se utiliza para variables cualitativas o para proposiciones.</p>
--	---	---	--	--	---



**UDH**  
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ANEXO 02. Solicitud de autorización de aplicación de



SOLICITO: Permiso para realizar encuesta de trabajo de investigación

DRA. ANA MARÍA CHÁVEZ MATOS.  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DE HUÁNUCO.



Yo, MARVIN JUAN VEGA RAMOS, identificado con DNI Nº 48321368, con domicilio en el Barrio Arcopunco S/N – Distrito de Ambo, Provincia y Departamento de Huánuco. Ante Ud. Respetuosamente me presento y expongo:

Que, habiendo culminado la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Huánuco, solicito a Ud. permiso para realizar encuesta de trabajo de investigación (tesis), en su Institución específicamente en la "Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada En Delitos De Corrupción De Funcionarios De Huánuco" la misma que consistirá en realizar un cuestionario de preguntas a los Fiscales y Asistentes de la mencionada Institución cuyo tema es "LIMITACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS Y LOS SERVIDORES EN LA REGIÓN HUÁNUCO , 2018", que tiene por finalidad a mi persona optar el grado de Abogado.

POR LO EXPUESTO:

Sin otro particular me despido ante Ud.  
esperando que acceda por ser de justicia.

Huánuco, 05 de marzo de 2020.

Atentamente;

Marvin Juan Vega Ramos  
DNI. Nº 48321368



**UDH**  
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**



### **ANEXO 03. Consentimiento informado**

*Elaborado en base al artículo 15 de la resolución 8430 de 1993 del*

*Ministerio de Protección social.*

La presente investigación es conducida por el estudiante de pregrado Marvin Juan Vega Ramos de la Universidad de Huánuco. El objetivo del estudio es determinar las limitaciones del Ministerio Público relacionados en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018

Si su persona acepta en participar en la presente investigación, se compromete a responder un cuestionario de 11 preguntas. Este procedimiento no superará los 30 a 45 minutos de su tiempo. Las respuestas al cuestionario serán guardadas y serán de manera anónima, de modo que el investigador pueda llenar la base de datos con sus respuestas.

Su participación es voluntaria. Toda información tendrá carácter confidencial y tendrá otro fin que los objetivos de la investigación. Las respuestas al cuestionario serán codificadas con un número de identificación.

Si posee dudas sobre el proyecto, está en la libertad de formular las preguntas necesarias. Así también, podrá renunciar al proyecto sin importar la etapa de esta. Si alguna de las preguntas del cuestionario le genera incomodidad, está facultado para hacerlo saber al investigador o de no responderlas

Estamos muy agradecidos con su participación.

Acepto participar voluntariamente en el desarrollo de esta investigación, bajo la dirección del estudiante de pregrado Marvin Juan Vega Ramos de la Universidad de Huánuco. De igual forma, fui informado(a) de que el objetivo del estudio es determinar las limitaciones del Ministerio Público relacionados en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores en la Región de Huánuco, 2018

Se me indicó que dispongo de aproximadamente 30 a 45 minutos para responder las preguntas del cuestionario.

Tengo conciencia de que la información proporcionada por mi persona es estrictamente confidencial y no tendrá fines ajenos a los objetivos de la investigación. Conozco que estoy facultado para formular las preguntas necesarias sobre el proyecto en cualquier momento y puedo retirarme del mismo cuando si lo decida. De tener alguna pregunta sobre mi participación en este estudio puedo contactar al investigador Marvin Juan Vega Ramos, al teléfono 948447673.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nombre del participante

Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma del participante



Nº encuesta: .....

Fecha: / /

**ANEXO 04**

**CUESTIONARIO DE LIMITACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO**

**TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:** Limitaciones del ministerio público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.

**INSTRUCCIONES.** Estimado(a) trabajador(a) del Ministerio Público, a continuación, se le presenta una serie de preguntas, lea detenidamente y con atención, tómese el tiempo que sea necesario luego marque con un aspa (X), las respuestas que crea usted conveniente.

Es necesario precisar que el presente cuestionario, es de utilidad exclusiva para la investigación y es de carácter anónimo y confidencial.

<b>Dimensión: Recursos</b>			
<b>Nº</b>	<b>Ítems</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>
<b>01</b>	¿En las Diligencias Preliminares que su despacho ha aperturado para investigar delitos Contra la Administración Pública, la pericia de los profesionales de la Dirección Policial Contra la Corrupción del Distrito Fiscal de Huánuco, le ha sido eficiente y célere para registrar los actos urgentes e inaplazables?		
<b>02</b>	¿Durante el ejercicio de su función, se ha visto en la necesidad de ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares por defectos en la realización de los informes periciales de los peritos adscritos al REPEJ de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, en procesos contra delitos Contra la Administración Pública?		
<b>03</b>	¿Durante la etapa de Investigación Preparatoria por Delitos Contra la Administración Pública, los informes periciales de los peritos adscritos al REPEF del Distrito Fiscal de Huánuco, le han permitido reunir elementos de convicción, principalmente de cargo?		
<b>04</b>	¿En el ejercicio de su función, se le han presentado situaciones en las que, luego de formular Acusación Fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria dispuso sobreseer el caso por defectos y deficiencias de la pericia contable que imposibilitaba acreditar la responsabilidad penal del acusado?		
<b>Dimensión: Peritos</b>			
<b>05</b>	¿El apoyo científico y técnico de los Informes Periciales Contables, como medio de prueba, le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la responsabilidad penal de los acusados por delitos contra la administración pública?		
<b>06</b>	¿El apoyo científico y técnico de los informes periciales económicos, le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la responsabilidad penal de los acusados por delitos contra la administración pública?		
<b>07</b>	¿El apoyo científico y técnico de los informes periciales grafo técnico, le han resultado suficiente para corroborar sus investigaciones sobre la individualización del o los posibles autores de la comisión de delitos Contra la Administración Pública?		
<b>08</b>	¿Considera que los peritos contables, económicos o grafo técnico adscritos a la Dirección de la Policía Contra la Corrupción, con los que ha podido trabajar, se encuentran lo suficientemente capacitados para emitir informes periciales seguidos en procesos Contra la Administración Pública?		
<b>Dimensión: Personal</b>			

<b>09</b>	¿Considera que las funciones consignadas en el MOF respecto de los Asistentes en Función Fiscal, son suficientes y adecuadas para coadyuvar en investigaciones seguidos por Delitos Contra la Administración Pública?		
<b>10</b>	¿Considera que las funciones consignadas en el MOF del Ministerio Público respecto de los Asistentes Administrativos, son suficientes y adecuados para coadyuvar en la investigación seguidos por Delitos Contra la Administración Pública?		
<b>11</b>	¿Considera que la participación del personal de su despacho es idónea para coadyuvar en la labor fiscal y culminar eficazmente las investigaciones por delitos contra la Administración Pública dentro de un plazo razonable?		

<b>Valoración</b>	<b>Limita</b>	<b>No limita</b>
Recursos	≤ 3	4
Peritos	≤ 3	4
Personal calificado	≤ 2	3





Nº encuesta: .....

Fecha: / /

**ANEXO 05**

**CUESTIONARIO DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

**TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:** Limitaciones del ministerio público en la investigación de los delitos contra la administración pública cometidos por Funcionarios y Servidores en la Región Huánuco, 2018.

**INSTRUCCIONES.** Estimado(a) trabajador(a) del Ministerio Público, a continuación, se le presenta una serie de preguntas, lea detenidamente y con atención, tómese el tiempo que sea necesario luego marque con un aspa (X), las respuestas que crea usted conveniente.

Es necesario precisar que el presente cuestionario, es de utilidad exclusiva para la investigación y es de carácter anónimo y confidencial.

<b>VARIABLE: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>			
<b>DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS</b>			
<b>Sección I: Abuso de Autoridad</b>			
Subcategoría	Items	Criterios de Validación	
		Sí	No
Características del delito	¿En este delito, el funcionario público aparte de tener atribuciones, debe estar activo en el ejercicio de su función?		
	¿El sujeto de la acción, necesariamente es un servidor público o funcionario del Estado?		
	¿El término "acto arbitrario" significa que lo dispuesto por el sujeto activo sea contrario a las normas legales que rigen el cargo que ostenta?		
	¿Para la consumación de este delito, amerita que el acto u orden arbitrario emitido por el funcionario, cause daño al sujeto pasivo o a un tercero?		
Bien jurídico protegido	¿El bien jurídico protegido, únicamente es el "Correcto y Normal Desarrollo de la Administración Pública"?		
<b>Sección II: Concusión</b>			
Características del delito	¿Este delito puede ser cometido tanto por funcionarios como por servidores públicos?		
	¿El sujeto de la acción, puede ser cualquier persona independientemente de su situación jurídica?		
	¿La finalidad que el funcionario o servidor persigue es este delito es obtener un beneficio patrimonial de manera indebida?		
	¿La consumación de este delito se da con la sola promesa indebida de otorgar un beneficio patrimonial ilícito?		
Bien jurídico protegido	¿El bien jurídico protegido, únicamente es el "Correcto y Normal Desarrollo de la Administración Pública"?		
<b>Sección III: Peculado</b>			
Características del delito	¿El funcionario o servidor público, únicamente puede cometer el delito cuando utiliza o se apropia de bienes de su administración, que le estén confiados por razón de su cargo?		
	¿El sujeto pasivo en este injusto, únicamente es la Entidad como ente de la administración pública, al ver menoscabados sus intereses patrimoniales?		

	¿Para la consumación del delito, existe una forma exclusiva de utilizar o de apropiarse de los caudales?		
	¿La tipicidad subjetiva de este delito, permite que sea reprimible a título “doloso” y “culposo” para el agente?		
Bien jurídico protegido	¿El bien jurídico protegido, únicamente es el “Correcto y Normal Desarrollo de la Administración Pública”?		
<b>Sección IV: Cohecho</b>			
Características del delito	¿La materialización de este delito puede iniciar tanto por parte del funcionario o servidor público, como por parte del administrado o administrador con interés de realizar u omitir un acto en violación de una obligación de la administración pública?		
	¿La “solicitud indirecta” del donativo, promesa, o cualquier otra ventaja o beneficio que realiza el funcionario o servidor público, hace referencia a la participación de un tercero en la comisión del delito?		
	¿La consumación de este delito se presenta con la aceptación del donativo, promesa o cualquiera otra ventaja o beneficio indebido para realizar u omitir un acto funcionar, o de igual forma como consecuencia de ello?		
	¿Puede cometerse este injusto cuando el funcionario o servidor público realiza un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación?		
Bien jurídico Protegido	¿El bien jurídico protegido, únicamente es el “Correcto y Normal Desarrollo de la Administración Pública”?		
<b>Sección V: Negociación incompatible</b>			
Características del delito	¿Este injusto tiene como verbo rector el término “interesar”?		
	¿Este delito, amerita la existencia de un interés indebido sobre un contrato u operación y un interés de obtener un provecho propio o para tercero, por parte del funcionario o servidor público?		
	¿Es un delito especial propio que tutela la transparencia e imparcialidad de los funcionarios y servidores públicos en la toma de decisiones propias?		
	¿El estatus funcional y la relación funcional específica son requisitos típicos de este injusto?		
Bien jurídico protegido	¿El bien jurídico protegido, únicamente es el “Correcto y Normal Desarrollo de la Administración Pública”?		
<b>Sección VI: Tráfico de influencias</b>			
Características del delito	¿El agente de este delito, puede ser un funcionario o servidor público, así como cualquier otra persona independientemente de su situación jurídica?		
	¿Solo puede considerarse “instigador” al tercero “comprador solicitante de influencias” cuando sus actos hayan reforzado la resolución criminal del “vendedor de influencias” mediante influjo psíquico?		
	¿Es un delito de consumación y tentativa?		
	¿Es un delito de enriquecimiento de naturaleza de peligro y de simple actividad?		
Bien jurídico protegido	¿El bien jurídico protegido, únicamente es el “Correcto y Normal Desarrollo de la Administración Pública”?		
<b>Sección VII: Enriquecimiento ilícito</b>			
Características del delito	¿En este delito solo se reprime al funcionario público?		
	¿La declaración jurada de bienes y rentas, es indispensable para encontrar indicios de enriquecimiento ilícito?		
	¿El funcionario o servidor público, únicamente puede cometer el delito haciendo uso y abusando de su cargo?		

	¿La agravación de la pena, responde a la jerarquía del funcionario?		
Bien jurídico protegido	¿El bien jurídico protegido, únicamente es el "Correcto y Normal Desarrollo de la Administración Pública"?		



**ANEXO 06**  
**TOMAS FOTOGRÁFICAS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS**

